

Supremo Poder Judicial de la Federación  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



DE LA NACIÓN

Núm. 59

juicio de amparo

1917

SECCIÓN PRIMERA.

JUICIO DE AMPARO

Se inició en 12 de Septiembre de 1917

Promovido por *Cecilio Montes*

Promovido en su nombre Promoviente, el Lic. Gustavo C. Holmstedt

Autoridades *El Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste y el Jefe*

responsables *Guatemaltecos de la plaza de Mérida*

Tercer perjudicado

Acto reclamado *Orden de proceder, orden de aprehensión y a*

Garantías violadas <sup>garantías de bienes</sup> las de los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución

Suspensión

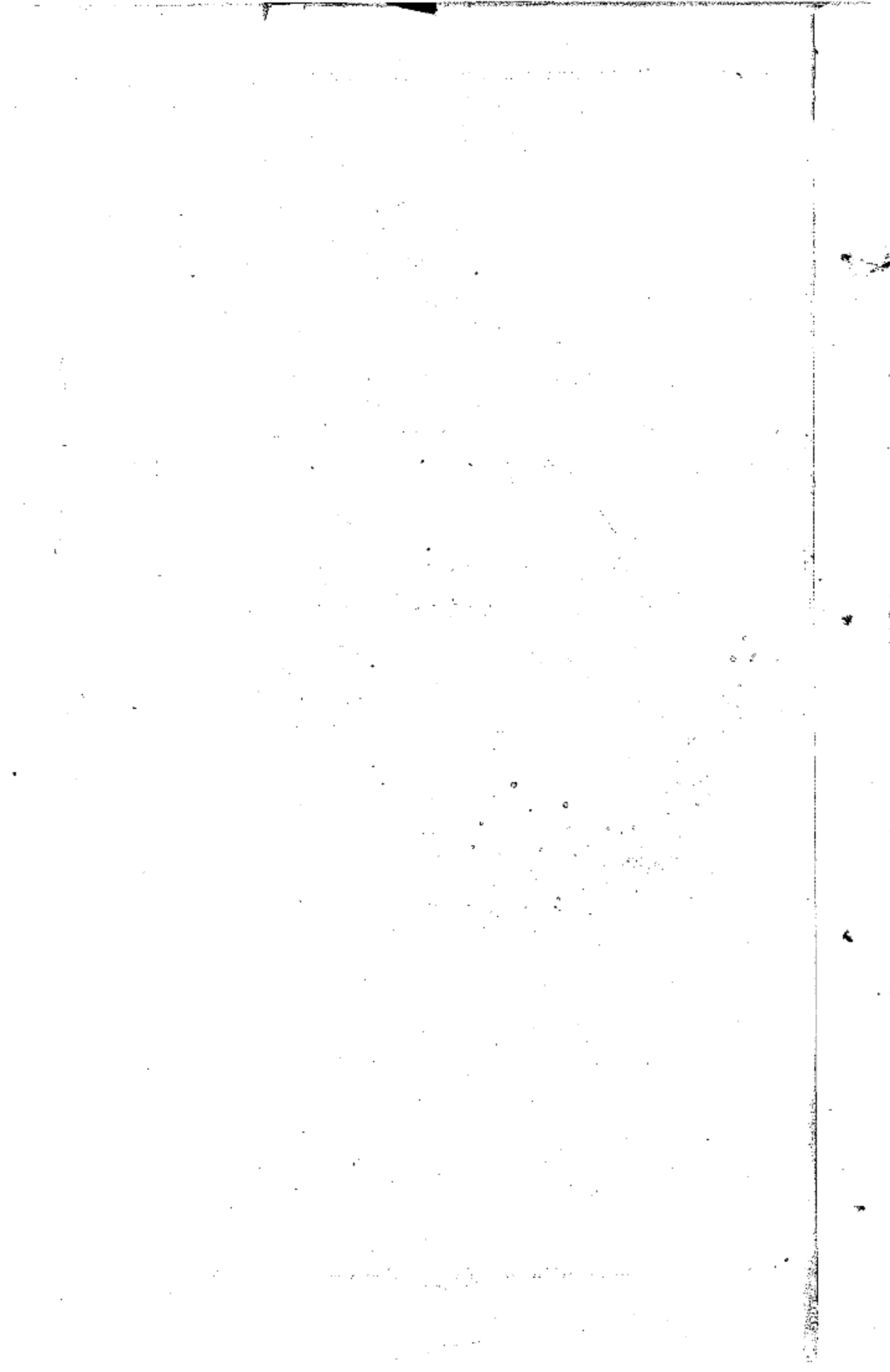
Fecha de la ejecutoria *26 de Septiembre de 1917*

Resolución *Se negó el amparo*

Fecha en que se archiva

Actuario

*Se archiva en el expediente*



# SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DE LOS

## ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

### DEPARTAMENTO DE ARCHIVO.

1.<sup>a</sup> SECRETARIA AUXILIAR.

Año 1917

Núm. 50

Joca al amparo a revisión. número 50

Promovido por Santos Avalino.

Contra actos de l Jefe del Cuerpo de Ejercito del Sureste ; Juez Instancia de Mérida.

Ante el Juez de Distrito de Yucatán.

Fecha en que se dió por concluido

Año

Mes

Día

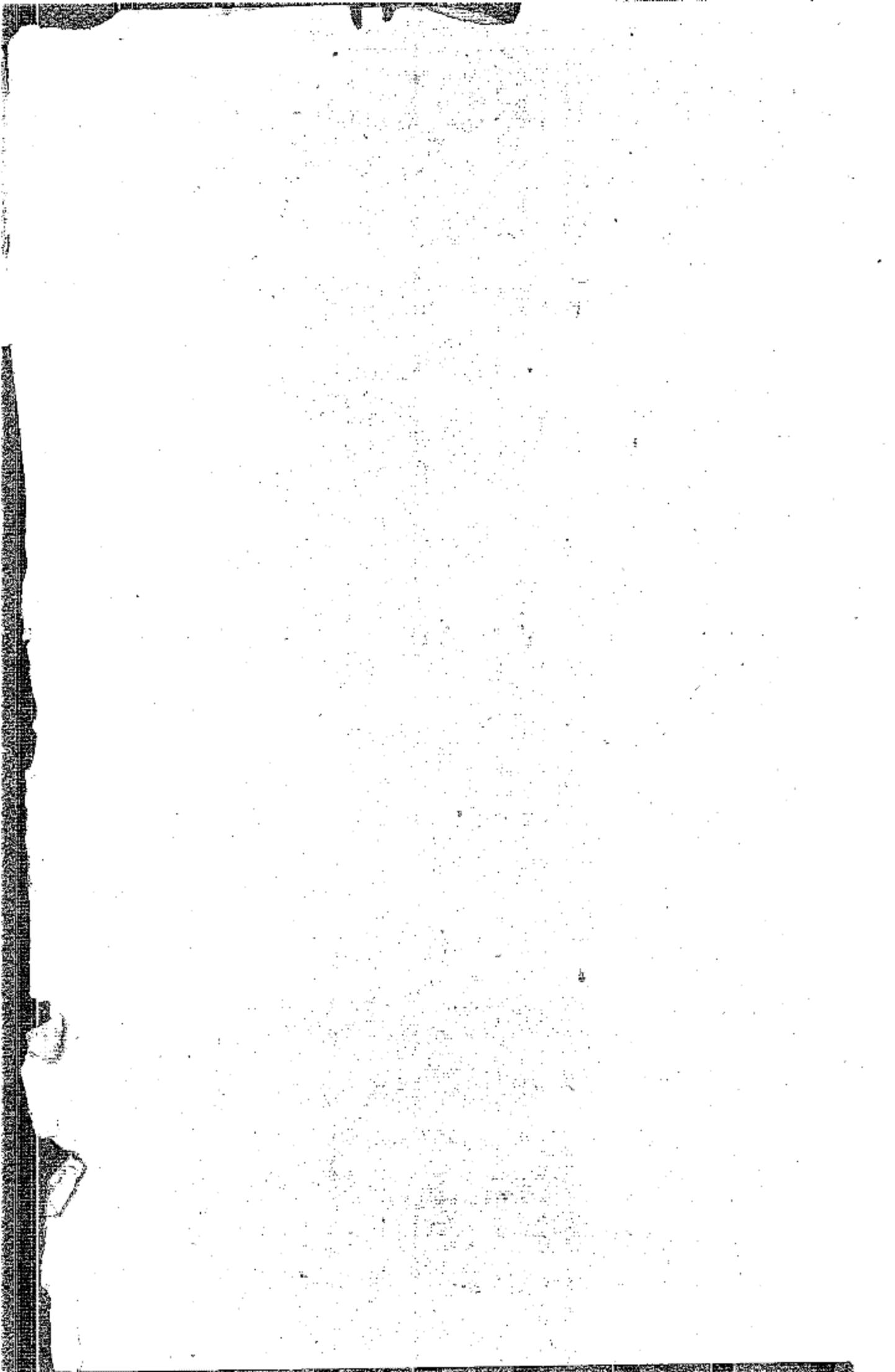
Lugar en que debe encontrarse este expediente:

Sección de la estantería <sup>3</sup> N°

Cajón o cómoda N°

Legajo nóm.

Número de Archivo



Número. 751

Para su revisión, tengo el honor de remitir á Ud, constan-  
te de 47 fejas útiles el juicio de amparo promovido por el  
Licenciado Gustave Melina Font en representación del C. Ave-  
line Montes contra actos del General en Jefe del Cuerpo de  
Ejercito del Sur Este y Coronel Juez Instructor Militar de  
esta Plaza. Así mismo remito á Ud, con cuatro fejas útiles un  
memorial dirigido por el promevente á la H. Corte Suprema de  
Justicia.

Proteste á Ud, mi atenta y distinguida consideración.

Constitución y Reformas.

Mérida, Junio 20 de 1917.

El Juez de Distrito.

*Recibido juntamente con el  
expediente a que se refiere a las  
doce del día diez de Julio de mil  
novecientos diez y siete. Conste.  
Garvía*

1 Ciudadano. Secretario de Acuerdos de la H. Suprema Corte de Justicia.

México. D. F.

... in the ... of the ...  
... of the ... of the ...  
... of the ... of the ...  
... of the ... of the ...  
... of the ... of the ...  
... of the ... of the ...  
... of the ... of the ...  
... of the ... of the ...  
... of the ... of the ...  
... of the ... of the ...

... of the ... of the ...  
... of the ... of the ...  
... of the ... of the ...  
... of the ... of the ...  
... of the ... of the ...



TRIBUNAL PLENO

cuando Pleno del día once de julio de mil novecien-  
tos diez y siete.

Agríquese el escrito que remitió el Licen-  
ciado Gustavo Molina Font. Véase recto al  
Juez; y con fundamento en el artículo 751 del  
Codigo Federal de Procedimientos Civiles se se-  
ñala un termino de ocho dias para que los  
interesados tomen sus apuntes. Fungase como  
parte al Ministerio Público.

Así lo proveyó la Suprema Corte de Justi-  
cia de la Nación, rubricando el C. Presidente. Day  
fe.

*[Signature]*

En doce de julio, para notificar al quepse Tenor e Morita,  
dijo: se da en la sala del Tribunal a las tres de la tarde  
Conste.

*[Signature]*

Con trece de julio notificado al C. Procurador de la Re-  
pública, dijo: que lo oye y designa para que interponga  
en este negocio, al C. Agente Pío Calcedo. Y firmó. Day fe.

*[Signature]*

*[Signature]*

Con trece de julio notificado al Tenor Agente Pío Calcedo,  
dijo: que lo oye y firmó. Day fe.

*[Signature]*

*[Signature]*

Con trece de julio, queda notificado al quepse Tenor e Morita,  
al tenor de la cédula que original se expresa. Conste.

*[Signature]*

El término á que se refiero el acuerdo que antes de  
comienza á correr en fecha de Julio actual y ter-  
mina en veintitres del mismo. Conste.

*García Villar*

Acuerdo Pleno del día veintitres de  
Julio de mil novecientos diecisiete.

Aguérese á este Jefe el fundamento  
del E. Agente del Ministerio Público, para  
que produzca los efectos á que haya lu-  
gar.

Así lo acordó la Suprema Corte de  
la Nación, rubricando el Presidente. —  
Doy fe.

*Manuel G. de la Cruz*

Acuerdo Pleno del día veintinueve de Julio  
de mil novecientos diez y siete —

Póngase á la vista de los Señores Ma-  
gistrados, este expediente, por el término  
de veinticuatro horas á cada uno de ellos.

Así lo acordó la Suprema Corte de Justicia  
de la Nación, rubricando el E. Presidente. Doy fe —

*Manuel G. de la Cruz*

En





TRIBUNAL PLENO

Número..... 566.

Con el atento oficio de usted Número 751 de fecha 20 de Junio último, se recibió en esta Suprema Corte de Justicia el expediente relativo al juicio de amparo que promovió el Lic. Gustavo Molina Font en representación de Avelino Montes contra actos del General en Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste y Coronel Juez Instructor Militar de la Plaza de Mérida; con 47 fojas útiles, así como un memorial dirigido a esta Corte por el quejoso con 4 fojas útiles.

Protesto a usted mi consideración.

Constitución y Reformas.

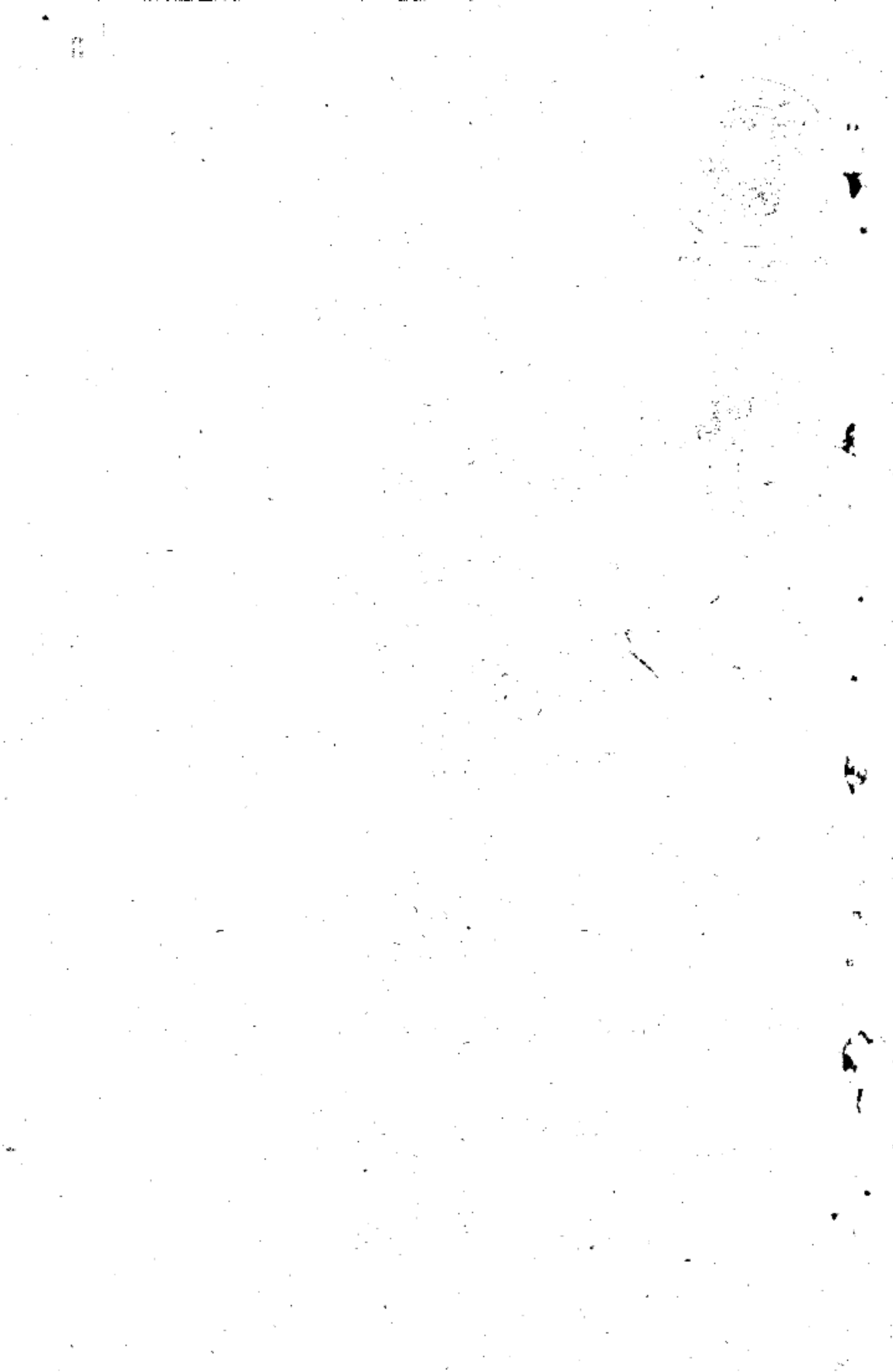
México, D.F., Julio 11 de 1917.

El Secretario de Acuerdos.

Al C.

Juez de Distrito de Yucatan,

Mérida,-



Gustavo Molina Font, Abogado con estudio abierto en la casa número cuatrocientos cuarenta y siete de la calle cincuenta y nueve de la ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, ante V. H. respetuosamente comparezco a exponer: -

Como apoderado del señor don Avelino Montes ocurri con fecha catorce de mayo último al Juez de Distrito de Yucatán, demandándole el amparo de la justicia federal contra actos del General en Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste y del Juez Instructor Militar de la Plaza de Mérida, violatorios de las garantías consignadas en los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución, y consistentes: I. en una orden de proceder a incoar proceso militar por el supuesto delito de rebelión dictada por el General en Jefe y dirigida al Juez Instructor; II. en el auto por el cual el Juez Instructor Militar abrió proceso a mi poderdante en cumplimiento de la orden de proceder; III. en la orden de aprehensión dictada contra mi poderdante por el Juez Instructor Militar, y IV. en el embargo precautorio que a petición del Agente del Ministerio Público Militar decretó el Juez Instructor sobre todos los bienes de mi poderdante, y sobre sus rentas y productos para responder, según se dice, de la responsabilidad civil que se trata de exigirle.

Pedido el informe correspondiente, las autoridades responsables se limitaron a informar diciendo que los actos reclamados no son en concepto de ellos violatorios de las garantías consignadas en los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución, pero dejando sin cumplir el precepto legal que les ordena rendir su informe justificado, omitieron acompañar la comprobación o justificación de las afirmaciones contenidas en sus oficios respectivos.

El ocho de junio en curso en curso se verificó la audiencia que ordena la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal: en ella ofrecí una prueba instrumental consistente en las constancias todas del proceso por rebelión incoado contra mi poderdante, incluso las del incidente de embargo precautorio, pero el Juez de Distrito se negó a aceptar la prueba ofrecida alegando que no había términos hábiles para recibirla, puesto que conforme a la ley debía fallar en esa misma audiencia. Protesté contra esta resolución dejando a salvo los derechos de mi representación, y después de que tanto el Representante del Ministerio Público Federal como el suscrito alegamos lo que consideramos pertinente, el Juez dictó sentencia declarando que la justicia de la Unión no ampara ni protege a mi poderdante don Avelino Montes contra los actos reclamados.

Y vengo respetuosamente a p

a la H. Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se sirva revocarla declarando que la Justicia de la Unión ampara y protege a don Avelino Montes contra los actos reclamados por ser éstos notoriamente violatorios de las garantías individuales consignadas en los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución.

En la demanda de amparo y en los apuntes de alegato que presenté en la audiencia respectiva y que en nueve fojas útiles constan acumulados al expediente, aparecen claramente explicados los fundamentos de Derecho en los que se apoya mi solicitud de amparo: la lectura de dicha demanda y de los apuntes de alegato, es suficiente para demostrar la existencia en el caso de que nos ocupa de notorias y patentes violaciones de la Constitución efectuadas por las autoridades responsables contra mi poderdante, y por consiguiente, para no incurrir en repeticiones cansadas e innecesarias, voy a limitarme a refutar algunas consideraciones que hace el Juez de Distrito en su sentencia, y a puntualizar ciertas circunstancias que ponen más de resalte la procedencia del amparo que solicito.

Violación del artículo 13  
de la Constitución.

Este precepto constitucional previene que las autoridades militares nunca y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Don Avelino Monte no pertenece al Ejército, y consiguientemente, tanto la orden de proceder y el auto en que se le abrió el proceso, como la orden de aprehensión y el embargo dictado y trabado sobre sus bienes, por cuanto cuanto proceden de las autoridades militares, violan abiertamente la garantía consignada en este artículo de la Constitución.

A pesar de que la violación de garantías es, a este respecto, tan notoria y patente que ni aun las propias autoridades responsables se atreven a negar que sus actos son en este punto contrarios a la Constitución, el Juez de Distrito declara en su sentencia que no es de concederse, por este concepto, el amparo solicitado, en virtud de que tanto la orden de proceder cuanto el auto en que se abrió el proceso, la orden de aprehensión y el embargo precautorio, fueron dictados en el mes de abril, algunos días antes de que entrara en vigor la Constitución, y estima el propio Juez sentenciador que si concediera el amparo respecto de tales actos, daría efectos retroactivos a la Constitución. Semejante raciocinio acusa un desconocimiento completo de lo que por efecto retroactivo se entiende conforme a derecho. Todos los tratadistas están conformes en definir el efecto retroactivo como el producto de una ley que vuelve sobre lo pasado y lo muda en perjuicio de derechos adquiridos; pero a gritos dice

el sentido común que no pueden considerarse como pasados, actos que, como la orden de aprehensión dictada contra mi poderdante y el embargo decretado y trabado en sus bienes, están vigentes todavía hoy. La orden de aprehensión y el embargo no son actos pasados sino presentes, o mejor dicho, usando el tecnicismo de la Jurisprudencia, son actos "pendientes" y sobre ellos puede y debe ejercerse el imperio de la Constitución, sin que se vulnere el principio de la no retroactividad de las leyes.



El amparo que pido por violación de la garantía consignada en el artículo 13 de la Constitución, es perfectamente procedente y lo demuestra abundantemente la circunstancia de que ni las autoridades responsables ni el Juez de Distrito sentenciador, desconocen que los actos reclamados son abiertamente contrarios a lo dispuesto en el texto constitucional de que se trata. Tanto las autoridades responsables para exculparse de dar cumplimiento a este precepto, cuanto el Juez de Distrito para negarme el amparo, alegan únicamente la circunstancia de que la orden de proceder, la de aprehensión y el embargo, fueron dictados algunos días antes de que la Constitución comenzara a regir. Semejante alegación podrá, cuando mucho, servir para sostener que estos actos, en su origen, pudieron ser legítimos, si prescindimos por un momento de las otras circunstancias que los hacen ilegales y atentatorios. Pero no es posible desconocer que desde el momento en que la Constitución comenzó a regir, y con ella el precepto que prohíbe a las autoridades militares extender su jurisdicción sobre personas ajenas al Ejército, los referidos actos han debido quedar sin efecto. y puesto que no se ha hecho así, puesto que está vigente todavía la orden de aprehensión dictada contra mi poderdante por la autoridad militar, y puesto que está vigente también el embargo trabado en sus bienes por orden de la misma autoridad, es innegable que procede ampararme contra esos actos que son, como hemos visto, contrarios a la garantía consignada en el artículo 13 constitucional.

#### Violación del artículo 14

##### de la Constitución.-

La violación de esta garantía consiste en que a petición del Agente del Ministerio Público Militar, el Juez Instructor decretó un embargo precautorio sobre los bienes de mi poderdante y sus rentas y productos, para responder de la responsabilidad civil que se dice va a exigirse en el proceso que nos ocupa, y al dictar dicho embargo omitió la autoridad responsable dar cumplimiento a los preceptos legales que se encierran en los artículos 306, fracción III, 311 y 317 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, y 166 fracción II y 170 del de Procedimientos Civiles Federales.

El Juez de Distrito, sin examinar el fondo del asunto, se limita a decir que el amparo solicitado está en lo que respecta a este punto en desacuerdo con lo prevenido en las fracciones II y III del artículo 107 de la Constitución, según las cuales solo es procedente el amparo cuando se trata de sentencias definitivas respecto de las que no cabe ya ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o reformada.

Es oportuno hacer notar aquí que si antes el señor Juez de Distrito acordó un desconocimiento absoluto de lo que en derecho se entiende por efecto retroactivo, ahora demuestra elocuentemente que no conoce las reglas de procedimiento conforme a las cuales deben tramitarse y resolverse los juicios de amparo, pues si como él dice en su sentencia, es improcedente el amparo que solicito respecto del embargo presuntorio por no tratarse de sentencia definitiva, lo procedente sería conforme a la fracción III del artículo 747 del Código de Procedimientos Civiles Federales, sobreseer en el juicio, por lo que a dicho embargo se refiere, sin prejuzgar respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, pero nunca negar el amparo mismo, nunca declarar como lo hace el Juez de Distrito, que la justicia de la Unión no ampara ni protege a don Avelino Montes porque esto es ya resolver respecto del fondo de la cuestión y declarar que el acto reclamado no viola la garantía de que se trata.

Ahora bien, no estoy conforme con la opinión del Juez de Distrito relativa a que no procede el amparo que he solicitado en lo referente al embargo: la misma fracción II del artículo 107 de la Constitución que cita el Juez sentenciador para fundar su opinión, establece que se exceptúan de lo dispuesto en ella, los casos comprendidos en la fracción IX del propio artículo, entre los cuales están todos aquellos actos verificados en los juicios civiles y penales que sin ser sentencias definitivas tengan el carácter de irreparables. El embargo trabado en bienes de mi poderdante tiene este carácter, primero porque siendo como es una intrusión de la autoridad militar en caso que no es de su jurisdicción, pone a mi poderdante de manera ilegal y contraria a la Constitución bajo la férula de esa autoridad militar, pretendiendo obligarlo a seguir para su defensa un procedimiento que no es el que corresponde conforme a las leyes aplicables a los paisanos ajenos al ejército; y segundo, porque cuando la sentencia definitiva viniera a decidir que mi poderdante no tiene la responsabilidad que se le atribuye y por consiguiente levantara el embargo trabado en sus bienes, cesarían, sí, para en adelante los efectos del embargo trabado, pero no se repararía éste en cuanto a los efectos por él producidos durante el tiempo que el embargo hubiese permanecido vigente, pues nadie podría hacer desaparecer el hecho de haber estado mi

3  
6  
poderdante de una manera ilegal y atentatoria, privado de la libre disposición de sus bienes por un período de tiempo más o menos largo.

Violación del artículo 16  
de la Constitución

La orden de aprehensión dictada contra don Avelino Montes es violatoria de la garantía consignada en este texto legal por los siguientes conceptos: I. en cuanto a que ha sido dictada sin que exista en los autos del proceso contra mi poderdante acusación de ningún hecho determinado que merezca pena corporal; II. en cuanto a que no hay en el expediente del proceso que se le ha incoado, datos que hagan siquiera probable la responsabilidad criminal que pretende atribuírsele.



Las autoridades responsables al informar respecto de este punto, se limitaron a aseverar que en los autos del proceso está comprobado el cuerpo del delito y hay declaraciones de testigos y otros datos que en concepto del Juez Instructor Militar hacen probable, y en concepto del General en Jefe, absolutamente probada, la responsabilidad de mi cliente. Las autoridades responsables omiten sin embargo acompañar la justificación o comprobación de sus afirmaciones, y ni siquiera se dignan precisar cuáles son esos datos, cuáles las declaraciones que en su concepto dan motivo para presumir culpable a don Avelino Montes.

Es un principio universal de Derecho que quien afirma es el obligado a probar, y por consiguiente claro es que en este juicio de amparo la prueba debería incumbir a las autoridades responsables, ya que ellas afirman que hay una acusación formulada contra mi poderdante, que está comprobado en autos el cuerpo del delito, y que existen en el proceso declaraciones de testigos y otros datos que hacen presumir su responsabilidad, en tanto que yo, por mi parte, me he limitado a negar que existan esta acusación y estos datos. A mayor abundamiento, el artículo 731 del Código de Procedimientos Civiles federales dice textualmente que la circunstancia de no rendir el informe justificado, establece la presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de las garantías individuales. No habiendo rendido las autoridades responsables la menor justificación, la menor comprobación de las afirmaciones contenidas en sus informes, claro es que el Juez de Distrito, aplicando el <sup>precepto de</sup> Derecho antes citado y el texto de ley tan claro y terminante que acabo de mencionar, debía considerar como ciertos los actos reclamados, violatorios de la Constitución, y en consecuencia conceder a don Avelino Montes el amparo de la justicia federal.

Esto no obstante, el Juez de Distrito ha negado el amparo y para ello como respecto de los puntos anteriormente tratados, sin querer entrar al

examen del fondo del asunto, se sale una vez más por la tangente y dice que "las autoridades responsables aseveran que hubo motivos fundados para decretar la aprehensión de Montes por rebelión porque existen declaraciones de testigos y otros datos que la ameritan, en cuyo concepto, toda vez que no se ha probado lo contrario, debe tenerse como cierto lo expresado por dichas autoridades y es de declararse que no ha habido violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución."

Esta doctrina que pretende sentar el Juez de Distrito es manifiestamente contraria a los principios más elementales de Derecho procesal, y está, como hemos visto, en contradicción con un texto de ley preciso y terminante. La autoridad responsable es quien afirma que hay acusación contra don Avelino Montes y que hay contra el mismo, datos suficientes para decretar su detención. A esta autoridad responsable toca, pues, comprobar su afirmación, y no a mí, como quiere el Juez de Distrito, corresponde probar que esta afirmación es falsa. Mi cliente don Avelino Montes tiene a su favor, no solo el principio de derecho según el cual quien afirma es el que debe probar, sino también la presunción legal que establece el artículo 731 del Código de Procedimientos Civiles antes citado. Conforme a este texto legal, por el hecho de no haber rendido su informe justificado las autoridades responsables, por el hecho de haberse limitado a afirmaciones enfáticas y de no haber omitido comprobarlas en debida forma, en acatamiento de la ley, quedó establecida la presunción legal de ser destruido el acto violatorio de las garantías.

El Juez de Distrito no puede fundar la tesis que ahora pretende introducir a la Jurisprudencia, en ningún precepto de la ley, en ningún principio de Derecho. Por otra parte, ni lo intenta siquiera, pues siguiendo, el ejemplo de las autoridades responsables, se limita a afirmaciones enfáticas y magistrales, como si un sentenciador no estuviera obligado a fundarse siempre en la ley escrita o a falta de ésta en los principios generales de Derecho.

Pero para acabarse de dar cuenta de la monstruosa injusticia que entraña en el punto a que me refiero, la sentencia del Juez de Distrito, me permito rogar a esa H. Corte Suprema que se sirva fijar su atención en la circunstancia de que yo, en mi calidad de apoderado del quejoso, apesar de no corresponderme a mí la obligación de probar, y de existir a favor de mi representado la presunción legal a que antes me he referido, esforzándome por allegar todos los elementos necesarios para que el Juez sentenciador pudiera formarse una idea cabal del asunto, ofrecí por vía de prueba, en tiempo oportuno, las constancias todas del proceso incoado a mi cliente, y el Juez de Distrito se negó a aceptar la prueba ofrecida.

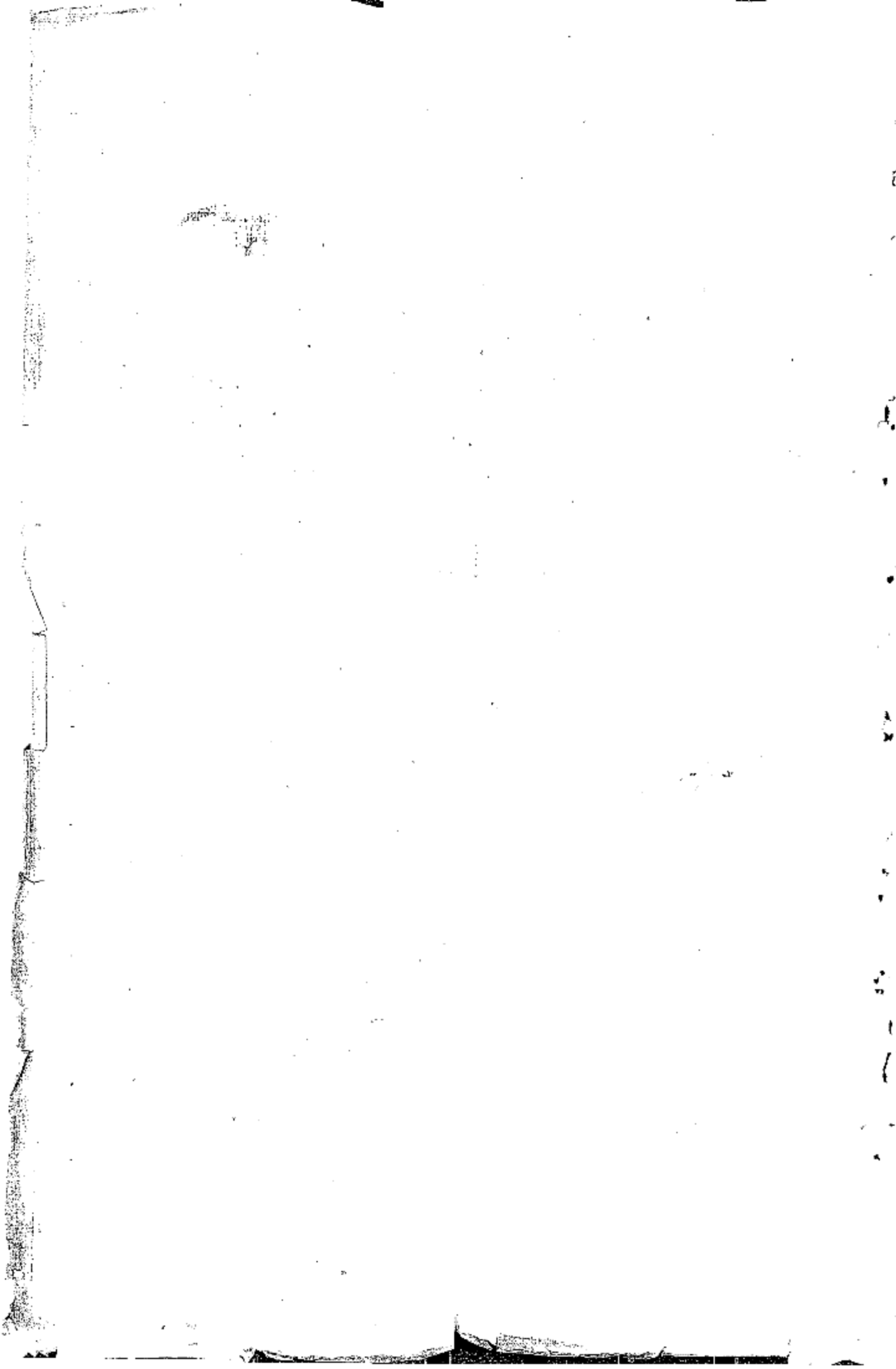


alegando que no había términos hábiles para recibirla. Así pues, por una parte, contrariando el principio de que quien afirma es el obligado a probar, y desconociendo la presunción legal que a favor de mi cliente establece el artículo 731 del Código de Procedimientos Civiles federales, se echa sobre mí la obligación de probar un hecho negativo cual es la falsedad de las afirmaciones contenidas en los informes de las autoridades responsables, y por otra parte, cuando ofrezco en el momento señalado por ley, la única prueba con la cual sea posible demostrar esa falsedad, es decir, la prueba consistente en las constancias todas del proceso, se me dice que no hay términos hábiles para recibirla. Si el proceder del señor Juez de Distrito llegara carta de naturaleza en el foro, valdría más cerrar los Tribunales federales para todo juicio de amparo, pues no habría uno que pudiese prosperar. Para la autoridad responsable, toda clase de franquicias y facilidades; se le cree por su sola palabra, se le desliga de la obligación de probar sus afirmaciones, no se le exige la justificación de su informe; en cambio, para el reclamante, toda clase de rigores y dificultades: se le echas encima la carga de probar hasta sus negaciones y la falsedad de las afirmaciones de la autoridad responsable, y cuando ofrece las únicas pruebas posibles para el efecto, se le dice que no hay términos hábiles para recibirlas.

Estoy seguro de que esa H. Corte Suprema de Justicia, volviendo por los fueros del Derecho, no podrá menos de revocar la sentencia del inferior, y entrando a analizar la cuestión en cuanto al fondo, y tomando en consideración las notorias violaciones de garantías que preciso y señalo en mi demanda de amparo y en los apuntes de alegato que presenté en primera instancia, se servirá declarar, como respetuosamente le pido,

QUE la Justicia de la Unión ampara y protege a don Avelino Montes, contra los actos reclamados consistentes en la orden de proceder dictada por el General en Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste, <sup>en</sup> contra el auto en que el Juez Instructor Militar de la plaza de Mérida le abrió proceso en cumplimiento de la orden mencionada, <sup>en</sup> contra la orden de aprehensión dictada por el mismo Juez Instructor, y por último, <sup>en</sup> contra el embargo precautorio trabado en los bienes de mi poderdante y en sus <sup>reales</sup> bienes y productos. Mérida, doce de junio de mil novecientos diez y siete.

*[Firma manuscrita]*



VOTO razonado del Magistrado Lic. Enrique Moreno.

En el amparo promovido por el Licenciado Gustavo Molina Font como apoderado del señor Avelino Montes, contra actos del Jefe del Cuerpo de Ejercito del Sureste y del Juez Instructor Militar de la Plaza de Mérida, el suscrito ha votado por la confirmación del fallo del Juez de Distrito de Yucatán, que negó el amparo al mencionado señor Montes, por las siguientes razones: En este caso por las mismas razones que expuso en el amparo de Rivera G., fallado en acuerdo de 25 de agosto último, en que sostuvo que solamente cuando se tratara de sentencias definitivas en un proceso criminal que imponiera pena corporal o alguna otra prohibida por el artículo 22 de la Constitución era procedente el amparo aún cuando la sentencia se hubiera dictado dentro del período preconstitucional por ser muy marcado el carácter de trazo sucesivo que en esos casos tenía la pena. Que fundó su resolución en el artículo 702 fracción V. del Código Federal de Procedimientos Civiles y concluyó diciendo que por todas esas razones debía negarse el amparo que se solicita por el señor Avelino Montes toda vez que no se trata de una sentencia definitiva que imponga pena corporal o alguna otra de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución.

Protesto a los señores Magistrados mi atenta consideración.

México, 26 de septiembre de 1917.



SENOR AVELINO MONTES:



TRIBUNAL PLENO

En el Toca al juicio de amparo promovido a nombre de usted por el Lic. Gustavo Molina Font, ante el Juez de Distrito de Tucatán contra actos del General en Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste y del Juez Instructor Militar, esta Suprema Corte proveyó un auto que dice: Acuerdo Pleno del día once de julio de mil novecientos diecisiete. Agréguese el escrito que remitió el Lic. Gustavo Molina Font. Acúsesse recibo al Juez, y con fundamento en el artículo 751 del Código Federal de Procedimientos Civiles se señala un término de ocho días para que los interesados tomen sus apuntes. Téngase como parte al Ministerio Público.

Lo que notifico a usted por medio de la presente cédula que surtirá sus efectos legales.

México, 12 de Julio de 1917.

*H. Ortiz Ascago*



H.H. Presidente y Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

El subscripto Agente del Ministerio Público Federal designado por el Procurador General de la República para intervenir en la revisión de la sentencia dictada por el Juez de Distrito de Yucatán en el amparo promovido por el Lic. Gustavo Molina Font en favor de Avelino Montes por violación de los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución Política, ante ustedes respetuosamente expone:

Que como ya se asentó el Lic. Molina Font ocurrió ante el Juez de Distrito de Yucatán como apoderado General de Avelino Montes solicitando amparo de la Justicia Federal, contra la orden de proceder a incoar proceso militar a su poderdante, como presunto responsable del delito de rebelión, dictada por el C. General en Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste y dirigida al C. Coronel Juez Instructor Militar de esa Plaza; contra el auto en que el Juez Instructor Militar abrió proceso a su referido poderdante por el delito de rebelión en cumplimiento de la orden de proceder a que ya se hizo referencia; contra la orden de aprehensión dictada en dicho proceso contra Avelino Montes y por último, contra el embargo precautorio que a petición del representante del Ministerio Público Militar decretó el Juez Instructor sobre todos los bienes del acusado y sobre sus rentas y productos, para responder de la responsabilidad civil que se trata de exigirle con motivo del delito de rebelión que se le imputa.

Los actos contra los cuales pide amparo los considera violatorios de los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución vigente y para concretar la competencia del Juez de Distrito en el caso de que se trata dice el quejoso que el amparo lo solicita conforme a la fracción IX del artículo 106 de la Cons-

titución PUES LOS ACTOS DE QUE SE TRATA SON DE IMPOSIBLE REPARACION YA QUE NADIE PODIA REPARAR LOS ACTOS DE SUJETAR A SU PODERDANTE A UN PROCESO MILITAR. HACERLO COMPARECER A UN CONSEJO DE GUERRA, APRISIONARLO Y EMBARGAR SUS BIENES.

En Primer término consecuente el subscripto con la teoría sostenida por el Ministerio Público Federal en los pedimentos presentados a éste H. Corte en casos semejantes, puede establecerse en tésis General que los actos de que se queja el Lic. Gustavo Molina Font por Avelino Montes ejecutados como lo fueron en la época preconstitucional, por la anomalía de las circunstancias nunca podrían argüir violación de garantías consignadas en la Constitución anterior - que se hallaba en suspenso, ni menos de las consagradas por la Carta fundamental vigente que no había entrado en vigor.

Pero a parte de esto procede en el caso actual examinar si fue Bien introducido el juicio de amparo fundándolo en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución ya que el quejoso asegura que son actos de imposible reparación - puesto que nadie repara los actos de sujetar a Montes a UN PROCESO MILITAR, HACERLO COMPARECER ANTE UN CONSEJO DE GUERRA APRISIONARLO Y EMBARGARLE SUS BIENES.

En atención a los hechos y atento lo prevenido en la fracción IX del artículo 107 invocado puede establecerse que para que proceda amparo se necesita:

I.- Que los actos que se dicen violatorios sean ciertos, que existan o puedan existir.

II.- Que sean irreparables.

III.- Que por sí mismos sean violatorios de preceptos Constitucionales de los que aseguran los derechos del hombre

1er. punto.- Que los actos sean ciertos que existan o que puedan existir. Los actos señalados por el quejoso en su demanda de amparo NO SON CIERTOS. No es verdad que actualmente se trate de sujetar a Avelino Montes a un proceso Militar ni es cierto que se trata de hacerlo comparecer a un Consejo de Guerra. De autos consta por los informes rendidos tanto -



- - 2 - -

por el Juez Instructor Militar como por el Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste, que una vez que entró en vigor la Constitución el Juez Militar se inhibió del conocimiento del asunto y éste pasó a manos de Jueces del orden Civil para que ante ellos se tramitara y fallara, y como no está probado que esos informes sean falsos, resulta que es falso el motivo de queja.

II punto.- Que los actos sean irreparables. Que se trate de sujetar a Montes a un proceso Militar, y hacerlo comparecer a un Consejo de Guerra no constituyen actos irreparables por que no son ciertos. El Juez Penal tramitará el asunto fuera ya por completo de la jurisdicción Militar. Que se hayan embargado los bienes del acusado por vía de responsabilidad civil, no es acto irreparable, puesto que el simple embargo precautorio nada prejuzga acerca de la sentencia definitiva - que se dicte en ese juicio de responsabilidad Civil, que caso de serse adversa al interesado podrá recurrirla y atacarla por los medios legales correspondientes.

Hasta aquí la demanda parecería improcedente, pero como a la vez se alega violación del artículo 16 Constitucional por la orden de aprehensión librada en contra de Montes, y de esa violación debe conocer el Juez de Distrito conforme a la segunda parte de la fracción IX, independientemente de la irreparabilidad del acto, la apreciación con respecto a ella la hará el subscripto al tratar el 3o. y último punto.

3er. punto.- Que los actos sean violatorios de preceptos Constitucionales.

No hay violación del artículo 13 porque los Tribunales Militares actualmente no conocen ya del caso de Avelino Montes.

La queja por violación del artículo 14 a virtud del embargo de los Bienes, rentas y productos es prematura; no - tratándose de acto de imposible reparación rige para la procedencia del amparo la fracción II del artículo 107 Constitucional en relación con las fracciones III y IV del mismo precepto

Por último el acto de mandar aprehender a un individuo no es por sí mismo violatorio del artículo 16 de la Constitución en vigor. Siguiendo al quejoso en su interpretación, todos en igualdad de circunstancias alegarían que no podrían borrarse los efectos ocasionados al detenido con el cautiverio, y no es ni puede ser la índole de la Constitución ya que el artículo 16 de la Carta Fundamental exige únicamente para librar orden de aprehensión que proceda denuncia, acusación o querrela de un hecho determinado que la Ley castigue con pena corporal y que estén apoyadas aquellas por declaración bajo protesta de persona digna de fé o por otros datos que haga probable la responsabilidad del inculpado; debiendo entenderse que este razonamiento lo hace el subscripto "Por cuanto a que está subsistente la orden de aprehensión hoy en pleno Régimen Constitucional" más nunca refiriéndose a la época en que se dictó, cuando según la tesis enunciada en un principio no podía arguir violación de garantías individuales. Y actualmente la subsistencia de la orden de aprehensión no puede ser atacada ante el criterio del artículo 16. "En efecto, el Juez Instructor Militar en su informe con justificación dice: "La detención de Avelino Montes se decretó en virtud de acusación formal del Ministerio Público por un hecho que merece pena corporal, el delito de rebelión, y previa comprobación en autos del cuerno del delito y de la responsabilidad presumta del inculpado con las declaraciones bajo protesta de testigos y otros datos existentes en el proceso....."

Y si el quejoso sostiene que la subsistencia de esa orden de aprehensión, que indiscutiblemente fué legítima en su origen, es atentatoria debía probar, puesto que afirma, ese acerto. No hay prueba rendida que acredite la falsedad del informe del Juez. No hay prueba que justifique que en el caso no están llenados hoy los requisitos que establece el artículo 16 Constitucional.

En méritos de lo expuesto el subscripto estima que en la presente demanda de amparo hay puntos de verdadera improcedencia, pero como a la vez se alega violación del artícu

lo 16 de la Constitución Política que no está comprobada debe confirmarse la sentencia del Juez de Distrito de Yucatán de fecha 8 de junio del año en curso y con todo respeto pido a ésta H. Corte declare en definitiva que la justicia de la Unión no ampara ni protege a Avellán Montes contra actos del General en Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste y de los demás que puntualiza en el escrito de demanda.

Protesta a ustedes H. Magistrados el subscripto Agente del Ministerio Público su atenta y respetuosa consideración.

CONSTITUCION Y REFORMAS.

México, 21 de Julio de 1917.

*Antonio S. Pulido*

*Recibido a las doce del día veintuno de Julio de mil novecientos diecisiete. Conto.*



ASUNTO PENAL.

Pide revocación de la sentencia del Juez de Distrito de Mérida, que negó el amparo promovido por don Avelino Montes contra actos del Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste, y del Juez Instructor Militar de la plaza de Mérida.

C. PRESIDENTE Y MAGISTRADOS DE LA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION:

JOSE VELA, apoderado jurídico del señor don Avelino Montes, como lo acredito con el testimonio de poder que adjunto y pido se me devuelva previa toma de razón; con despacho en la segunda de Filomeno Mata número diecisiete, en el juicio de amparo promovido por el señor Lic. don Gustavo Molina Font en representación de don Avelino Montes, contra actos del C. General en Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste y demás funcionarios que se mencionan en el escrito de demanda, a usted respetuosamente y conforme a derecho manifiesto:

Que el Juez de Distrito de Mérida pronunció sentencia declarando que la Justicia de la Unión no ampara a mi mandante, y a reserva de demostrar más adelante que la opinión del C. Agente del Ministerio Público designado por el Procurador General de la República para intervenir en este juicio, son enteramente infundadas, y que, por tanto, debe revocarse la sentencia aludida, a fin de que el señor Montes quede amparado por la Justicia de la Unión respecto de los actos de que se queja, paso a patentizar las irregularidades cometidas en la tramitación de este juicio, pues mi ánimo es que los señores Magistrados estimen desde luego que no ha podido pronunciarse una sentencia con arreglo a la ley, cuando se han omitido los procedimientos tutelares del juicio:

CUANDO HASTA SE HA NEGADO LA PRUEBA.

En auto fecha dieciséis de mayo próximo pasado,



TRIBUNAL PLENO

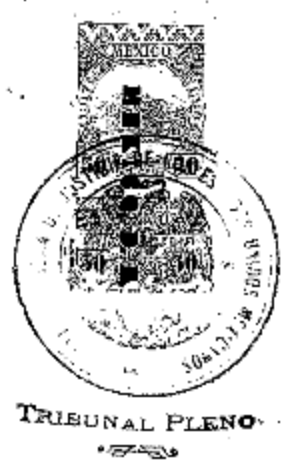
se señaló la tarde del veintiocho del mismo mes, para que tuviera lugar la audiencia de alegatos prevenida por la fracción IX del artículo 107 de la Constitución vigente, y no habiendo podido celebrarse en aquella fecha, se señaló, por auto del veintinueve del mismo mes de mayo, para que tuviera lugar, el día ocho del mes de junio de este año. El veintiocho de mayo, primera fecha señalada para la audiencia, el licenciado Molina Font presentó dos escritos (fojas 9 y 10), ofreciendo pruebas instrumentales, consistentes: la primera, en varias constancias relativas al juicio verbal de hacienda que el Agente del Ministerio Público, en representación del Fisco, sigue contra mi poderdante; y la segunda, en las actuaciones del proceso incoado contra el señor Montes por el C. Juez Instructor Militar de la plaza de Mérida, por el supuesto delito de rebelión. En el escrito en que ofreció esta segunda prueba el Lic. Molina Font, manifestó: que entre las constancias que ofrecía como prueba, deseaba que se considerasen incluídas, no sólo las del proceso principal, sino también las del incidente de embargo precautorio promovido por el C. Agente del Ministerio Público Militar y decretado por el C. Juez Instructor Militar, y muy especialmente el acta de la diligencia de embargo levantada con fecha DIEZ DE MAYO, así como las constancias del proceso incoado a principios del año de mil novecientos quince contra Abel Ortiz Argumedo y socios, el cual obra acumulado al expediente del que se ha incoado contra el señor Montes.

El Juez de Distrito, en el auto fecha veintinueve de mayo, de que se ha hecho mérito, dice, con relación a las pruebas ofrecidas, lo siguiente: Y por cuanto a las pruebas a que se refiere el recurrente y que ofrece en sus escritos de fecha de ayer, considerando este Juzgado que pueden ILUSTRAR SU CRITERIO PARA EL FALLO DEFINITIVO, pídanse a las autoridades que se aluden, copias de las constancias relacionadas, las que se acumularán

PARA QUE OPORTUNAMENTE Y EN LA AUDIENCIA REFERIDA SE RESUELVA SI SON DE ACEPTARSE O NO COMO PRUEBAS. (Fojas 3 y 3 vuelta).

En la audiencia de alegatos, el Lic. Molina ofreció nuevamente las pruebas a que se refieren sus escritos de veintiocho de mayo, y pidió que si aún no habían sido recibidas las copias certificadas relativas a las actuaciones del proceso de rebelión, se reiterase al Juez Primero del Crimen de Mérida, la solicitud de remitirlas. El Juez aceptó la prueba relativa a las constancias del juicio verbal de Hacienda, y por lo que se refiere a las constancias del proceso de rebelión, se negó a admitirlas, manifestando que por cuanto no existían términos hábiles para recibir prueba instrumental, consistente en las constancias del proceso incoado al quejoso por el Juez Instructor Militar y la copia certificada relativa al embargo precautorio, no eran de recibirse, toda vez que, según <sup>la</sup> fracción IX del artículo 107 de la Constitución, debía resolverse en la misma audiencia. (Fojas-24 y 24 vuelta). Contra tan extraña resolución protesto el Lic. Molina Font, dejando a salvo los derechos de su representado, y era natural que así lo hiciera, porque precisamente el precepto constitucional en que el Juez de Distrito fundó su atentatoria resolución, es el que le imponía la imprescindible obligación de aceptar la prueba ofrecida, máxime si se tiene en cuenta que el mismo Juez estimó que le podía servir para ILUSTRAR SU CRITERIO PARA EL FALLO DEFINITIVO.

El auto de veintinueve de mayo de que se ha hecho mérito, induce a suponer parcialidad, o quizás malicia del Juez de Distrito, porque es imposible suponer que un funcionario judicial de su categoría ignorase las terminantes disposiciones de los artículos 735, 736 y 737 del Código de Procedimientos Civiles Federales, que le imponían la ineludible obligación de aceptarlas de plano y no en la forma ambigua en que lo hizo para



rechazarlas más tarde, con notoria violación de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución, que previene: que en la audiencia a que la misma se refiere, se reciban las pruebas que LAS PARTES INTERESADAS OFRECIEREN, y éstas no pueden ser otras que las señaladas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre las cuales se encuentra la prueba instrumental ofrecida por la representación de don Avelino Montes.

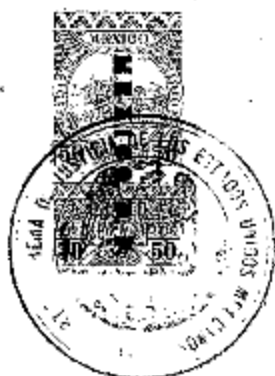
El precepto constitucional en que el Juez de Distrito se fundó para no admitir la prueba ofrecida en tiempo dice, como queda indicado, que en la audiencia de alegatos se recibirán LAS PRUEBAS QUE LAS PARTES INTERESADAS OFRECIEREN, sin excluir ni una sola de las señaladas en el Código de Procedimientos Civiles Federales, y por lo tanto, la decisión del Juez de Distrito es violatoria del precepto constitucional que se analiza. La prueba fué ofrecida en tiempo, y el Juez debió haberla recibido, mandando pedir, en el acto mismo de la audiencia, al Juez de lo Penal que conocía del proceso de rebelión, las constancias correspondientes, pues como ha quedado demostrado, la interpretación que dicho funcionario dió a la fracción IX del artículo 107 constitucional no resiste al más ligero análisis; pero a mayor abundamiento, es de advertirse que la prueba fué ofrecida desde el día 28 de mayo, y que era obligación del Juez procurar que la autoridad correspondiente remitiese a su Juzgado copia de las constancias que se ofrecían como prueba, imponiéndole, en caso de que se negara a hacerlo, las penas que establece el artículo 736 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Más adelante procuraremos buscar la razón que el Juez de Distrito tuvo para no aceptar la prueba ofrecida, desconociendo las leyes a que debe sujetar el procedimiento. Y como esa prueba es verdaderamente importante, la acompaño a estos alegatos, esperando que la Corte se servirá aceptarla para mejor proveer.

El artículo 731 del referido Código de Pro-



cedimientos Civiles Federales previene que la circunstancia de no rendir el informe justificado establece la presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de garantías individuales. Ahora bien, los informes rendidos por las autoridades responsables, los cuales obran, el del Juez Instructor Militar, de fojas cuatro a seis, y el del Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste, a fojas siete, no pueden considerarse como informes con justificación, pues dichos funcionarios se limitaron a informar, sin acompañar la justificación de lo que asentaron en sus informes, pues esta justificación no pudo ser otra que la comprobación que las autoridades responsables deben hacer de las afirmaciones que se contengan en sus informes, y como informar en forma distinta de lo que la ley previene, es lo mismo que no informar, esta sola circunstancia era bastante para que se concediese el amparo solicitado por la representación del señor Montes.



TRIBUNAL PLENO

Sentado lo anterior, conviene entrar al análisis de los peñamientos del C. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Distrito de Mérida y los del designado por el Procurador General de la República para intervenir en la revisión de la sentencia dictada por el Juez de Distrito, pues ambas son contrarias a la concesión del amparo que se solicita.

El primero de dichos funcionarios estimó que en virtud de que el Juez Instructor Militar afirma en sus informes que sus actuaciones fueron anteriores a la vigencia de la Constitución, y que lo primero que hizo al ponerse ésta en vigor, fué inhibirse del conocimiento del proceso incoado al señor Montes, y que en virtud de que el C. General en Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste afirma también en su informe que por razón de la orden de proceder en contra del señor Montes no ha violado ninguna de las garantías consignadas en los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución, no es necesario entrar al estudio del

fondo del asunto y pidió se sobreeseyese en el amparo, con fundamento en los artículos 702 fracciones VII y IX, y 747 frac. III del Código de Procedimientos Civiles Federales.

La fracción III del artículo 702 del ordenamiento citado, previene que, como es natural y lógico, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado; pero los efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo de que se trata no han cesado, como lo demuestra el hecho de que aún permanecen embargados los bienes de mi mandante, y la circunstancia de estar todavía en vigor la ilegal orden de aprehensión dictada en su contra <sup>la cual</sup> le causa una grave molestia, ya que no puede volver al Estado de Yucatán, con notorio perjuicio de sus intereses, sin ser aprehendido.

La fracción IX del mismo artículo previene que el juicio de amparo es igualmente improcedente en los demás negocios que lo prevenga la ley. Ahora bien, la ley a que se hace referencia no puede ser otra que el Código Federal de Procedimientos Civiles, y en todo ese ordenamiento no hay una sola disposición que prevenga que por el hecho de haberse inhibido la autoridad responsable del conocimiento del proceso en que se cometió la violación de garantías, debe considerarse improcedente el amparo.

El artículo 747 fracción III del propio Código, último precepto legal en que el Ministerio Público apoyó su pedimento, establece que proceda el sobreesimiento en los casos de improcedencia que ocurran o aparezcan durante el juicio; pero es notorio que esas causas de improcedencia que deben dar origen al sobreesimiento, forzosamente tienen que ser alguna o algunas de las que la misma ley establece, caso que no ocurre en el presente amparo.

El Juez de Distrito no aceptó los razonamientos del Agente del Ministerio Público; entrando al estudio del fondo del negocio, decretó que la Justicia de la

Unión no ampara ni protege a mi representado; pero he creído pertinente insistir sobre los razonamientos del Ministerio Público, a fin de que ese H. Tribunal se dé cabal cuenta de que si bien las autoridades, judiciales y administrativas, que han intervenido en este juicio de amparo, han emitido opiniones contradictorias, todas han convergido al mismo fin: negar el amparo tan justamente solicitado. Y cuando todos los que atacan tienen que acudir a medios opuestos y contradictorios; pero todos fútiles y deleznales, señal es de que no pueden tener unidad de acción, porque les falta la verdad y la justicia. La Corte estudiará serenamente, estoy seguro de ello, las opiniones de los que han pedido en contra de mi mandante, y las razones que destruyen esos razonamientos, del todo antijurídicos, y convencida de la justicia que asiste a don Avelino Montes, decidirá que la Justicia de la Unión lo ampara y lo protege.

La sentencia del Juez de Distrito está amplia y sintéticamente refutada en el escrito con que el Lic. Molina Font comparece ante ese H. Tribunal pidiendo la revocación de la misma. Es, pues, innecesario refutarlo aquí nuevamente, y paso, por lo tanto, desde luego, a demostrar la improcedencia del pedimento del Agente del Ministerio Público designado por el Procurador General de la República para intervenir en la revisión de dicha sentencia.

Comienza el O. Agente por establecer la tesis general que funda, según afirma, en los pedimentos presentados a esa Suprema Corte, en casos semejantes al presente, relativa a "que los actos de que se queja el Lic. Molina Font por Avelino Montes, dictados como lo fueron en la época preconstitucional por la anormalidad de las circunstancias, nunca podrían argüir violación de garantías consignadas en la Constitución anterior que se hallaba en suspenso, ni menos consagrada en la Carta Fun-



damental vigente, que no había entrado en vigor". El C. Agente no habló con la franqueza que el C. Juez de Distrito; pero lo que quiso decir está de acuerdo con lo asentado por aquel funcionario en su sentencia; esto es, que si se concediera amparo por actos que tuvieron lugar antes de la vigencia de nuestra Carta Fundamental, y que ésta considera como violatorios de los derechos del hombre, se daría efecto retroactivo a la ley constitucional. Esperamos que la Corte no sancione esta TESIS GENERAL sostenida por el Ministerio Público Federal, según afirma el Agente que interviene en esta revisión, pues a más de ser la más antijurídica de todas las tesis, sería también la más monstruosa de todas las jurisprudencias.

En las circunstancias anormales porque ha atravesado la Nación, los ciudadanos no teníamos otro recurso para defendernos de los actos de las autoridades que violaban en nuestras personas o intereses los derechos que nos concedió la ley natural, mucho antes de que hubieran sido consignados en las constituciones modernas, como inalienables derechos del hombre, sino acudir a la autoridad administrativa; pero es monstruoso asentar, como lo hace el Ministerio Público, que esas violaciones de los derechos del hombre, cometidas durante el período pre-constitucional, no pueden argüir violación de garantías, porque la Constitución de 57 no estaba en vigor y la actual no había aún nacido. No estoy en modo alguno conforme con la teoría de que la Constitución de 57 no estaba en vigor, por la sencilla razón de que no conozco la ley que la hubiese derogado; pero dejando este punto aparte, puede afirmarse, como teoría perfectamente sana y jurídica, que la Constitución actual se expidió precisamente para volver del caos al orden, del período pre-constitucional dudoso al constitucional franco y positivo, y que todos los actos que dicha Constitución considera violatorios de garantías individuales que están vigentes, como sucede en este caso, deben suspenderse, sin que esto pueda signi-

ficar que se aplique retroactivamente la ley constitucional.

En efecto, todos los tratadistas están conformes en definir el efecto retoractivo como el producto de una ley que, volviendo sobre el pasado, lo muda en perjuicio de derechos adquiridos; pero nadie, ni el más lego en cuestiones jurídicas podrá considerar como pasados, actos que, como los reclamados en este amparo, están aún en vigor, y sobre los cuales puede y debe ejercerse el imperio de la Constitución, sin que se vulnere el principio de la no retroactividad de las leyes.

Por otra parte, es principio general de derecho que la ley penal debe aplicarse retroactivamente en beneficio de todo procesado. Pues bien, si la Constitución actual establece que las autoridades militares no tienen jurisdicción sobre personas ajenas al ejército, y el señor Montes no lo es; si la misma Constitución previene que no puede decretarse auto de formal prisión sin que concurren determinados requisitos, y esos requisitos no concurren en el presente caso; si la orden de prisión dictada contra mi mandante por una autoridad militar está vigente y para dictarla no se tuvo en cuenta los requisitos que la ley exige, claro es que actuando los inmutables principios de derecho, debe ampararse al señor Montes, aun cuando los actos que han violado en su persona las garantías individuales cuyo cumplimiento reclama, hayan tenido lugar antes de la vigencia de la Constitución que reconoció esas garantías. Al ponerse en vigor la Constitución que hoy nos rige, había muchos incomunicados en las prisiones, en virtud de órdenes dictadas durante el período preconstitucional: todas esas comunicaciones fueron, o debieron ser levantadas el primero de mayo de este año, y a nadie se ha ocurrido decir que los Jueces que ordenaron el levantamiento de las comunicaciones, y los carceleros que acataron esas órdenes, hubiesen violado el principio de la no



TRIBUNAL PLENO

retroactividad de las leyes. Y si ésto es así ¿cómo podrá sostenerse la tesis del C. Agente del Ministerio Público?, y no pudiendo sostenerse esa tesis, ¿cómo es posible que se niegue a mi mandante la protección de la Justicia de la Unión que reclama?

Refutada la tesis general formulada por el C. Agente del Ministerio Público, paso a estudiar la segunda parte de su pedimento. Asienta este funcionario que atento lo prevenido en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución, puede establecerse que para que el amparo proceda, se necesita:

- 1.º - Que los actos que se dicen violatorios, sean ciertos, que existan o que puedan existir;
- 2.º - Que sean irreparables;
- 3.º - Que por sí mismos sean violatorios de preceptos constitucionales de los que aseguran los derechos del hombre.

#### PRIMER PUNTO.

En cuanto al primer punto, asienta el Ministerio Público que los actos señalados por el quejoso en su escrito de amparo no son ciertos, pues no es verdad que se trate de sujetar a D. Avelino Montes a un proceso militar, ni es cierto que se trate de hacerlo comparecer ante un Consejo de Guerra, fundando esta afirmación en el hecho que de autos consta (del informe de la autoridad responsable debió haber dicho), que una vez que entró en vigor la Constitución, el Juez militar se inhibió del conocimiento del proceso incoado a mi poderdante por las autoridades militares. El Ministerio Público desfigura los hechos y llega, por lo tanto, a conclusiones ilógicas. El amparo se pidió: I. Contra la orden de proceder a incoar proceso militar a mi poderdante, como presunto responsable del supuesto delito de rebelión, dictada por el C. General en Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste y dirigida al C. Coronel Juez Instructor Militar de la Plaza de Mérida; II. Contra el auto en que el C. Juez Instructor Militar abrió proceso a mi poderdante

por el supuesto delito de rebelión en cumplimiento de la orden de proceder en contra, a que acabo de referirme; III. Contra la orden de aprehensión dictada en dicho proceso contra mi poderdante; y IV. Contra el embargo precautorio que, a petición del Ministerio Público Militar decretó el Juez Instructor Militar, sobre todos los bienes de mi mandante y sobre sus rentas y productos, para responder de la responsabilidad civil que se trata de exigirle con motivo del supuesto delito de rebelión que se le imputa.



TRIBUNAL PLENO

Estos hechos son tan ciertos, que ni las mismas autoridades responsables se atreven a negarlos, y causa verdadera extrañeza la afirmación en contrario del Ministerio Público. Los actos reclamados son actualmente ciertos, porque subsiste la orden de proceder, subsiste el auto en que se abrió el proceso, subsiste la orden de aprehensión, y subsiste el embargo precautorio, órdenes todas que proceden de autoridades militares y que por ser dictadas contra un civil violan de modo absoluto el artículo 13 de la Constitución de la República.

Queda, pues, demostrado que la afirmación del Ministerio Público respecto a no ser ciertos los actos reclamados es infundada, pues esos actos son absolutamente ciertos.

#### SEGUNDO PUNTO.

Respecto de este segundo punto, asienta el Ministerio Público literalmente lo siguiente: "que se trate de sujetar a Montes a un proceso militar y hacerlo comparecer a un Consejo de Guerra, no constituyen actos irreparables, porque no son ciertos", y "que se hayan embargado los bienes del acusado por vía de responsabilidad civil, no es acto irreparable, puesto que el simple embargo precautorio nada prejuzga de la sentencia definitiva que se dicte en ese juicio de responsabilidad". Examinemos estas dos afirmaciones por separado:

Respecto de la primera, hemos visto ya cuáles son los actos reclamados y que éstos son ciertos, y por lo tanto, la afirmación de que "no son irreparables porque no son ciertos", resulta sencillamente ilógica. Los actos reclamados son ciertos y son irreparables, porque nadie podría reparar el que mi poderdante fuese encarcelado en virtud de la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez Militar, y que es la consecuencia lógica de la orden de proceder en su contra y del auto en que se le mandó abrir proceso: éstos son hechos ciertos e irreparables y no pueden quitarles ese carácter la infundada afirmación del Ministerio Público.

Respecto de la segunda el Ministerio Público reconoce como cierto el hecho del embargo; pero niega que sea irreparable. ¿Porqué? Porque "el simple embargo precautorio nada prejuzga acerca de la sentencia definitiva que se dicte en ese juicio de responsabilidad civil". Causa verdadero estupor este razonamiento del C. Agente del Ministerio Público! Por ventura el hecho de que el embargo precautorio nada prejuzgue en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de responsabilidad civil podrá quitarle su carácter de acto irreparable? El embargo precautorio de TODOS LOS BIENES de mi mandante es un acto notoriamente irreparable, porque nadie podrá reparar los innumerables perjuicios de índoles diversas que mi mandante está actualmente sufriendo al ser ilegalmente privado de la totalidad de sus bienes.

Analizados los dos primeros puntos, dice el C. Agente del Ministerio Público que "hasta aquí la demanda parecería improcedente; pero como a la vez se alega violación del artículo 16 Constitucional por la orden de aprehensión dictada en contra de Montes, y de esa violación debe conocer el Juez de Distrito conforme a la segunda parte de la frac. IX, independientemente de la irreparabilidad del acto, la apreciación respecto de ella la dará el suscrito al tratar el tercero y último punto.





No se entiende en verdad lo que el Ministerio Público quiso decir en el párrafo citado. En efecto, al tratar del primer punto afirmó que los actos reclamados no eran ciertos; en el segundo, que no eran irreparables por no ser ciertos, y en el párrafo transcrito parece sostener que el amparo es improcedente por no ser ciertos ni irreparables los actos reclamados, para afirmar a renglón seguido que de la violación de la garantía consignada en el artículo 16 debió conocer el Juez de Distrito, independientemente de la irreparabilidad del acto. La orden de aprehensión es uno de los actos reclamados, y si éstos no son ciertos como lo afirma el Agente del Ministerio Público, el amparo sería tan improcedente por este capítulo como por los dos anteriores. Todo esto demuestra la falta de fundamento del pedimento del Ministerio Público y la necesidad de que no sea tomado en consideración.

#### TERCER PUNTO.

En este punto afirma el C. Agente del Ministerio Público que no existe violación del artículo 13, porque actualmente los Tribunales Militares no conocen ya del caso de Avelino Montes. Esta tesis es insostenible.

Se ha violado la garantía consignada en el artículo 13 constitucional, porque el señor don Avelino Montes no pertenece al ejército, y es indiscutible que la orden de proceder en su contra, dictada por el C. General en Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste, el auto que mandó abrirle proceso, la orden de aprehensión dictada en su contra por el C. Juez Instructor de la Plaza de Mérida, y el embargo trabado SOBRE LA TOTALIDAD de sus bienes por orden del mismo Juez, son actos por los cuales se pretende ejercer jurisdicción sobre la persona de mi poderdante, siendo evidente que las autoridades militares no tienen jurisdicción alguna

sobre civiles, de acuerdo con la garantía consignada en el principio constitucional que se invoca.

Si en la tesis general que he refutado, el Ministerio Público sostiene, siguiendo la opinión del Juez de Distrito, que el amparo es improcedente, porque de concederse se violaría el principio de la no retroactividad de las leyes en virtud de que los actos reclamados fueron cometidos antes de la vigencia de la Constitución, al afirmar hoy que no existe violación del artículo 13, porque las autoridades militares ya no conocen del proceso incoado por ellas a don Avelino Montes, manifiesta un profundo desconocimiento de los principios fundamentales del derecho, pues aun cuando no con toda franqueza, lo que afirma es que los actos reclamados han cesado por no conocer ya del proceso las autoridades militares, lo que es inexacto, pues los actos reclamados en el juicio de amparo de que se trata, no han cesado aún, como lo demuestra el hecho de estar actualmente embargados todos los bienes de mi mandante, EN VIRTUD DE UNA ORDEN DE AUTORIDAD MILITAR, y la circunstancia de ESTAR AUN EN VIGOR LA ILEGAL ORDEN DE APREHENSION DICTADA EN SU CONTRA TAMBIEN POR UNA AUTORIDAD MILITAR, lo cual es un obstáculo para que vuelva al Estado de Yucatán, con notorio perjuicio de sus intereses. El hecho de que las autoridades militares no conozcan actualmente del proceso por ellas incoado a mi mandante, en virtud de haberse inhibido, no puede, en modo alguno, hacer desaparecer o mudar la naturaleza de los actos que se reclaman, los cuales subsisten hoy con todos sus efectos anti-constitucionales, siendo, por lo tanto, indiscutible e innegable que por virtud de esos actos pesa hoy aún sobre mi poderdante, una orden de aprehensión que proviene de la autoridad militar, y sobre sus bienes un embargo que tiene el mismo origen. Es indiscutible que por estos conceptos se ha dejado a mi poderdante, de una manera ilegal y anti-constitucional, bajo la ju-

jurisdicción de las autoridades militares, y por consiguiente, existe una violación permanente y actual del artículo 13 de la Constitución de la República. Y así resulta que aun hoy, estando vigente la Constitución, y con ella el precepto que prohíbe a las autoridades militares, extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército, ESTAN VIGENTES también UNA ORDEN DE APREHENSION Y UN EMBARGO DICTADO POR UNA AUTORIDAD MILITAR CONTRA PERSONA QUE NO PERTENECE AL EJERCITO. Por consiguiente, permanece extendida sobre esa persona, contra todo derecho, la jurisdicción de la autoridad militar. Existe, pues, en la actualidad, una flagrante y notoria violación del precepto constitucional a que me refiero.



TRIBUNAL PLENO

Y respecto del embargo precautorio dictado y trabado sobre los bienes de mi poderdante, la violación constitucional es más notoria si cabe, pues aun cuando es verdad, como lo afirma la autoridad responsable, que ese embargo aparece dictado durante el período pre-constitucional, NO VINO A HACERSE EFECTIVO BINO HASTA EL DIA DIEZ DE MAYO, FECHA EN QUE YA ESTABA VIGENTE LA CONSTITUCION, COMO PUEDE VERSE EN LA COPIA CERTIFICADA DEL PROCESO QUE AL PRESENTE ESCRITO SE ACOMPAÑA. (Fojas 29 y 29 vuelta).

Por lo expuesto, queda plenamente demostrado que, contra lo que afirma el C. Agente del Ministerio Público, existe una violación actual y permanente del artículo 13 de la Constitución, contra la cual la Justicia de la Unión debe amparar y proteger a mi poderdante.

Respecto de la queja por violación del artículo 14, en virtud de embargo de los bienes, rentas y productos de mi poderdante, estima el Ministerio Público que es prematura, por no tratarse de actos de imposible reparación, razón por la cual rige para la procedencia del amparo por este capítulo, según el criterio del referido funcionario, la fracción II del artículo 7 de la Constitución, en relación con las fracciones III y IV del mismo precepto.

Como ya antes he demostrado, que el embargo precautorio es un acto de imposible reparación, repito aquí lo antes dicho, con lo cual queda desvanecida la petición del Ministerio Público y probada plenamente la procedencia del amparo en la forma en que fué pedido.

¿Si el amparo es procedente en cuanto a la forma lo es igualmente en cuanto al fondo? En otros términos, ¿existe realmente una violación a la garantía consignada en el artículo 14 constitucional? Sí, porque el embargo precautorio sólo procede con sujeción a reglas estrictas establecidas en las leyes procesales, y al decretar y llevar a efecto el monstruoso embargo precautorio de todos los bienes de mi mandante, no se observaron las formalidades tutelares de que el legislador ha rodeado un proceso tan trascendental y delicado, con notorio desacato de la garantía que se invoca, la cual previene terminantemente que nadie puede ser privado de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio ante los Tribunales previamente establecidos, EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo cual no se hizo en el presente caso.

La autoridad responsable reconoce en su informe que, al dictar el embargo precautorio no tuvo en cuenta lo prevenido en los artículos 306 frac. III, 311 y 317 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, alegando que solamente se tenía que sujetar a las reglas establecidas sobre el particular en las leyes federales. Ahora bien, si conforme al artículo 13 de la Constitución, los procesos por rebelión que se siguen contra personas ajenas al ejército, deben ventilarse ante la autoridad civil que corresponde, y en el caso presente la autoridad civil no es otra que el Juez de lo Penal del Estado de Yucatán, como lo reconoció el mismo Juez Militar al remitirle los autos cuando se inhibió, es claro que la ley aplicable era la del

Estado de Yucatán; pero prescindiendo de cuál sea la ley aplicable, y admitiendo, sin conceder, que sea aplicable la ley federal, el Juez Instructor no aplicó los artículos 166 frac. II y 170 del Código de Procedimientos Civiles Federales, que contienen preceptos idénticos a los contenidos en los artículos 306 frac. II, 311 y 317 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán; es decir, que el embargo precautorio sólo procede cuando un deudor elude el cumplimiento de sus obligaciones, y que el Juez debe fijar de manera clara y precisa la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia al dictar el embargo, y en el caso de autos no se cumplió con estos requisitos, habiéndose, por lo tanto, violado la garantía consignada en el artículo 14 de la Constitución.



TRIBUNAL PLENO

No es necesario discutir aquí más ampliamente este punto, pues ya lo hizo el Lic. Molina Font en el alegato presentado al Juez de Distrito de Yucatán, al que me permito referir a los señores Magistrados.

Siguiendo al Ministerio Público en su imprecendente pedimento, veámos lo que asienta al tratar de la violación del artículo 16 constitucional:

Dice el referido funcionario, textualmente: "por último, el acto de mandar aprehender a un individuo no es por sí mismo violatorio del artículo 16 de la Constitución en vigor.... ya que el artículo 16 de la Carta Fundamental exige únicamente, para dictar orden de aprehensión, que preceda denuncia, acusación o querrela de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y que estén apoyadas aquellas por declaración bajo protesta de persona digna de fe, o por otros hechos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, debiendo entenderse que este razonamiento lo hace el suscrito POR CUANTO A QUE ESTA SUBSISTENTE LA ORDEN DE APREHENSION, HOY EN PLENO REGIMEN CONSTITUCIONAL, mas nunca refiriéndose a la época en que se dictó, cuando, según la tesis enunciada en un

principio, no podía argüir violación de garantías individuales. Y actualmente la subsistencia de la orden de aprehensión no puede ser atacada ante el criterio del artículo 16". ¿Porqué? Porque el Juez Instructor Militar, en su llamado informe dice, y el Agente del Ministerio Público se conforma con esa afirmación: que la detención de Avelino Montes se decretó habiéndose previamente llenado los requisitos prevenidos por el artículo 16 de la Constitución de la República. Y agrega el Ministerio Público que: "si el quejoso sostiene que la subsistencia de esa orden de aprehensión que indiscutiblemente fué legítima en su origen, es atentatoria, debió probar, puesto que afirma ese aserto. No hay prueba que acredite la falsedad del informe del Juez; no hay prueba que justifique que en el caso no están llenados hoy los requisitos que establece el artículo 16 constitucional."

Afortunadamente al fin de su pedimento el Ministerio Público volvió por los fueros de la razón y del sentido común, y afirmó lo que yo he afirmado al refutar la TESIS GENERAL que él sostiene al principio de su pedimento. En efecto, el Ministerio Público dice, al referirse a los requisitos que deben llenarse para dictar una orden de aprehensión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución: que debe entenderse que ese razonamiento lo hace por cuanto a que está subsistente la orden de aprehensión hoy, en pleno régimen constitucional; pues si hoy, en pleno régimen constitucional, está subsistente la orden de aprehensión dictada contra el señor Montes, están igualmente subsistentes los demás actos que se reclaman, y por lo tanto, al conceder el amparo no se viola el principio de la no retroactividad de las leyes; pero dejando ésto aparte, entremos a refutar el fondo de la argumentación del Ministerio Público.

Dice el Ministerio Público que actualmente la subsistencia de la orden de aprehensión no puede ser atacada ante el criterio del artículo 16, porque en su concepto al dictarla se llenaron los requisitos que previene ese precepto

constitucional, fundándose en que así lo asienta la autoridad responsable en su informe, de donde se deduce que el Ministerio Público tiene el criterio de que si no se hubiesen llenado esos requisitos al dictarse la orden de aprehensión, el amparo procedería hoy por este capítulo; pero como en su concepto sí se cumplió con esos requisitos, el amparo es improcedente.



TRIBUNAL PLENO

Veámos si la afirmación de la autoridad responsable, que el Ministerio Público acepta de plano, relativa a que al dictar la orden de aprehensión de mi mandante se llenaron los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución, es cierta. En la demanda de amparo y en los alegatos presentados al Juez de Distrito del Estado de Yucatán, se afirma que los hechos determinados que se imputan a mi poderdante son el de haber pagado parcialmente una carta de crédito librada por su casa de comercio a favor de los señores Leandro Meléndez, Manuel J. Sánchez, José Rafael de Regil, Nicanor Ancona y Domingo Hevia, y haber manifestado al Sr. Nicanor Ancona, según asegura éste, que no necesitaba comprar víveres para enviar a Yucatán, pues ya mi poderdante los había remitido, y que más necesario era comprar armas. El primero de los hechos imputados al Sr. Montes no tiene el carácter de delito, sino de simple acto de comercio, perfectamente lícito, a los que siempre se ha dedicado; y el segundo, tampoco tiene el carácter de delictuoso que se ha querido darle. Ambos hechos están apoyados únicamente por las declaraciones de los Señores Nicanor Ancona Cámara y Domingo Hevia Barbachano, como puede verse a fojas una a dos frente, y cuatro a cuatro vuelta de la copia certificada del proceso que se acompaña, y estas personas son enteramente indignas de fe, por haber tomado participación directa en el movimiento argumedista, según declaración propia, y estar a merced de la autoridad militar que dió la orden de incoar el proceso, la cual no

es otra que la parte acusadora del Sr. Montes. Por lo tanto, no existiendo ningún hecho determinado imputable al señor Montes que merezca pena corporal, y teniendo en consideración que los que se le imputan, a más de no ser delictuosos, están apoyados por declaraciones de personas indignas de fe, no se llenaron los requisitos que establece el artículo 16, y en consecuencia, el amparo es perfectamente procedente por este capítulo.

A mayor abundamiento, debe advertirse que, según consta de la copia certificada del proceso que se acompaña, --- la declaración del señor Hevia fué rendida ante un Sub-Comité del Senado Americano, y esa declaración fué traducida, según se dice, de un cuaderno misterioso que no figura en el expediente, estando, por otra parte, en contradicción con la declaración rendida por Ancona, en la cual este señor Manifiesta algunas falsedades que fueron desmentidas por la persona por él citada para ratificar<sup>declaración</sup> las, el Sr. Lic. D. Leovigildo Díaz, cuya consta de fojas seis vuelta a siete frente de la copia certificada que se acompaña.

Verdaderamente no puede del todo culparse al Ministerio Público, pues él dice que como no ha habido prueba que demuestre la falsedad del informe de la autoridad responsable, él tiene que admitir que, de acuerdo con lo afirmado por dicha autoridad, se llenaron los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución; pero el Ministerio Público debió haberse fijado en lo que ya he asentado al principio de estos alegatos, es decir, que las pruebas rendidas en tiempo oportuno por el Lic. Molina Font ante el Juez de Distrito, y de las cuales consta plenamente que al dictarse la orden de aprehensión no se llenaron los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución, fué desechada por dicho Juez, y su deber debió haber sido antes de formular su pedimento, o bien pedir la prueba ofrecida en tiempo ante dicho Juez de Distrito, o no formular pedimento alguno por lo que se



refiere a la violación de la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitución de la República.

Llegamos, pues, a la razón por la cual el Juez de Distrito se negó a recibir la prueba pedida en tiempo por el Lic. Molina Font; se negó a recibirla porque sabía que esa prueba, como muy bien lo dice en su auto de 29 de mayo, ilustraría sin duda su criterio, y el Juez de Distrito parece que no quiso que su criterio se ilustrara, con el fin de poder dictar la ilegal sentencia cuya revisión se ha pedido, y cuya revocación se impone por honor del alto tribunal revisor.

La Corte, sin duda alguna, no se negará a recibir esa prueba que hoy le ofrezco para mejor proveer, y en vista de que en ella consta plenamente que no se llenaron los requisitos requeridos por el art. 16 de la Constitución para dictar una orden de aprehensión, y en vista de las razones aducidas por el Lic. Molina Font al tratar de este punto en los alegatos presentados al Juez de Distrito y los cuales obran acumulados al expediente respectivo, se servirá declarar que la Justicia de la Unión ampara y protege al Sr. D. Avelino Montes por la violación que en su persona ha sufrido de la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitución, y como creo haber destruido todas las argumentaciones del Ministerio Público en contra de la concesión del amparo pedido por violación de las garantías consignadas en los artículos 13 y 14, espero que en definitiva ese H. Tribunal, obrando con toda la justificación que ha caracterizado los primeros tiempos de su funcionamiento, revoque la sentencia a revisión, y declare en definitiva que la Justicia de la Unión ampara y protege al Sr. D. Avelino Montes contra los actos de que se queja.



TRIBUNAL PLENO

## CONSIDERACIONES MORALES.

CUANDO A UN EXTRANJERO HONORABLE, COMO LO ES MI MANDANTE, QUE POR SU SIMPLE CALIDAD DE EXTRANJERO ES AJENO AL EJERCITO, SE LE INICIA UN PROCESO MILITAR CON NOTORIA VIOLACION DE LO QUE PRESCRIBE LA CONSTITUCION VIGENTE; CUANDO EN ESE PROCESO SE DICTA UNA ORDEN DE APREHENSION EN SU CONTRA, SIN QUE CONCURRAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA MISMA CONSTITUCION; CUANDO PARA RESPONDER DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE PUEDE RESULTAR DE LA COMISION DEL SUPUESTO DELITO DE REBELION QUE SE LE IMPUTA, SE EMBARGA LA TOTALIDAD DE SUS BIENES, Y EN ESE EMBARGO NO SE LLENAVAN LAS FORMALIDADES TUTELARES PREVENIDAS POR LAS LEYES PROCESALES, CON NOTORIA VIOLACION DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL CLARO Y TERMINANTE; CUANDO LAS AUTORIDADES QUE ORDENAN LA INCOACION DE ESE PROCESO Y LAS QUE ACATAN LA ORDEN LO HACEN A SABIENDAS DE QUE VIOLAN LA CONSTITUCION QUE HAN PROTESTADO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR; CUANDO SE PIDE AMPARO CONTRA LOS ACTOS EXPRESADOS Y EL JUEZ DE DISTRITO SE NEGGA A RECIBIR LA PRUEBA OFRECIDA EN TIEMPO Y DICTA UNA SENTENCIA NOTORIAMENTE CONTRARIA A LA LEY; CUANDO LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO QUE INTERVIENEN EN EL AMPARO FORMULAN PEDIMENTOS INCONGRUENTES Y CONTRARIOS A LAS CONSTANCIAS DE AUTOS; CUANDO UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, EL C. GENERAL EN JEFE DEL CUERPO DE EJERCITO DEL SUPLENTE EN SU LLAMADO INFORME CON JUSTIFICACION, HACIENDO USO DE LA INFLUENCIA QUE TIENE SOBRE EL JUEZ DE DISTRITO, EN VIRTUD DE SU ELEVADO CARACTER Y DE HABER SIDO AQUEL FUNCIONARIO MIEMBRO DEL TRIBUNAL LLAMADO DEPARTAMENTO LEGAL, QUE DEPENDIA DIRECTAMENTE DEL MISMO GENERAL EN JEFE, LE INDICA LA FORMA EN QUE DEBE FALLAR EN EL AMPARO; CUANDO ESA MISMA AUTORIDAD RESPONSABLE REPITE OFICIALMENTE SU OPINION-CONSIGNA EL DIA DE LA AUDIENCIA DE ALEGATOS, COMO PUEDE VERSE A FOJAS OCHO DEL EXPEDIENTE Y SE DA LA COINCIDENCIA DE QUE LA SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO

ESTA DE ACUERDO CON LA OPINION DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE,  
NO QUEDA EN ESTE PAIS OTRO REMEDIO QUE ACUDIR AL MAS ALTO  
TRIBUNAL DE JUSTICIA PIDIENDOLE LA REVOCACION DE ESA SEN-  
TENCIA, CON LA SEGURIDAD DE QUE POR EL ALTO HONOR DEL  
MISMO ALTO CUERPO, PRONUNCIARÁ SU FALLO REVOCANDO POR  
UNANIMIDAD LA ILEGAL SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO.

México, julio treinta y uno de mil novecientos

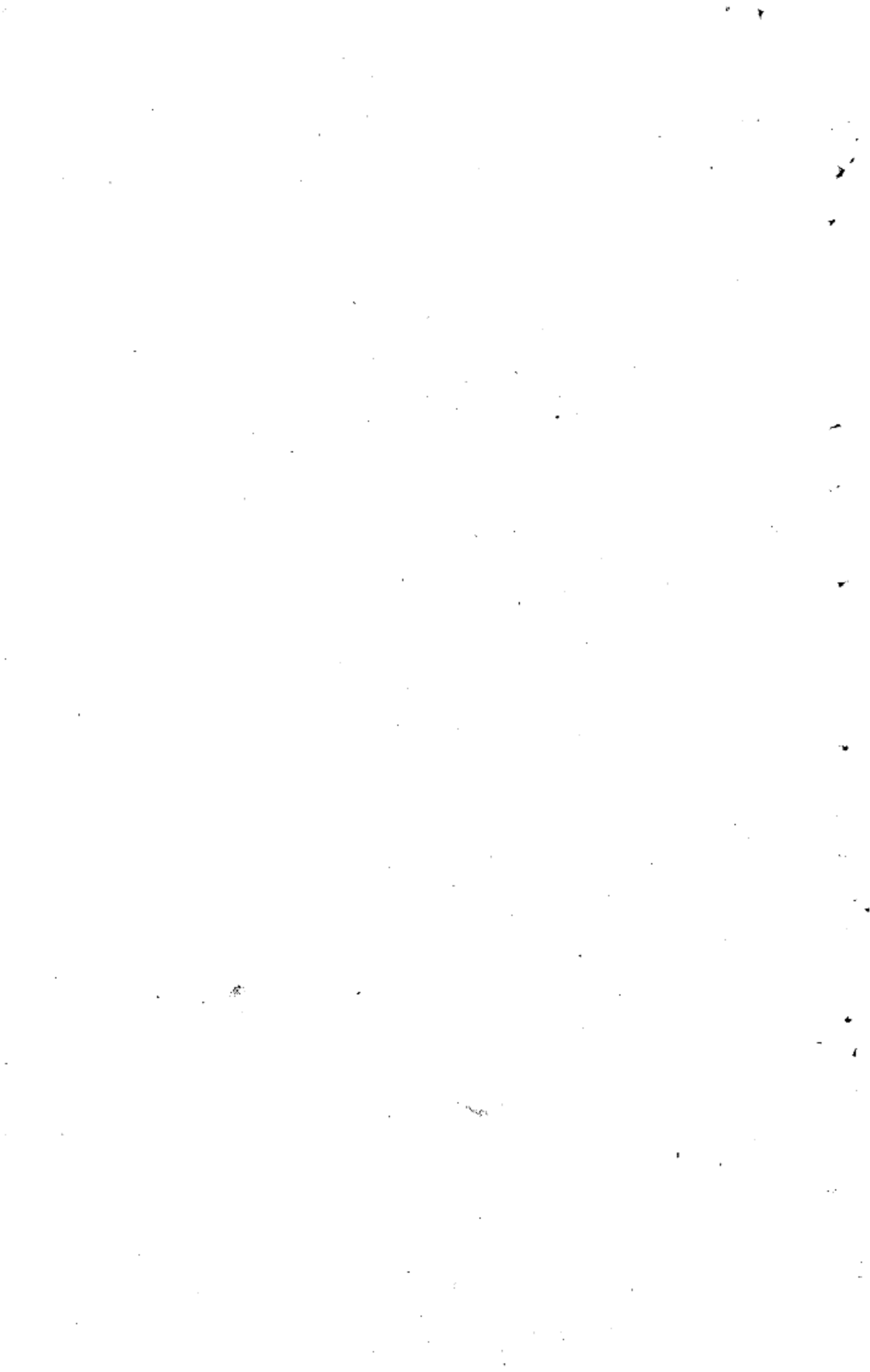
diecisiete.

*José Vela*  
Lic. Benjamín Abarca

Recibido junto con los documentos a que se  
refiere. Diez y veinte de la ~~transacción~~ del día veintayuno  
de julio de mil novecientos diez y siete. Causa  
*Benja*



TRIBUNAL PLENO

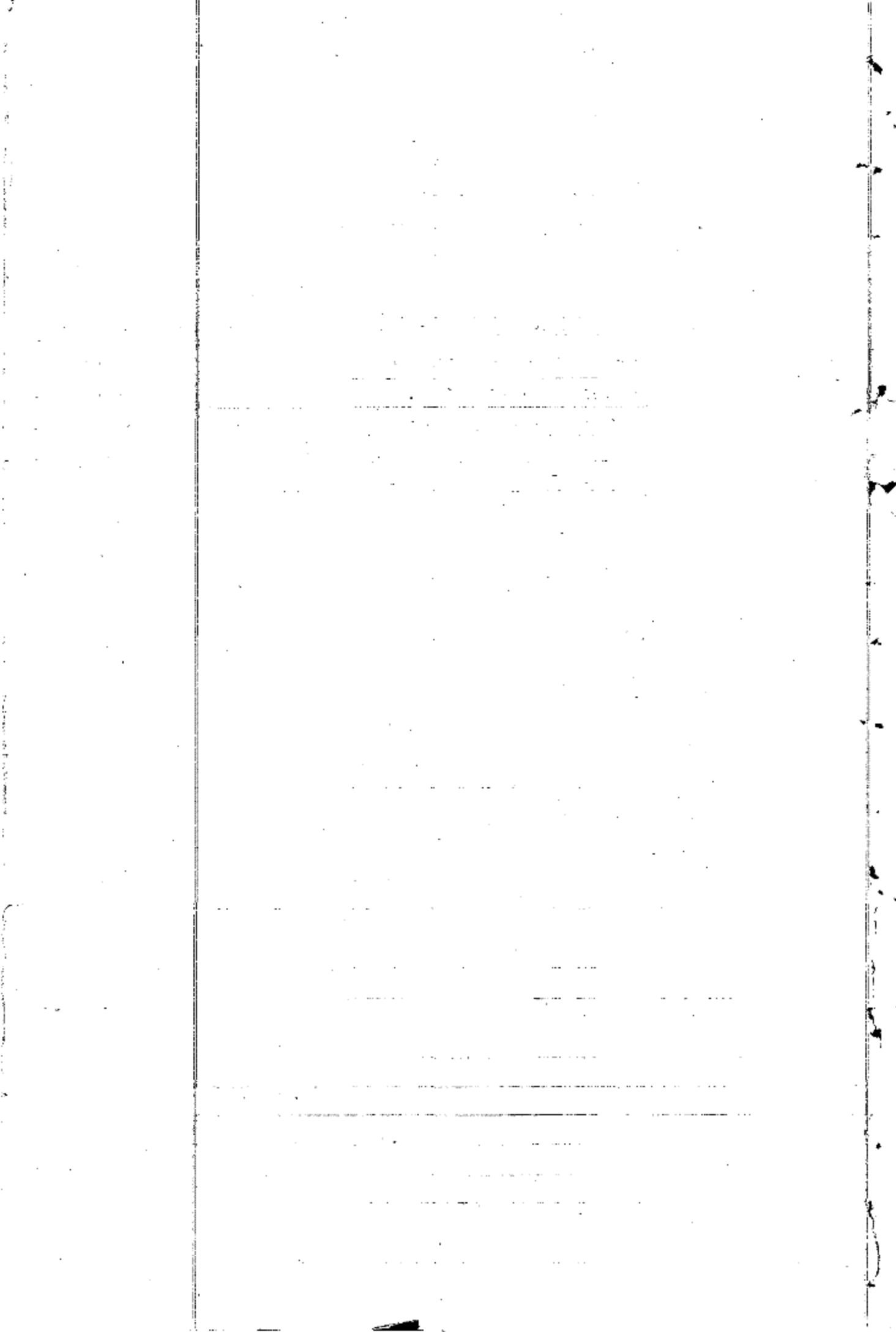


QQQQQQQQQ

1917

QQQQQQQQQ

Copia certificada de las constancias de l proceso que se incluye a l Señor Avelino Montes y al señor Abel Ortiz Argumedo y socios por rebelión=. Contiene ademas en presente certificación las constancias relativas a la demanda de embargo precautorio y a la demanda de responsabilidad civil instaurada contra el referido señor Avelino Montes.



Licenciado Lorenzo Guillermo G., Secretario interino del Juzgado primero de lo Criminal de este Departamento Judicial de Mérida de Yucatan.....

*Excmo. Sr. Jefe*  
*por la que*  
*se acompaña*



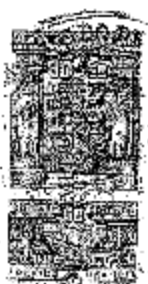
Certifico: que en la causa que se sigue a Avelino Montes, Abel Ortiz Argumado y socios por el delito de rebelión, existen las constancias siguientes: "Un sello que dice: Ejército Constitucionalista. Cuerpo de Ejército del Sureste.- Estado Mayor. Sección..... 1/a.- Número 678. Para que se sirva Ud. practicar la averiguación previa a que se refiere el artículo 23 del Código de Procedimientos Penales en el Fuero de Guerra, le remito en una foja útil un oficio del G. Agente del Ministerio Público Militar y los anexos a que hace referencia. Sirvase acusar recibo y en su oportunidad dar cuenta con el resultado.- Reitero a Ud mi atenta consideración. Constitución y Reformas.- Mérida, Yuc, Mex, Marzo 13 de 1917.- El General en Jefe.- S. Alvarado.- G. G. A. Al C. Onel. Juez Instructor Militar. Presente.--- Un sello que dice: E. Constitucionalista. Cuerpo de Ejército del Sureste. Juzgado de Instrucción. Estado de Yucatán.--Ante el Juzgado Instructor Militar se inició un proceso por el delito de rebelión en contra del infidente Abel Ortiz Argumado y socios; y habiendo llegado a mi poder el cuaderno que acompaño, relativo a las audiencias habidas en el Sub-comité de Agricultura y Selvicultura del Senado de los Estados Unidos, en cuyo texto aparecen algunas declaraciones del señor Domingo Evia, de las cuales se desprenden datos de culpabilidad por complicidad en el delito de rebelión en contra del señor Avelino Montes, segun es de verse en la traducción que acompia simple asimismo acompaño, lo pongo en conocimiento de usted para que se sirva dictar la orden de proceder respectiva, a fin de que el Juez Instructor Militar practique la averiguación pertinente. Protesto a Usted mis subordinación y respeto. Constitución y Reformas. Mérida, marzo 12 de 1917.-Agente del Ministerio Público, Teniente Coronel.- S. Martínez López.---Al C. Gobernador y Comandante Militar del Estado. Presente.-----

*go*

Declaraciones del señor don Domingo Evia, hacendado de Yucatan, México, en las audiencias del Sub-Comité de Agricultura y Selvicultura del Senado Americano.-----Mr. Spencer. (Enseñándole un papel al testigo) Es esta la carta de crédito que Uds. recibieron de Montes y Co.? Sr. Evia.-Sí, sr esa es, Mr. Spencer.-Ud. le presentó la carta de crédito al Sr. Smith?- Sr. Evia.- Nosotros se la presentamos personalmente al Sr. Montes en su oficina núm. 76 ó 96 de la calle Beaver; no recuerdo bien el número. Mr. Spencer.-Le dijo Ud al señor Montes para qué quería Ud el dinero?- Sr. Evia.-Nosotros l

explícanos al Sr. Montes, pues primero se negó a pagarla y finalmente convino en pagar la carta de crédito en parcialidades; no en junto. Mr.- Spencer.- Ud quiere decir en pagos parciales? - Sr. Evia.- Sí, en pagos parciales; no recuerdo la fecha exacta, creo que fué el viernes cuando lo vimos por primera vez y nos dijo que regresásemos al otro día, sábado. Fuimos y quedó de acuerdo en pagarnos ciento ochenta mil pesos, moneda americana, extendió un cheque por dicha suma y nos dirigió al hermano de Mr. Smith.--Mr. Spencer.- A la orden de quien fué extendido el cheque? - Sr. Evia.- Fué extendido al portador, (a efectivo) Sr. Spencer.- Por ciento ochenta mil pesos? Sr.- Evia.- Por ciento ochenta mil pesos. Fuimos al "Second National Bank" y no recuerdo si fué el Presidente, me supongo que fué el Cajero del Banco quien nos puso un impedimento para pagar el cheque, porque era una suma que no se acostumbraba pagar al portador y discutió esto con el hermano del señor Smith; creo que al principio no lo quería pagar, no lo sé; el caso es que tuvieron un largo tiempo para pagarlo, como una o dos horas.- Sr. Spencer.- Y Ud estaba de acuerdo para endosar el cheque? Sr. Evia.- Me preguntó si firmaría yo el cheque, ponerle mi nombre en el dorso, y dije que sí lo haría si recibía el dinero, pero el Sr. Smith, no recuerdo su primer nombre, el hermano del Sr. Smith, no quería que yo lo hiciera.- Sr. Spencer.- Por qué motivo? Sr. Evia.- Porque el señor Montes no quería que se supiese quien recibía el dinero, y finalmente después de una o dos horas me pagaron. El Cajero me pagó sin que yo firmara ningún recibo. Me pagó en efectivo, pero me dijo que era extraño que el Sr. Montes o el Sr. Smith no quisiesen que nadie supiese quien recibía el efectivo del cheque y además me dijo el Cajero que quería el endoso del cheque para saber su historia; si Ud o Ancona lo endosaba lo deseaba saber para nuestro archivo; esto fué lo que me dijo el Cajero.- Sr. Spencer.- Ud le dijo al señor Montes lo que pretendía hacer con el dinero? - Sr. Evia.- Si Sr. Nosotros le le dijimos que pretendíamos comprar municiones y comestibles para enviar a Yucatán, y el nos dijo "NO TIENEN NECESIDAD UDS. DE COMPRAR POR HOY COMESTIBLES PUES YA TENGO TRES BARCOS EN CAMINO A PROGRESO-Y ME SUPONGO QUE UNO O DOS HABRAN YA LLEGADO CARGADOS CON COMESTIBLES, DE MODO QUE POR AHORA NO TIENEN NECESIDAD DE COMPRAR, QUE ESPEREN ALGUN TIEMPO PARA ADQUIRIRLO y nos mostró los conocimientos de embarque de los barcos que ya estaban en camino a Progreso.- Sr. Spencer.- Le aconsejó a Uds. que compraran armas en vez de comestibles? Sr.- Evia.





Nos dijo que no teníamos necesidad de comprar comestibles por entonces. Sr. Spencer.-El Sr. Montes fué obligado de algun modo a extender a Uds. la carta de crédito o fué un acto voluntario de su parte? Sr. Evia, He dicho anteriormente que, Robledo sabia que Argumedo nos iba a mandar con este ORO y fué al Palacio de Gobierno y tuvo una entrevista con Argumedo en la cual le dijo que no tenia necesidad de mandarnos con el ORO, que él mandaria una carta de crédito. Esto lo explica. No es así?

Mérida, marzo (14) catorce de (1917) mil novecientos diez y siete. Acuse recibo de la orden que antecede número seiscientos setenta y ocho, del C. General en Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste y cúmplase; practíquense al efecto las diligencias necesarias para la averiguación de los hechos a que se refiere el C. Agente del Ministerio público en su comunicacion de fojas dos de estos autos. Haga en este expediente la Secretaria del Juzgado certificaciones de las constancias relativas que haya en el proceso por rebelión seguido en contra de Abel Ortiz Argumedo y socios, informe si en algunos otros expedientes instruidos por el Juzgado hay datos que pudieran tener relacion con el delito materia de estas diligencias; de conformidad con la circular del C. Comandante Militar del Estado, relativa, dirijasele atento oficio a fin de que se sirva nombrar dos peritos traductores, a fin de que confronten la traducción en copia simple, exhibida por el Ministerio Público y examinando el cuaderno presentado traduzcan todas aquellas declaraciones rendidas ante el Senado americano y que tengan conección con los hechos de cuyo esclarecimiento se trata. Notifiquese al Ministerio Público; tómese razón y cumplimentado este acuerdo dése cuenta. Lo proveyó el C. Lic. Ernesto L. Sánchez Vera, Coronel Juez Instructor Militar. Lo certificado.-Lic. E. L. Sánchez Vera.-S. Peniche y Osorio.-Rubricas.

En la misma fecha notifiqué el auto anterior al Ministerio Público y enterado firma. Doy fé.-S. Martínez López.-Peniche y Osorio.-Rubricas.- Acto continuo y en cumplimiento de lo mandado en el auto que antecede la Secretaria certifica: que en el proceso por el delito de rebelión instruido en contra de Abel Ortiz Argumedo y socios, se hallan los números cinco mil doscientos noventa y siete, cinco mil doscientos noventa y ocho y cinco mil trescientos seis y cinco mil trescientos doce, del "Diario Oficial" del Gobierno del Estado, de los cuales periódicos aparece que se hizo cargo del Gobierno como Comandante Militar, Abel Ortiz Argumedo, una vez evacuada la ciudad por el General Toribio V. de los Santos; una proclama al pueblo Yucateco, suscrita por Ortiz Argume-

do como Jefe Militar del Estado, por Leandro E. Melendez como Jefe de las armas y por Ignacio Magaloni, como Jefe Civil, cuyo texto es el siguiente: !! Al Pueblo Yucateco!! Acabamos de entrar a esta culta y noble ciudad los soldados que se opusieron a todas las bajas, a todos los desmanes que el grupo de gentes extrañas a esta sufrida tierra cometió en el corto tiempo que tuvo el poder en sus manos. Llegamos triunfantes! Por donde quiera que pasamos obtuvimos la victoria, y ahora victoriosos, a la sola noticia de que nos acercábamos a esta Capital, esa tropa de desvergonzados que insultó a nuestras familias, que vejó nuestros hogares, que inundó de odio a toda la Sociedad huye ridiculamente, cobardemente.... pero llevándose los fondos públicos como verdaderos saltadores, poniéndose fuera de la ley. Con nosotros está el pueblo que es el alma de las revoluciones, el pueblo que siempre triunfa, y que viene ya en torno nuestro a defender nuestros hogares, nuestras familias y nuestros intereses. Entretanto las familias ya nada tienen que temer y debe renacer entre ellas la tranquilidad que esa gente les arrancó con tanta insolencia. Tenemos tropas suficientes para combatirlos y del esfuerzo que hagamos todos los hombres libres de esta tierra, todos los yucatecos honrados, dependerá el bienestar de Yucatán. No somos reaccionarios ni somos foragidos. Marchamos de acuerdo con el gradioso Plan de Guadalupe que es la liberación de todos los Mexicanos. Por voluntad del pueblo, ampliamente manifestada, los suscritos nos hemos encargado del Gobierno del Estado, constituyendo una junta de Gobierno que asume, con regocijo inenso y con decisión incontrastable, todas las responsabilidades presentes y futuras, porque late con nosotros el corazón de la patria Yucateca, y con el queremos estar. Ya se dará forma legal al Gobierno que será Gobierno honrado, noble, sereno y enérgico, que vendrá a hacer el bien y a garantizar y respetar todo lo que sea digno de respeto y garantía. Abel Ortiz Argumedo Jefe Militar del Estado. Leandro E. Melendez, Jefe de las Armas. Ignacio Magaloni Jefe Civil. Un telegrama suscrito por Argumedo, L. E. Melendez, Temístocles Correa y Magaloni, dirigido al Primer Jefe en que le manifiestan haber derrocado al Gobierno del General de los Santos. En el segundo de los periódicos mencionados, nombramientos de empleados y funcionarios públicos. En el tercero de dichos periódicos se continua la lista de los nombramientos. En el tercero se publica una comunicación en que se nombra a Federico Escalante, Joaquín E. Cámara



Chan y Florencio E Cano en comision para formar una seccion especial para recibir de los hacendados un préstamo que se les impuso. En el ultimo de los periódicos indicados se publican algunos documentos de adhesión al llamado Gobierno Argumedista. A fojas veinte y seis del mismo expediente se halla en copia una carta del tenor siguiente: Marzo 2 de 1915. No 1756. -Señor H. J. Smith. -New York. Muy señor mio y amigo. Tengo el gusto de presentar a Ud. los señores Leandro E. Melendez, Nicanor Ancona, José Rafael de Regil, Domingo Evia y M. J. Sanchez quien me permite recomendar a sus finas atenciones, suplicándole se sirva entregarles mancomunadamente hasta la cantidad..... \$ 480.000.00 U.S. Cy. (cuatrocientos ochenta mil dollars) cargándose en cuenta con las cantidades entregadas y enviándole los comprobantes respectivos como de costumbre. Su afmo amigo atento y S. S. Avelino Montes pp. E. Robleda M. -P.D. El señor don Nicanor Ancona podrá presentar a Ud. las personas mencionadas y que le acompañan para los efectos de identificación. Vale. Rúbrica..... Recibimos por cuenta de esta carta \$ 180.000. n/c. doscientos ochenta mil dollars. -Dom. F. Evia. -Nicanor Ancona C. -Páguese a la orden del señor don Domingo Evia a quien cedo todos mis derechos, para que con su sola firma recoja el saldo de esta carta crédito. -Nicanor Ancona C. -New York marzo 13 de 1915. -S. Peniche y Osorio.-----

En la misma fecha cumpliendo con lo dispuesto en el auto anterior el Secretario que suscribe informa que en el expediente instruido en este Juzgado contra Avelino Montes por el delito de falsificación y el cual se encuentra en la actualidad en el Juzgado de Distrito, pudiera haber algún dato relacionado con el hecho delictuoso que se averigua. -S. Peniche y Osorio. ---Acto seguido y bajo oficio No 1507 se acusó recibo al C. General en Jefe de su comunicacion de fecha de ayer; así como que tambien se dirigió oficio al C. Gobernador y Comandante Militar del Estado, cumplimentando el auto anterior. Doy fe. -Peniche y Osorio. -Merida, marzo (14) catorce de (1917) mil novecientos diez y siete. Líbrese atento oficio al C. Juez de Distrito en el Estado para que se sirva remitir a este Tribunal, con caracter devolutivo, el expediente de la causa instruida contra Avelino Montes y socios por el delito de falsificación de moneda, a que se refiere el informe anterior. Notifíquese al Ministerio Público y cúmplase. Lo provee y firma el C. Lic. Ernesto Sánchez Vera, Coronel Juez Instructor Militar. Lo certifico. -Lic. E. L. Sánchez Vera. -S. Peniche y Osorio. Rúbricas.----- En la propia fecha se libró oficio al C. Juez de Distrito en el Estado, cumplimentando el auto anterior. Conste. -Peniche y

Osorio.-En igual fecha se libraron citas a los señores Nicanor Ancona, José Rafael de Regil, Domingo Evia y Manuel J. Sánchez, para que comparezcan ante este Juzgado en la audiencia del sábado próximo, a las nueve y media de la mañana. Conste.-Peniche y Osorio. En diez y siete del mismo mes presente el Ciudadano Manuel J. Sánchez, en virtud de cita, fué interrogado con las formalidades legales respecto a los hechos que se averiguan y declaró: ser natural de Mérida, de cuarenta y siete años de edad, casado, comerciante con habitación en la calle cincuenta y siete número cuatrocientos setenta y ocho. Que ignora que participación haya tenido el señor Avelino Montes en el movimiento. Argumedista principalmente porque no tiene relaciones con dicho señor. Y a preguntas especiales contestó: que siendo Presidente de la Cámara de Comercio en la época en que Argumado se hallaba posesionado del Estado habiendo una gran escasez de víveres fué llamado por el Secretario General Señor Manuel Irigoyen Lara, para resolver la situación comprándose víveres en los Estados Unidos y que el declarante tanto como Presidente de la Cámara como comerciante bien dispuesto a cooperar en bien del público, pues sin miras políticas se prestó de buena voluntad para ir a New Orleans a comprar mercancías y que como el comercio no quisiese dar fondos al Gobierno de Argumado dijo que daría setenta y cinco mil dollars; que advierte que él invitó al Comercio a comprar víveres por su cuenta los comerciantes y como estos no quisieran entonces el Gobierno de Argumado le hizo la proposición <sup>que</sup> y él aceptó de ir a comprar víveres por cuenta de aquel Gobierno; que al declarante le dijeron que el Jefe de la Comisión que iba a los Estados Unidos a comprar armas le daría <sup>y cinco</sup> setenta mil dollars, según orden expresa que llevaba la comisión que estaba formada de los Señores Leandro Melendez, Domingo Evia, Nicanor Ancona, José Rafael de Regil y que este es el motivo por el cual la carta de crédito que por la suma de cuatrocientos ochenta mil dollars que llevaba la comisión figuraba el nombre del declarante, pero que según documentos que obran en poder del mismo se estableció claramente que su derecho a dicha letra no excedía a la suma de setenta y cinco mil dollars; que los documentos a que acaba de referirse son actas que levantaron a instancias del declarante los comisionados Argumedistas y el mismo en la Habana y en New York, <sup>que</sup> además por el día dos de marzo de mil novecientos catorce el Gobierno de Argumado libró un oficio que el declarante no aceptó porque no estaba redactado



*gjo*

claramente. Que sabe que los documentos de crédito a que se ha referido los pagó parcialmente en New York Avelino Montes, es decir que el pago se hizo por un señor Smith poderdante de Montes y a cuyo cargo iban la carta de crédito y un cheque de diez y nueve mil dollars. Y que está dispuesto a ampliar su declaración si es necesario y firmo—  
Doy fé.—Lic. E. L. Sanchez Vera.—S. Peniche y Osorio.—Al margen.—M. J. Sanchez.—Rúbricas.-----En diez y nueve del mismo compareció en virtud de cita el C. Nicanor Ancona y previa la protesta de conducirse con verdad de lo que fuese preguntado contestó: que se llama como se ha escrito, natural de Mérida, de treinta y cinco años, casado, comerciante con habitación en la calle sesenta y siete número quinientos veinte y cinco. Que respecto a los hechos sobre los cuales se le interroga sabe lo siguiente: que por el mes de marzo de mil novecientos catorce, pocos días después de que Abel Ortiz Argumedo se apoderó del Gobierno del Estado el declarante fué llamado por el mismo Argumedo y le dijo que el Gobierno necesitaba del que habla sus servicios para que fuese al extranjero a comprar armas y pertrechos de guerra y que habiendo aceptado la comisión fué nombrado en unión de los señores Domingo Evia, Rafael Regil y Leandro Meléndez a quienes se agregó don Manuel J. Sánchez quien iba comisionado para comprar víveres. Que Argumedo le dijo que iban a llevar unos documentos por cuatrocientos ochenta mil dollars y que supo que la carta de crédito que aparearía esa suma la daría la casa Avelino Montes y que en la casa de Gobierno tuvo el mismo Argumedo con el representante de Montes don Eduardo Roble da algunas conferencias para ese objeto. Que llegó el momento de parti y que se les entregó en efecto una carta de crédito a cargo de J. M. Smith por la expresada suma de cuatrocientos ochenta mil dollars de los cuales habian de darse setenta y cinco mil al comisionado de comprar víveres don Manuel J. Sánchez. Que una vez en New York se presentó el declarante y Domingo Evia con la carta de crédito a cobrarla a Avelino Montes personalmente quien dijo en un principio que allí no era mas que un empleado y que no podía hacer pago por estar ausente el señor Smith; que en tal virtud se fueron el que habla y Evia para tomar un acuerdo con Regil y Meléndez cuando recibió un recado suscrita por un empleado de Montes en que decía éste al declarante que fuera a hablar con Montes en su casa particular y que allí con mas franqueza le dijo Montes que qué era lo que les urgía comprar? a lo que contestó el hoy declarante que víveres y repuso Montes que no se preocuparan por adquirir víveres pues que ya los había mandado y le mostró al efecto unos documentos de embarque; que como el declarante le

manifestara que tal vez no venian todas las cosas que se necesitaban, se confrontaron allí mismo las listas de lo que los comisionados iban a comprar y lo que mandó Montes resultando más estos. Que Montes le dijo que lo que necesitaban comprar era armas y que iba a pagar en partes la carta de crédito y que así lo hizo hasta completar la cantidad de doscientos cuatro mil doscientos cincuenta dollars, negándose a cubrir el resto sin dar explicación, seguramente porque en ese entonces ya estaba viendo en el poder al Gobierno Constitucionalista. Que para mayor claridad respecto al asunto presenta en copias simples las actas levantadas en la Habana y New York; que acerca de esto ha declarado también ante el Notario Leovigildo Díaz y que está dispuesto a ministrar a las autoridades los datos que se le pidan haciendo notar para concluir que como consta en la declaración que rindió en el expediente instruido en contra de Argumedo y socios que el declarante goza de amnistía por esos acontecimientos y la participación que en ellos tuvo. Rectificó lo expuesto y firmó. Doy fé. E. L. Sanchez Vera, -S. Peniche y Osorio. -Al margen Nicanor Ancona C. Rubricas. --, En la Ciudad de la Habana y a los nueve días del mes de marzo de mil novecientos quince, reunidos en hotel Inglaterra los señores Leandro E. Meléndez, Nicanor Ancona, Domingo F. Evin y José Rafael de Regil, comisionados por el Gobernador y Comandante Militar del Estado de Yucatan don Abel Ortiz Argumedo para la compra de armas y pertrechos de guerra y presente el señor don Manuel J. Sánchez, comisionado por el mismo para la compra de víveres acordaron todos los citados dar comienzo desde luego al cumplimiento de sus respectivas comisiones, en la forma siguiente. Los comisionados para la compra de pertrechos de guerra tomaron la resolución de dividirse en dos grupos para la mas pronta ejecución de las compras que tratan de llevar a cabo quedando en esta ciudad los señores Leandro E. Meléndez y José Rafael de Regil y yendo a la ciudad de New York los señores Nicanor Ancona y Domingo F. Evin y se acordó que el señor Manuel J. Sánchez fuese a la ciudad de New Orleans centro principal de la compra de víveres a que fué comisionado, que dada la premura de tiempo en que se encuentran los referidos comisionados y en vista de que la carta de crédito por valor de cuatrocientos ochenta mil dollars les fué entregada para cobrar mancomunadamente en obvio de tiempo y para remediar principalmente la grandísima escasez que se presenta en el Estado de Yucatan resolvieron los comisionados que en vez de ir todos juntos a la

#



ciudad de New York a cobrar la referida carta de crédito para dividirse los fondos en la forma y cantidades necesarias para llenar su cometido, que los Sres. Leandro E. Meléndez, José Rafael de Regil y Manuel J. Sánchez extendieron un poder como en efecto lo extendieron a favor de los Sres. Nicanor Ancona y Domingo Evia, para que estos hagan efectiva la precitada carta de crédito, dando a los mismos instrucciones especiales de remitir inmediatamente despues de verificado el cobro al Sr. Manuel J. Sánchez la suma de setenta y cinco mil pesos oro, o sea dollars, asignados por el Sr. Gobernador y Comandante Militar del Estado de Yucatán D. Abel Ortiz Argumedo, para la compra de víveres, de situar a los señores Meléndez y Regil los fondos que necesiten para cubrir las compras que efectuaron en esta ciudad, quedando en poder de los Sres. Ancona y Evia el saldo de los fondos de los que podran disponer para las compras que hagan, dejando cualquier remanente de dichos fondos a disposición de la Comisión encargada de comprar armas. Esta comision acordó igualmente que tan luego se reúnan en el lugar y tiempo que fijarán oportunamente, cada miembro dará cuenta de las sumas que hubiere recibido, de las compras que hubiere verificado y de los gastos que hubiese erogado en el ejercicio de su misión levantándose el acta correspondiente que formaran los cuatro comisionados, para comprar armas y procederán enseguida a nombrar Tesorero y un Secretario, fungiendo como Presidente el Sr. Leandro E. Meléndez, quien fué nombrado con este carácter por el Sr. Gobernador y Comandante Militar del Estado de Yucatán Don Abel Ortiz Argumedo, segun comunicación de dicho Sr. de fecha dos del presente que obra en poder de dicho Sr. Meléndez. Con lo que termina la presente que firman todos para constancia. Habana, Marzo 9 de 1915. -Leandro E. Meléndez-Rúbrica. -Nicanor Ancona C.-Rúbrica. -J. Rafael de Regil C.-Rúbrica. -Domingo F. Evia.-M. J. Sánchez.-Rúbricas.-----

En la ciudad de New York a primero de abril del año de 1915, reunidos en el Hotel Indicott, los Sres. Leandro E. Meléndez, Nicanor Ancona C, José Rafael de Regil y Domingo Evia B, comisionado por el Sr. Gobernador y Comandante Militar del Estado de Yucatán, Señor Abel Ortiz Argumedo para comprar armas y demás pertrechos de guerra, segun por-menor que el mismo les entregó y presente el señor Manuel J. Sánchez, comisionado por el citado Sr. Gobernador para comprar víveres, hacen constar: que llevando a debido efecto los acuerdos tomados el nueve de marzo del presente año, segun acta de la misma fecha firmada en la ciudad de la Habana, proceden a rendir cuenta y a dar informes detallados de sus gestiones en cumplimiento de sus respectivas comisiones. Los

Sres. Nicanor Ancona C. y Domingo Evia B. manifiestan que el Sr. M. J. Smith no les pagó íntegramente los cuatrocientos ochenta mil dolares que representa la cantidad de crédito que les fué entregada por esta comisión para su cobro y que solamente les fue pagada la suma de doscientos cuatro mil doscientos cincuenta dolares, negándose el señor Smith a pagar el saldo del valor de dicha letra, y que habiendo insistido en el cobro de ella se presentó el Sr. Avelino Montes y les manifestó que no estaba dispuesto a permitir que se pagara el saldo de lo que cobraban. En hoja separada rinden los Sres. Ancona y Evia información especial sobre el particular. Que con tal motivo no creyeron prudente situar al Sr. Manuel J. Sánchez los setenta y cinco mil dolares que se comprometieron a mandarle y que fueron asignados por el Sr. Gobernador para la compra de víveres. Seguidamente el Sr. Leandro E. Meléndez procedió a rendir cuenta de las cantidades que recibió y de las erogaciones que verificó, como sigue: importe de las compras y gastos verificados por él, montan a \$ 38,518-00, dolares, según pormenor detallado y comprobantes que entrega en informe especial en este acto al Tesorero. La cantidad recibida por el Sr. Meléndez fué de \$ 38,518.-00. dolares. El Sr. José R. de Regil en forma que recibió la suma de \$ 11,482.00. dolares y gasto la suma de \$ 850.-00. según detalles que en hoja separada entrega. El Sr. Nicanor Ancona manifiesta haber recibido la suma de \$ 275,000. dolares, habiendo invertido en compras y gastos \$ 54,400.00. dolares según detalle que en hoja separada entrega al Sr. Tesorero. --- El Sr. Domingo Evia rinde su informe manifestando que recibió la suma de \$ 79,250.00. dolares, habiendo invertido en compras y gastos la suma de \$ 74,265.00. dólares, según detalle que entrega al Sr. Tesorero. --- Acto seguido y de acuerdo con el acta de fecha nueve de marzo del presente año, se procedió a nombrar entre los comisionados para la compra de armas un Tesorero y un Secretario, habiendo recaído el primer nombramiento en el Sr. José Rafael de Regil y el segundo ó sea el de Secretario, en el Sr. Nicanor Ancona C; quedando como presidente de comisión el señor Leandro E. Meléndez, quien fue nombrado con ese carácter por el señor Gobernador y Comandante Militar del Estado de Yucatán, Sr. Abel Ortiz Argumedo, según su comunicación del 2 de marzo, que obra en poder del Sr. Meléndez. En virtud de los anteriores nombramientos, los comisionados de la compra de armas procedieron a hacer entrega al señor Tesorero de los comprobantes de caja que



acreditan las erogaciones verificadas y todos los documentos justificativos. El Sr. Manuel J. Sánchez manifestó que aunque no fue pagada íntegramente la carta de crédito por valor de cuatrocientos ochenta mil dólares, que fue entregada a la comisión para la compra de armas y víveres, los Sres. Ancona y Evia tenían la obligación de situar cuando menos la parte proporcional que le corresponde de la cantidad cobrada y de conformidad con la relación que corresponde de los valores entregados a la Comisión, cuya cantidad asignada para víveres fue setenta y cinco mil dólares; pero que en vista de los acontecimientos desarrollados en Yucatan últimamente y de los informes que en pliego separado rinden los Sres. Ancona y Evia, justificándose de no haber entregado las cantidades para comprar víveres, acepta y está conforme con que la parte proporcional que le corresponde a dicho comisionado para comprar víveres sea depositada al Tesorero Sr. Regil juntamente con el remanente de los fondos que tenga la comisión de comprar más. Conformes los comisionados con lo anterior entregaron al Tesorero las cantidades siguientes: el Sr. José Rafael de Regil entrega la suma de \$10,632.00. dólares que le sobraron de los \$ 11,492.-00. que recibió de la Comisión; el Sr. Nicanor Ancona entrega la suma de \$ 21,600.-00. dólares que le sobraron de los \$ 76,000.00 que recibió de la comisión; el Sr. Domingo Evia B entrega la suma \$ 4,985.00. dólares que le sobraron de los \$ 79,250..00. que recibió de la Comisión. Resumen de las cantidades recibidas por la Comisión y de las compras y gastos efectuados por la misma, son los siguientes:.....- \$ 1000 dólares que recibió el señor Ancona en efectivo, y los Sres. Ancona y Evia recibieron del Sr. Smith, en cuenta de la carta de crédito la suma de \$ 204,250 lo que da un total de \$ 205,250 dólares. Las erogaciones hechas por la Comisión de compra de armas son: importe de las por el Sr. Leandro E. Meléndez. \$ 38,519.00. según detalle que ha entregado. \$ 54,400.00. dólares importe de las erogaciones hechas por el Sr. Nicanor Ancona, según detalle que ha entregado; \$ 74,265.00. dólares, importe de las efectuadas por el Sr. Domingo Evia según detalle que ha entregado; - \$ 850.00. dólares, importe de las efectuadas por el Sr. José Rafael de Regil, según detalle que ha entregado, dando un total de dólares ..... \$ 168,033.00 dólares que descontados del total recibido deja un saldo en caja de----- \$ 37,217.00 dólares.- \$ 205,250. dólares. La Comisión hace constar que entre los fondos que se le confiaron, vino una letina por valor de diez y nueve mil dólares extendida a la orden particular del Sr. Leandro E. Meléndez y que en virtud de que este Sr. presentó a la Comisión

de compra de armas una carta particular del Sr. Gobernador y Comandante Militar del Estado de Yucatán don Abel Ortiz Argumedo, ordenando al Sr. Meléndez que cobrara la referida letra y aplicara su importe a una misión especial que le confió, este Sr. cobró dicha cantidad y dispuso de su importe para los fines que le fueron ordenados.--Los comisionados de la compra de armas tomaron el acuerdo de suspender sus compras hasta recibir ordenes especiales de quien correspondiera, y para tal caso, las órdenes de pago al Tesorero deberán llevar el Visto Bueno del Presidente de la Comisión. Con lo que terminó la presente acta que se firma para constancia. New York, Abril 1 de 1915.--L. E. Meléndez-Rúbrica.-- J. Rafael de Regil.-Rúbrica.-Nicanor Ancona.-Rúbrica.-Domingo F. Evia.-M. J. Sánchez. Rúbrica.-----

Mérida marzo diez y nueve de mil novecientos diez y siete. Prevenirase al C Manuel J Sanchez que exhiba los documentos a que se refirió en su declaración constante a fojas ocho vuelta de estos autos y al C Nicanor Ancona la tarjeta a que hizo mención en su declaración a fojas diez, y hecho librense oficios a C Jefe de la Policía para que en auxilio de este tribunal y con los elementos de que dispone le dé un informe sobre si en la época en que fueron comisionados Ancona, Regil, Meléndez y Evia por Argumedo para comprar armas, se tuvo conocimiento públicamente de la designación de esa Comisión; al C Gobernador y Comandante Militar, para que remita al Juzgado copias de los oficios que haya en la Secretaría General relacionados con los hechos de esta averiguación por los primeros días de marzo de mil novecientos catorce; y oítese a declarar respectivamente los días veinte y uno y veinte y dos a las nueve y media de la mañana al Notario Lic Leovigildo Díaz y al apoderado en ésta de Avelino Montes Lic Gustavo Molina Font. Lo provee y firma el C Lic Ernesto Sanchez Vera Cornel Juez Instructor Militar. LO certifico.-Lic E. L. Sanchez Vera.-S. Peniche y Osorio.- Rúbricas

Acto seguido se libraron las citas para la comparecencia de los C C Lices. Leovigildo Díaz y Gustavo Molina Font. Conste. Peniche y Osorio. En la Propia fecha se libraron oficios al C Jefe de la Policía y al C Gobernador de el Estado. Conste. Peniche y Osorio. Rúbricas.-----

En veinte y un del mismo, presente en el Juzgado el C Lic Leovigildo Díaz, quien previa su promesa de producirse con verdad, dijo: ser natural y vecino de esta Ciudad, casado, licenciado en Jurisprudencia, de treinta y nueve años de edad y con domicilio en la casa marcada con el numero

quinientos ochenta y cuatro de la calle sesenta y cuatro de ésta misma ciudad, examinado, respondió: que ante él nada ha declarado el señor Nicanor Ancona Camara, pues hace muchos años no ejerce el Notariado por estar dedicado únicamente a la profesión de abogado; que con motivo de intervenir el declarante como abogado del Tesorero General del Estado, en el juicio verbal de hacienda que sigue el Representante del Ministerio Público contra el señor Avelino Montes, dirigió la redacción de una escritura que suscribió el señor Ancona Camara, ante el Notario Lic. Tomas Avila Lopez, sin recordar los puntos de la escritura. A pregunta especial contestó que el juicio verbal de hacienda a que se refiere se está radicado ante el Juzgado primero de lo Civil y de Hacienda de este Departamento Judicial. Ratificó lo expuesto previa lectura y firma al margen. Acto continuo el C. Juez acordó: Librese oficio al C. Juez primero de lo Civil y de Hacienda, para que se sirva remitir con carácter devolutivo el expediente a que se refiere el señor Lic. Leovigildo Diaz. Lo certifico.- Lic. E. L. Sanchez, Vera.- S. Peniche y Osorio.- Al margen- Leovigildo Diaz.- Rúbricas.----- En la misma fecha se libró oficio al C. Juez primero de lo Civil, cumplimentando el acuerdo anterior. Conste.- Peniche y Osorio. En veintidos del mismo presente el Ciudadano Licenciado Gustavo Molina Font, en virtud de cita con las formalidades legales declaró: contestando a preguntas especiales del Ciudadano Juez: que es en la actualidad apoderado jurídico de Avelino Montes que tiene en efecto en su poder una parte de los libros de la contabilidad de su representado y que va a cerciorarse respecto a si tiene los correspondientes a los meses del mes de marzo de mil novecientos catorce. Ratificó lo expuesto previa lectura y firmó al margen. Acto continuo el Ciudadano Juez acordó: Prevengase al declarante exhiba al Juzgado los libros de la contabilidad de Montes en la inteligencia de que si tiene los relativos a los meses de febrero y marzo de mil novecientos catorce o aquellos en que figure asentada la operación por medio de la cual se libre una carta de crédito, hasta por la cantidad de cuatrocientos ochenta mil pesos oro americano, con esos es suficiente. Doy fe de que quedó impuesto de este acuerdo el Ciudadano Licenciado Molina Font.- Lic. E. L. Sanchez Vera.- S. Peniche Osorio.- Al margen- Gvo Molina Font.- Rúbricas.----- En la misma fecha y en cumplimiento del auto anterior, requerí a los señores Manuel J. Sánchez y Nicanor Ancona para que exhiban los documentos a que se refirieron en sus respectivas declaraciones y dijeron el primero, que en virtud de haberselos entregado al Dr. Hernandez para que este a su vez se lo entregue al General Alvarado, no puede cumplir

dicha resolución; pero que tan pronto como las tenga en su poder las presentará al Juzgado; y por lo que respecta al señor Ancona, que en breves días lo presentará por tenerlo extraviado entre sus papeles, y no firman por no creelo necesario. Doy fé. - Peniche y Osorio. Rúbrica. ---

Mérida marzo (27) veinte y siete de mil novecientos diez y siete. (1917) Como lo pide el C. Agente del Ministerio Público, en su instancia agregada a fojas veinte de estos autos: líbrese oficio al C. Gobernador y Comandante Militar, para que se sirva mandar informar a este Juzgado si se expidió o no pasaporte al señor Avelino Montes, a mediados del año de mil novecientos quince, época en que se ausentó del Estado. Notifíquese y cúmplase. Lo provee y firma el C. Lic. Ernesto L. Sanchez Vera, Coronel Juez instructor Militar. Lo certifico. - Lic. E. L. Sanchez Vera. - S. Peniche y Osorio. - Rúbricas. ----- En igual fecha se libro oficio al C. Gobernador del Estado, cumplimentando el auto que antecede. Conste. - Peniche y Osorio. - Rúbrica. ----- En la misma fecha compareció el Lic. Gustavo Molina Font como apoderado del C. Avelino Montes y exhibió el libro de caja que principió el veinte y siete de febrero de mil novecientos quince y el de cuentas corrientes correspondiente al año de mil novecientos catorce, y ambos libros corresponden a la extinguida casa de comercio de Avelino Montes. Conste. - Peniche y Osorio. --- Rúbrica.

Un oficio. Número 435. Un sello que dice: República Mexicana. Juzgado de Distrito. Yucatán. - Refiriéndome al oficio de Ud número 1505, de fecha catorce del que rige, tengo la pena de decirle que no se le puede remitir el expediente que solicita por encontrarse en instrucción, pero puede Ud ocurrir a la Secretaria de este Juzgado a señalar alguna constancia que necesite de él para que se le expida copia autorizada. Protesto a Ud. mi atenta consideración. Constitución y Reformas. Mérida, marzo 19 de 1917. - El Juez de Distrito. - J. W. Brown. Al Ciudadano. - Lic. E. Sanchez Vera, Juez de Instrucción Militar. Presente. -----

Un oficio. No. 1072. Un sello que dice: Inspección General de Policía. Estado de Yucatán. En respuesta a su atento oficio número 1510 de fecha veinte del actual, manifiesto a Usted que en esta Inspección General de Policía de mi cargo, no existe ninguna nota oficial que demuestre que en la época en que fueron comisionados Ancona, Regil, Meléndez y Evia por Argumedo para comprar armas<sup>se</sup> tuvo conocimiento publicamente de la designación de esa comisión, pero según informes recogidos se sabe que en efecto fué pública la designación de dicha comisión. Reitero a Usted mi atenta consideración. Constitución y Reformas. Mérida, marzo 24 de 1917. El Inspector General de Policía. - L. Manzano. - Man Trejo. - Srío. Al C. Juez Instructor Militar. - Presente. ----- Un oficio con un sello



que dice: Ejército Constitucionalista, Cuerpo de Ejército del Sureste. Debajo. Estado Mayor. Sección.... 1/a. Número--761.-- De conformidad con su oficio núm. 1506 de fecha 14 d/a, se ha nombrado a los C.C. Miguel Rendón Quijano y Doctor Eduardo Urzaiz, para que sirvan de peritos traductores en la averiguación previa que se instruye en ese Juzgado en contra de Avelino Montes.-Reitero a Ud. mi atenta consideración.-Constitución y Reformas. Mérida, Yuc, Mex, marzo 21 de 1917.-El General en Jefe.-S. Alvarado.-C.C.A.-Al C. Cnel. Juez Instructor Militar.-Presente.

C. JUEZ INSTRUCTOR MILITAR, El Agente del Ministerio Público adscrito a ese Juzgado de su cargo, en el expediente que se instruye contra Avelino Montes y socios por el delito de rebelión a Ud. dice: A mediados del año de mil novecientos quince desapareció de esta Capital ausentándose para el extranjero el C. Avelino Montes: en esa época era indispensable un pasaporte especial para salir del territorio nacional y como quiera que considero de gran importancia para los intereses que represento en este asunto, el que se acredite de un modo preciso si al referido Avelino Montes se le libró ó nó el pasaporte correspondiente cuando se ausentó de esta Capital, A Ud. ocurro pidiendo se sirva recabar de quien corresponda el dato a que me refiero y que estimo de interés, o sea si se libró al Sr. Avelino Montes el pasaporte necesario para salir del territorio nacional en aquella época, o no se le libró. Mérida, marzo 22 de 1917.-El Agente del Ministerio Público. Teniente Coronel, S. Martínez López.-Rúbrica.

En veinte y ocho del mismo mes y año y cumpliendo con orden verbal del C. Juez, el Secretario que suscribe hace constar: que en el libro de caja que tiene a la vista, de la contabilidad de Avelino Montes, y al cual se refiere la razón que antecede, existe a fojas ocho y en la foja del debe, una partida que a la letra dice: "Marzo 4 1915. Carta crédito, fr. L. E. Méndez, digo Meléndez \$ 480.000.00." Conste.-Peniche y Osorio.

Mérida, marzo (29) veinte y nueve de (1917) mil novecientos diez y siete. Estando en concepto de este Juzgado, perfeccionada la averiguación previa, y toda vez que aparece en autos comprobado el delito de rebelión y la complicidad de Avelino Montes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 y en atención a lo prevenido por el 36 del Código de Procedimientos Militares, remítase este expediente al C. Gobernador Comandante Militar, para que dicte la orden de proceder, si lo tiene a bien. Notifíquese. Lo proveyó el C. Juez Instructor Militar. Lo certifico.-Lic. E. L. Sánchez Vera.-S. Peniche y Osorio.

Acto continuo y constante de treinta fojas útiles

*Go Go*

se cierra para remitir como está mandado, al C. Gobernador y Comandante Militar. Conste. -- Peniche y Osorio. --- Mérida, Yuc, Mex, abril cuatro de mil novecientos diez y siete. Pase este expediente al C. Asesor para que dictamine. Cúmplase. -- El Gral en Jefe. -- S Alvarado. ---

Un oficio. Sello: Gobierno del Estado de Yucatán. Número. Obsequiando el tenor de su oficio número 1511 de fecha 20 del actual y con el objeto de procurar la pronta terminación del proceso que se instruye por rebelión en el Juzgado a su cargo, envío a Ud las copias de los oficios hasta hoy encontrados y de los impresos que algunos de los expedientes relativos tienen, como comprobantes, a reserva de remitirle los que en adelante se encuentren y puedan tener relación con los hechos que se averiguan. Constitución y Reformas. Mérida, marzo 27 de 1917. -- El Gobernador y Comandante Militar del Estado. -- S Alvarado. -- El Sr. Gral. Alvaro Torre Díaz. -- Al C. Juez Instructor Militar. -- Presente. ---

Copia de un documento: -- Interpretando la voluntad del pueblo de Yucatán, bien definida con ocasión del levantamiento que dió origen a la situación actual, este Gobierno, sin prescindir de los principios Constitucionalistas que reconoce y se propone realizar, ha determinado públicamente su resolución de conservar y mantener en toda su extensión la Soberanía interior que corresponde al Estado según el Pacto Federal que une a Yucatán con la República Mexicana a la que nuestro Estado entró libre y espontáneamente con el objeto de asegurar a sus hijos la libertad, la tranquilidad y la vida de civilización dentro del trabajo, la justicia y el orden moral y material, aspiraciones tan ardientes del pueblo Yucateco que durante las contiendas civiles habidas en los últimos años, lo han hecho permanecer ajeno a toda lucha personalista. Para hacer conocer esta actitud, fundar los motivos en que descanza y evitar que sea defigurado el verdadero carácter de la actual situación histórica del pueblo Yucateco, este Gobierno ha resuelto nombrar una comisión que ante el Gobierno y las clases y personas influyentes de los Estados Unidos, tenga por misión exponer con todos sus detalles y exactos caracteres la presente situación y los antecedentes que la motivaron y llevar al ánimo la convicción de que la cultura y condiciones del pueblo Yucateco, dedicado exclusivamente al trabajo dentro de la ley y la justicia, exigen el mantenimiento de esa autonomía interior en beneficio tanto de nuestro pueblo cuanto de los países unidos a él por relaciones de vecindad, de cultura y de comercio. En tal virtud este Gobierno ha tenido a bien nombrar a Ud para que en unión de otros señores (a quienes también se expide hoy la credencial relativa) y usando de la mayor amplitud según su

critorio, proceda a realizar en los términos que estime convenientes la misión a que se refiere la presente comunicación, conforme a los términos antes expresados. Protesto a Ud mi mas alta consideración. Mérida, marzo 11 de 1915.-El Gobernador y Comandante Militar.-El Srío. Gral.-Igual comunicación se dirigió bajo los números 220, 221, 222, 223, 224, 225 y 227.-----Esta fué dirigida al Lic. Ricardo Molina Hubbe. Ciudad.-----

Otro Documento.-Con cargo a la partida respectiva del Presupuesto General de Egresos del año en curso, sírvase Ud mandar pagar a los Sres J. Mendiuti y Cia. propietarios de la imprenta "El Modelo" la suma de \$ 60.06. sesenta pesos seis centavos, importe de 5000 manifiestos mandados a imprimir para dar a conocer al pueblo Yucateco habernos hecho cargo del Gobierno del Estado, Constitución y Reformas. Mérida, 3 de marzo de 1915.-El Gobernador y Comandante Militar del Estado.--

El Srío. Gral.---Al C. Tesorero General del Estado. Presente.-----  
Otro documento.-Con fundamento en el artículo 21 de la Ley del Presupuesto General de Egresos vigente y con cargo a la partida 290 del mismo, sírvase Ud mandar se pague a la Imprenta de la "Empresa Editora Yucateca S. A." la cantidad de \$ 20.00, veinte pesos, importe de la impresión de un mil manifiestos del C. Comandante Militar del Partido de Izamal, Constitución y Reformas. Mérida, marzo 10 de 1915.-El Gobernador y Comandante Militar.-El Srío. Gral.-----Al C. Tesorero General del Estado.-Presente.-----

Otro documento.-La Comandancia Militar de este Partido, a sus habitantes, El Estado de Yucatan está atravesando en estos momentos por un período histórico de verdadera trascendencia, por cuanto que reclama al Gobierno del Centro un derecho que le reconoce y concede la Constitución Federal de 1857, y ese Gobierno no quiere hacer caso a tal reclamación.-Como la vida de un pueblo depende de sus severas y dignas actitudes, cuando pide el cumplimiento de un derecho estatuido a su favor en el pacto fundamental que crea y sostiene el Gobierno principal, el pueblo Yucateco debe ponerse ahora en actitud severa y digna para que se satisfaga su petición.-Tal actitud solo puede tenerla y sostenerla el pueblo, si este en su inmensa mayoría, en su totalidad si posible fuese, está armado y adiestrado en el manejo de las armas.-Ha llegado para Yucatan el momento ineludible de que cada uno de sus hijos lleve un arma al hombro y una canana sobre el pecho, para defender su vida y la de su familia, su honra y la de ésta.-Si el pueblo Yucateco no se arma en número suficiente, será esclavizado y asesinado por los neo-revolucionarios que a modo de vándalos pasan

sembrando pánico espantoso en nuestro Estado.-Por eso, esta Comandancia a mi cargo, invita muy atentamente a todos los ciudadanos de la cabecera del Partido y demás poblaciones de su jurisdicción para que concurren al Meeting-que se verificará el próximo domingo a las ocho de la noche en la plaza principal de esta cabecera, en la cual hablarán distinguidos oradores de Mérida hace un llamamiento al patriotismo de los mismos ciudadanos para que se alistén en las filas de los voluntarios que defienden y defenderán la Soberanía del Estado de Yucatán. Plaza de Izamal, a 5 de marzo de 1915.-El Comandante Militar.-José Alvarez F.--  
Imprenta de la empresa Editora Yucateca, S.A.-58-519.

III  
Otro documento que dice: Con fundamento en el artículo 21 de la Ley del Presupuesto General de Egresos vigente con cargo a la partida 290 del mismo, sírvase Ud. mandar se pague al C. Roque Tejada, la cantidad de \$ 2700.00. dos mil setecientos pesos, importe de veinte medias bobinas de papel para el periódico que este Gobierno acordó fundar con el título de la "Soberanía de los Estados". Las referidas bobinas serán entregadas al Lic. Alvaro Gamboa Ricalde.-Constitucion y Reformas. Mérida, febrero 29 de 1915.-El Gobernador y Comandante Militar.-El Sr. Gral.

IV  
Al C. Tesorero General del Estado.-Presente.  
Otro documento que dice: Con fundamento en el artículo 21 del Presupuesto General de Egresos vigente y con cargo a la partida 290 del mismo, sírvase Ud. mandar entregar al C. Victor Encalada con el Vo. Bo. del Lic. Alvaro Gamboa Ricalde, con sus caracteres de Administrador el primero y de Director el segundo, de "La Soberanía de los Estados" diario que saldrá a la luz en breve, destinados a la información y defensa de la causa que sostienen el Gobierno accidental y el pueblo Yucateco, la cantidad de \$ 2000.00. dos mil pesos. Ya se comunica la Ud. en que condiciones se ha acordado hacer dicha publicación y cuanto importará su presupuesto mensual de gastos. Constitucion y Reformas. Mérida, febrero 24 de 1915.-El Gobernador y Comandante Militar.-El Sr. Gral.

V  
Al C. Tesorero General del Estado. Ciudad de Mérida.  
Otro documento que dice: Dispone este Gobierno que con cargo a la partida 290 del Presupuesto de Egresos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Presupuesto General del Estado, entregue esa Tesorería al C. Victor Encalada P. Garente administrador del diario denominado "La Soberanía de los Estados" con el Vo. Bo. del Director del mismo periódico Lic. Alvaro Gamboa Ricalde, la suma de \$ 2000.00. dos mil pesos que se invertiran en gastos de dicha publicación destinada a la propaganda de la causa de la Soberanía del Estado y a los intereses que la misma entraña.-Protesto a Ud. mi mas alta consideración.



Constitución y Reformas. Mérida, marzo 12 de 1915.-El Gobernador y Comandante Militar.- El Srto. Gral.--Al C. Tesorero General del Estado.--Presente.

G. Gobernador y Comandante Militar del Estado. Con treinta fojas útiles, ha pasado a estudio y dictámen el expediente relativo a la averiguación que se instruye por rebelión ante el Juzgado de Instrucción militar Constitucionalista; y exponiendo en consecuencia, tengo la honra de manifestarle: Que del estudio que he tenido a bien hacer de estas averiguaciones previas, me he formado el concepto de que, al considerarse perfeccionada la averiguación previa, se ha llegado a obtener con los documentos acumulados y actuaciones practicadas, la presunción de que Avelino Montes aparece como responsable del delito de rebelión, y como tal, ha llegado el momento de que de conformidad con los artículos 23, 35 y 36 del Código de Procedimientos Penales en el Fuero de Guerra, se determine expedir la orden de proceder contra el expresado Avelino Montes y socios, a efecto de que, se instruya el proceso correspondiente por presunciones de haberse perpetrado el delito de rebelión; pues es evidente que, durante la instrucción del proceso, podrían aparecer otros responsables del mismo delito; por eso es, que la orden de proceder debe dictarse contra Montes y socios. Por las consideraciones que anteceden y disposiciones legales invocadas, me permito someter a vuestra ilustrada deliberación, los puntos conclusivos siguientes: I. Es de decretarse, se tenga por concluida la averiguación previa contenida en estas actuaciones. II. Que por cuanto aparecen datos suficientes para presumir a Avelino Montes responsable del delito de rebelión, es de decretarse la orden de proceder a la formación del proceso respectivo que se hará extensiva a todos los que aparecieren responsables del mismo delito y, III. Debe devolverse este asunto con la orden de proceder al Juez Instructor Militar Constitucionalista, para los efectos legales correspondientes. Este es mi humilde concepto, salvo su mejor y mas respetable opinión. Protesto a U. d. al General: mi subordinación y las seguridades de mi mas atenta y distinguida consideración y respeto. Constitución y Reformas. Mérida, Yuc. 5 de abril de 1917. El Coronel Asesor. Lio. Miguel Badillo Superano.

Mérida, abril seis de mil novecientos diez y siete. Vistos y de acuerdo con el dictamen del C. Coronel Asesor, dígame al C. Coronel Juez Instructor Militar Constitucionalista, que ha concluido la práctica de las diligencias en la averiguación previa que del delito de rebelión se investiga en este asunto; y por cuanto de lo actuado apa-

recen presunciones de culpabilidad contra Avelino Montes de haber perpetrado el delito de rebelión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, 35 y 36 del Código de Procedimientos Penales en el Fuero de Guerra, es de dictarse y se dicta la orden de proceder contra el expresado Avelino Montes y socios, a efecto de que este justicia instruya el proceso correspondiente por presunciones de haberse perpetrado el delito de rebelión. Devuélvase el expediente relativo a las diligencias previas, con la orden de proceder respectiva. Cúmplase. Así lo decretó y firma el General en Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste. - S Alvarado.

Un oficio, con un sello que dice: "Ejército Constitucionalista-Cuerpo de Ejército del Sureste". Debajo dice: "Estado Mayor. Sección... 1/a. Número... 855...". Conforme a los artículos 35 y 36 del Código de Procedimientos Penales en el Fuero de Guerra, sírvase Ud. proceder con la energía y diligencia necesarias a la formación del proceso respectivo en averiguación del delito de rebelión que se dice cometido por Avelino Montes y socios, hasta obtenerse sentencia condenatoria o absolutoria por el referido delito definido y penado por la Ley Penal Militar en el mismo Fuero de Guerra. - Adjunto devuelvo a Ud. con treinta y una fojas útiles el expediente relativo a las averiguaciones previas practicadas por el Juzgado a su cargo, y relativas a la presente orden de proceder. - Reitero a Ud. mi atenta consideración. Constitución y Reformas. Mérida, Yuc., Mex., abril 6 de 1917. - El General en Jefe. - S Alvarado. - C. G. A. - Al C. Onel. Juez Instructor Militar. - Presente.

Mérida, abril nueve de mil novecientos diez y siete. Acútese recibo de este expediente y de la orden de proceder; por cuanto que aparece comprobada la existencia del delito de rebelión y que hay motivos suficientes para sospechar que Avelino Montes tiene responsabilidad como cómplice, líbrese orden de aprehensión en su contra, como lo dispone el artículo 89 del Código de Procedimientos Penales en el Fuero de Guerra: avéguense las disposiciones del Juzgado dictadas en el expediente de la averiguación previa y que aun esten pendientes de ejecución: practíquense las diligencias que sean necesarias para determinar la complicidad de Montes y socios en los hechos delictuosos materia del proceso que se inicia; notifíquese al Ministerio Público, tome razón y dense los avisos de Ley. Lo proveyó y firmó el C. Juez Instructor Militar, Coronel Licenciado Ernesto L. Sánchez Vera. Doy fé. Lic. E. L. Sánchez Vera. - S Peniche y Osorio. - Rúbricas. ----- En diez del mismo mes y año se libró orden de aprehensión contra Avelino Montes. Conste. Peniche y Osorio. - Rúbrica. ----- Mérida abril catorce de mil novecientos

diez y siete. Acumúlese a este <sup>proceso el</sup> expediente del iniciado en contra de Abel Ortiz Argumedo y socios y hecho, cítese a las personas que en dicho expediente se menciona a efecto de comparezcan ante el Juzgado a declarar acerca de los hechos delictuosos que se averiguan. Lo proveyó el C. Juez y firmó. Lo certifico. -Lic. E. L. Sánchez Vera. -S. Peniche y Osorio. -Rúbricas. ---- En diez y seis del mismo mes y año y cumpliendo con lo mandado en la resolución que antecede del C. Juez, se glosa a este proceso el expediente instruido en contra de Ortiz Argumedo (Abel) y socios por el delito de rebelión, constante en cincuenta y siete fojas útiles. Lo certifico. -Peniche y Osorio. -Rúbrica. ----

En la misma fecha y cumplimentado lo dispuesto en el auto anterior, procedí a citar a las personas cuyos nombres figuran en el expediente en cuestión, me dirigí al efecto, a la casa no. 500 de la calle 62 con el objeto de citar al señor Juan Cirerol, para que comparezca mañana a las nueve y treinta minutos de la mañana y fui informado por el señor Arturo Díaz Cantón que el mencionado señor Cirerol se encuentra ausente de la ciudad, pero que tan pronto vuelva se lo informará. Doy fé. -Arturo Díaz Cantón. -Peniche y Osorio. -Rúbricas. ----

C. Juez Instructor Militar: Presente. Los que suscribimos, nombrados por el General en Jefe de este Cuartel General, peritos traductores con objeto de auxiliar a ese Juzgado en la averiguación que instruye contra Avelino Montes, tenemos el honor de informar: Que hemos confrontado detenidamente la hoja presentada por el Ministerio Público, que figura en el expediente formado por Ud y en la cual consta la traducción de las declaraciones de Domingo Evia en el folleto original en inglés que se sirvió Ud proporcionarnos, y hemos encontrado que dicha traducción es fiel y exacta. Con objeto de proporcionar a Ud algunos datos que pueden serle útiles para la referida averiguación, damos aquí la traducción de algunas declaraciones más, que figuran en el antes citado folleto y que juzgamos de interés. En la página 452, dice: "Sr. Evia: Yo dije que sabía que Argumedo necesitaba dinero para comprar municiones y pelear en defensa de su Gobierno, y sé que la casa de Montes le ofreció dárselo y en el último momento, cuando ya estaba nombrada la comisión que debía ir a los Estados Unidos a conseguir dicha municiones, se rehusó a darlo." En la página 460: "Sr. Mayer: Sabe Ud. que pretexto dió Montes, si es que dió alguno para repudiar o rehusar pagarle el saldo que le debía a Ud de la carta de crédito?" Sr. Evia: "Recuerdo que fué algunos días, tras o cuatro antes de que el General Alvarado entrara a Mérida, cuando lo fui a ver, porque necesitaba yo dinero para comprar municiones, es decir, para enviarlo a la

Habana; pues el señor Molina, que estaba allí me telegrafió diciéndome que tenía oportunidad de adquirir algunas en esa ciudad. Le telefoné a Montes desde mi hotel, diciéndole que necesitaba el dinero. Eso fué en la mañana, y él me dijo: venga Ud en el mediodía y se lo daré. Creo que le dije que necesitaba alrededor de \$ 60,000 (sesenta mil dólares). Acudí a su oficina en el mediodía y él (recuerdo que sonriendo) me enseñó un telegrama que acababa de recibir de Mérida, firmado por Robleda; en él Robleda le decía que no pagase, que no debía pagar mas dinero a cuenta de la carta crédito. Entonces me dijo: ya ve Ud ; Robleda me dice que no debo pagar mas dinero en cuenta de la carta de crédito. Por tanto, no puedo dárselo a Ud ahora, aunque esta mañana le dije que se lo daría. En la página 461: "Sr. Evia-El (Montes) dijo: bien; venga Ud en el mediodía a mi oficina y le daré el dinero. Y ahora recuerdo que también me dijo: Ud quiere mandar un telegrama a Ancona? (Ancona se había marchado a New Orleans, razón por la cual me había endosado la carta de crédito). Pues, como decía, Montes me dijo: quiere Ud mandarle personalmente el telegrama a Ancona, diciéndole que Molina necesita el dinero por que tiene oportunidad de comprar las municiones, o quiere Ud que lo ponga yo por Ud?. Yo estaba enfermo entonces y le contesté: Muy bien; si Ud quiere, ponga el telegrama a Ancona diciéndole eso. Supongo que en aquel momento puso el telegrama a Ancona." E s cuanto tenemos que informar a Ud, Sr. Juez, como resultado de la comisión que se nos ha encomendado, protestando haberla desempeñado leal y honradamente y protestando también a Ud las seguridades de nuestra consideración y respeto. Constitución y Reformas. Mérida, 4 de abril de 1917. -Eduardo Urzaiz. -Miguel Rendón Q.

Las constancias pertenecientes a la causa seguida a Abel Ortiz Arguendo y socios por rebelión, son las siguientes: Marzo 2 de 1915. No. 1756. - Señor M. J. Smith. - New York, muy señor mío y amigo: Tengo el gusto de presentar a Ud los señores Leandro E. Meléndez, Nicanor Ancona, José Rafael de Regil, Domingo Evia y M. J. Sánchez, quien me permite recomendar a sus finas atenciones, suplicándole se sirva entregarles MANCOMUNADAMENTE hasta la cantidad de-----\$ 480,000.00 U.S.Cy. (cuatrocientos ochenta mil dollars) cargándose en cuenta con las cantidades entregadas y enviándome los comprobantes respectivos como de costumbre. - Su amigo atento y S.S. - Avelino Montes, pp. E. Robleda M. - P.D. El señor don Nicanor Ancona podrá presentar a Ud las personas mencionadas y que le acompañan, para los efectos de identificación. - Vale. - Rúbrica. ----- Recibimos por cuenta de esta carta \$ 180,000 n/c. dolls ciento ochenta mil dollars. - Don. F. Evia. - Nicanor Ancona C. - Páguese a la orden del Sr.



Don Domingo F. Evia a quien cedo todos mis derechos para que con su sola firma recoja el saldo de esta carta crédito. Nicanor Ancona C. New York. Marzo 13 1915. -- República Mexicana. -- Gobierno del Estado de Yucatán. -- Nomenclatura: Sección 2a. Mesa o Ramo. -- Denominación H. -- Número del expediente 1. -- Número de orden del oficio 93. -- Después de haber enviado a Ud. el oficio de esta fecha, No. 146, acompañándole el dirigido hoy mismo al consejo de Administración del Banco Peninsular Mexicano, para que Ud. recibiera de dicho Banco un millón cien mil pesos oro nacional, a título de préstamo forzoso impuesto por este Gobierno, y para que Ud. pasiera dicha suma a disposición de los Comisionados para comprar armas, pertrechos de guerra y víveres señores Rafael de Regil, Domingo F. Evia, Nicanor Ancona Cámara, Manuel J. Sánchez y Leandro E. Meléndez (Jefe de las armas del Estado) tuvo ocasión el Gobierno de adquirir dos mil pesos en oro nacional (half dollars) o sean un mil dollars, un giro por valor de diez y nueve mil dollars y una carta de crédito por valor de cuatrocientos ochenta mil dollars, equivalentes en plata Mexicana a tres millones quinientos cincuenta mil pesos, al setecientos diez por ciento. Con tal motivo, el Gobierno de mi cargo, considerando que no se debe sin necesidad imperiosa exponer el oro tomado al Banco Peninsular Mexicano a graves contingencias, decidió hacer la operación en la forma que acaba de expresar y dejar en la Tesorería General el oro tomado al Banco en previsión de nuevas necesidades que requieran utilizarlo ineludiblemente, pues de lo contrario ese mismo oro será devuelto al mencionado Banco en pago del préstamo citado. Queda pues sin efecto mi oficio número 146 en cuanto al carácter que tiene de orden de pago a favor de la comisión que en él se expresa, y se ordena a esa Tesorería, por medio del presente oficio, que Ud. pague a la casa de Avila Montes tres millones quinientos cincuenta mil pesos en cheques de la Comisión Reguladora del Mercado de Henequen (que hoy dispuse a ésta que entregue a esa Tesorería cargándoselos en cuenta corriente) en pago del oro, del giro y de la carta de crédito ya relacionados, todo lo cual entregará Ud. a los Comisionados Ingeniero Meléndez y compañeros, previo el recibo correspondiente que todos otorgarán. Hará Ud. el cargo del gasto a extraordinarios de guerra partida 383 con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 del Presupuesto General de Egresos vigente. -- Protesto a Ud. mi consideración y mi particular aprecio. Constitución y Reformas. Mérida, marzo 2 de 1915. -- El Gobernador y Comandante Militar del Estado. -- Abel Ortiz Argumedo. -- El Secretario General. -- Manuel Irigoyen Lara. -- Al C. Teso-

tero General del Estado. Presente. Acuerdo, Marzo 2 de 1915. Al Cajero para su cumplimiento. Es copia. -Un sello "Tesorería General del Estado de Yucatán.-Mérida."-----A la Tesorería General del Estado de Yucatán.-Con el oficio de Ud número .... Sección de caja, tenemos el honor de acusar a Ud recibo, con nuestra representación de Comisionados del Superior Gobierno del Estado para comprar armas, pertrechos de guerra y viveres para la defensa de la Soberanía del Estado, de lo siguiente: dos mil pesos en oro nacional (Hidalgos) o sean un mil dólares y un giro por valor de diez y nueve mil dólares y una carta de crédito por valor de cuatrocientos ochenta mil dólares, equivalentes en plata Mexicana a tres millones quinientos cincuenta mil pesos al cambio del setecientos diez por ciento. -Protestamos a Ud, nuestra consideración muy distinguida. -Mérida, a los dos días del mes de marzo de mil novecientos quince. -J. Rafael de Regil G. -Domingo F. Evia. -M. J. Sánchez. -L. E. Meléndez. -Nicanor Ancona C. -----Es copia. -"Un sello que dice: Tesorería General del Estado de Yucatán.-Mérida.-----Al margen. -Número 231. -Por orden del Ejecutivo del Estado, contenida en su oficio número 180, Sección 3a. Denominación c. r. número del expediente 6 y fecha 1 del actual; tengo el honor de informar a Ud que esta Comisión Reguladora ha abierto en sus libros, una cuenta corriente a esa Tesorería General del Estado, y en la cual hemos acreditado la suma de \$ 10.000.000. (Diez millones de pesos) para tener a disposición del referido Poder Ejecutivo del Estado el cual en consideración a la causa o la razón que dió origen al impuesto de un centavo por kilo de henequen, decretado a favor del Estado, por Decreto número 2 (artículo 1o) aplicará preferentemente su producto, al pago de las sumas que la Comisión Reguladora le proporcione. -Como primera partida por cuenta de dicho crédito de Diez millones de pesos, tengo el gusto de remitir a Ud, con el presente oficio, la cantidad de \$ 3.550.000 (Tres millones quinientos cincuenta mil pesos, que se servirá Ud poner a la disposición del Poder Ejecutivo del Estado, y cuya suma queda cargada en cta/ote. a esa Tesorería General del Estado, rogándole acuse de recibo y conformidad. --Protesto a Ud la seguridad de mí más sincera consideración. -Constitucion y Reformas. -Mérida, marzo 2 de 1915. -Comisión Reguladora del Mercado de Henequen. -T. Waterland de Vigna. -Gerente Substituto. -Al Señor Tesorero General del Estado. -Ciudad. -Acuerdo. -Marzo 2 de 1915. -Al Cajero para que acuse recibo, previo ingreso. -Es copia. -Un sello que dice: Tesorería General del Estado de Yucatán.-Mérida. ---Nomenclatura: Sección 2a. Mesa o Ramo: la. -Denominación: Div. -Número del expediente: -Número de orden del oficio 146. -Acompaño a Ud, la comuni-

cacion que acordamos dirigir al Consejo del Banco Peninsular Mexicano, a fin de que con las garantías que a la brevedad posible se le otorgaran, y a título de préstamo forzoso, entregue dicho Banco a Ud. como Tesorero General y al señor Rafael Ojeda, como cajero de esa Tesorería. Un millón cien mil pesos oro nacional, que tiene en su poder. Usted y el mencionado cajero deberan otorgar el recibo correspondiente a cargo del Estado y bajo la responsabilidad del Gobierno del mismo. Una vez que sea recibida dicha suma, la pondrá Ud a disposición de los señores Rafael de Regil, Domingo Evia, Nicanor Ancona Cámara, Manuel J. Sánchez y Leandro E. Meléndez, Jefe de las armas del Estado, para que, en la mejor forma que les sea posible la utilicen en la compra de armas y pertrechos de guerra, conforme a la nota que les entregaré con la credencial que los acredite como componentes de la Comisión que para aquel efecto ha nombrado este Gobierno; y para la compra de víveres de la cual está encargada especialmente el penúltimo de dichos señores. Con tal motivo deberá Ud tener la presente comunicación como orden formal para hacer la entrega de dicho dinero cuya legalización se hará oportunamente. Recomendando a Ud que se hagan en los libros de esa Tesorería al digno cargo de Ud. los asientos debidos para que toda la operación conste claramente, dando cuenta al Ejecutivo que está a mi cargo. -Protesto a Ud. mis más atta. consideración y particular aprecio. -Constitución y Reformas. -Mérida, marzo 2 de 1915. -El Gobernador y Comandante Militar del Estado. -----Nomenclatura: Sección 2a.; Mesa o Ramo: -Denominación: H. -Número del expediente 1. -numero de orden del oficio 185. -Díje Ud, a cargo de la Comisión Reguladora del Mercado de henequen y a la orden de esa Tesorería, en la cuenta corriente hasta por Diez millones de pesos recientemente abierta por dicha Comisión, por seiscientos veintidos mil pesos que invertirá usted como sigue: en la compra de una libranza a la casa de A. Montes por cuarenta y cinco mil pesos oro que al cambio de 760, de valor en plata Mexicana, son trescientos cuarenta y dos mil pesos. -Y en otra libranza que expedirá la Comisión mencionada por cuarenta mil dólares que al cambio del 700% de valor en plata, doscientos ochenta mil pesos. -Las dos citadas operaciones están tratadas ya con las casas que deben expedir las respectivas libranzas, ambas a la orden del Señor José Rosado quien va en comisión de este Gobierno al Extranjero (en unión de otras personas), a comprar elementos de guerra y víveres. -El señor Rosado debe acusar recibo en la misma forma en que lo acusó la comisión que partió anterior para el Extranjero con objeto análogo al que hoy se trata. -Se cargará el gasto que debiera liquidarse en su oportunidad

a la partida 353 del Presupuesto de Egresos vigente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 del Presupuesto General del Estado.-  
Sírvasse informar haber cumplido con lo dispuesto en la presente orden.  
Protesto a usted mi consideración, Constitución y Reformas.-Mérida, a 4 de marzo de 1915. El Gobernador y Comandante Militar del Estado.--  
Abel Ortiz Argumedo.-El Secretario General.-Manuel Irigoyen Lara.---  
Al C. Tesorero General del Estado.-Presente.-Acuerdo.-Marzo 4 de 1915.  
Al cajero para sus efectos y cumplimiento.-Es copia.---Nomenclatura:-  
Sección 3a.-Mesa o Ramo:-Denominación:c.f.-Número del expediente:6.-  
Número de Orden del oficio;459.-Aunque se había arreglado con el Banco Peninsular Mexicano S.A. en el recibo que se le otorgó por la suma de \$ 1,100,000.Un millón cien mil pesos, oro Mexicano (Hidalgos) como préstamo forzoso que hizo el Estado, darle en garantía prendaria el henequen necesario a dicha garantía de las existencias en almacén de la "Comisión Reguladora del Mercado de Henequen", por acuerdo posterior entre dicha institución y el Gobierno de mi cargo y con el fin de no hacer operación alguna que pudiera entorpecer el funcionamiento de dicha Comisión Reguladora, se ha convenido dar al Banco Peninsular Mexicano en garantía de la operación de préstamo ya citada, la suma de \$ 3,905,000.00.Tres millones novecientos cinco mil pesos, en cheques emitidos por la "Comisión Reguladora del Mercado de Henequen" cuya cantidad es la que corresponde a la ya citada operación tomando por base que la suma de \$ 1,100,000.00.Un millón cien mil pesos oro del cuño Mexicano (Hidalgos) equivale a \$ 550,000.00. Quinientos cincuenta mil dólares, los que calculados al setecientos diez por ciento de cambio importan la expresada suma de \$ 3,905,000.00.Tres millones novecientos cinco mil pesos mexicanos.-Sírvasse entregar al Banco Peninsular Mexicano S.A. esta última suma en cheques de la Comisión Reguladora, en garantía del préstamo citado y para dejar cumplido lo pactado con dicho Banco; otorgando esta institución el recibo correspondiente.-Constitución y Reformas.-Mérida, 16 de marzo de 1915.-El Gobernador y Comandante Militar del Estado.-Abel Ortiz Argumedo.-El Secretario General.-Manuel Irigoyen Lara.-Al C. Tesorero General del Estado.-Presente.-Acuerdo.-marzo 16 de 1915.-Al cajero para su cumplimiento.-Es copia.-----  
C. Gobernador y Comandante Militar del Estado, El suscrito Agente del Ministerio público adscrito al Juzgado Instructor Militar Constitucionalista del Estado, a Ud. respetuosamente expone: Las investigaciones llevadas a cabo para el castigo de los responsables de la rebelión encabezada por Abel Ortiz Argumedo, no han sido suficientes, porque solo se ha procedido contra las personas que tomaron parte en la organización



de las fuerzas reaccionarias y en los combates que presentaron los rebeldes.-MÁS como no solamente esas personas son responsables conforme a la Ley, sino también las que contribuyeron con dinero para la rebelión y las que ayudaron a los rebeldes de una manera efectiva para el fin que se proponían, he procedido desde luego, en cumplimiento de mi deber, a recoger los datos necesarios para proceder contra esas personas, tanto en la vía penal como en la civil, para exigirles las responsabilidades que les correspondan.-Con ese fin, me dirijo a Ud para que como Jefe Militar del Estado, dicte al Juez Instructor la orden de proceder contra las siguientes personas: Abel Ortiz Argumedo, Ignacio Magaloni, Leandro E. Meléndez, Domingo Evia, José R. de Regil, Julian Aznar, Sixto García López, Antonio Palomeque, Nicanor Ancona, Manuel J. Sánchez, Alvaro Gamboa Ricalde, Manuel Irigoyen Lara, Ricardo Molina, Vicente Molina C, Temístocles Correa, Nicolas Martínez, Ernesto Patron Villamil, Juan Cirerol, Francisco Rubio Ibarra, Alonzo Aznar, Joaquín G. Lanz, Manuel Narváez, Jacinto Brito y José María Murillo.- Las responsabilidades que pesan sobre Abel Ortiz Argumedo, Ignacio Magaloni, Leandro E. Meléndez, Manuel Irigoyen Lara, Alonzo Aznar, Joaquín G. Lanz, Temístocles Correa, Manuel Narváez, Ernesto Patron Villamil y José María Murillo, quedan comprobadas con los ejemplares del "Diario Oficial" que adjunto.-Existen en la Secretaría General de Gobierno y en la Tesorería General del Estado, datos suficientes en contra de Domingo Evia, José R. de Regil, Julian Aznar, Nicanor Ancona y Manuel J. Sánchez, que prueban que recibieron dinero para desempeñar comisiones del rebelde Ortiz Argumedo. Acompaño una copia simple de parte de esos documentos.-Las responsabilidades de Francisco Rubio Ibarra y Juan Cirerol se encuentran comprobadas en el proceso que ante el Juzgado Instructor Militar del Estado se instruyó a José Carlevaris y a Alfredo Tappan.-Las responsabilidades que existen contra las demás personas indicadas constan en la colección del extinguido periódico "La Revista de Yucatán" en el periodo comprendido del doce de febrero al diez y seis de marzo del año en curso.-No me ha sido posible conseguir esa colección; pero bien puede el Juzgado Instructor Militar certificar los datos de la colección de ese periódico que existe en la "Biblioteca Cepeda" de esta Ciudad. Por lo expuesto, A Ud. atentamente pido se sirva tener por formulada acusación por el delito de rebelión contra las personas relacionadas en este escrito y dictar la orden de proceder correspondiente, comunicándola al Juzgado Instructor Militar del Estado.-Protesto lo necesario.-Mérida, catorce de junio de mil novecientos quince.-Francisco Arcoveo

Guillermo.--Un sello que dice: "República Mexicana, Gobierno del Estado de Yucatán".--Nomenclatura: Sección 2/a. Mesa o Ramo: Denominación: DIV. Núm. del expediente: 6. Núm. de orden del oficio: 152. El Ejecutivo de mi cargo suplica a Uds. se sirvan proporcionar, o poner a disposición del Ingeniero señor G. G. Ladner las materias explosivas que necesite sirviéndose recoger el recibo correspondiente y terminados los pedidos de dicho señor, o sea cerrada la cuenta, cobrar el precio de ella a este Gobierno. Constitución y Reformas, Mérida, a 2 de marzo de 1915.

El Gobernador y Comandante Militar del Estado.--Abel Ortiz Arguenedo.--

Por el Secretario General,--Alonso Aznar,--O. M.--A los Señores Emilio Seijo, S. en C.--Ciudad.-----Un sello que dice "República Mexicana Gobierno del Estado de Yucatán". Nomenclatura: Sección: 1/a. Mesa o Ramo: VI. Denominación: bñ. Núm. del expediente: Núm. de orden del oficio 9. Este Gobierno ha comisionado al C. Manuel J. Sánchez, Presidente de la Cámara de Comercio, de esta ciudad, para que gestione todo lo conducente al transporte a ésta de todos los víveres y mercancías de uso indispensable, que se encuentran en Progreso. Ruego a Ud. atiende a dicho señor y le proporcione todas las facilidades que sean compatibles con los movimientos militares, teniendo en cuenta lo urgente que es la reconcentración en esta ciudad, de los víveres y mercancías ya citadas. Constitución y Reformas, Mérida, a 15 de febrero de 1915.--El Gobernador y Comandante Militar del Estado.--Abel Ortiz Arguenedo.--El Secretario General Manuel IRIGORYEN Lara,---Al C. Director de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Presente.-----

Un sello que dice: República Mexicana. Gobierno del Estado de Yucatán. Nomenclatura: Sección: 2a. Mesa o Ramo: Guerra. Denominación: Núm. del expediente: Núm. de orden del oficio: 508. Sirvase Ud. proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Procesal Militar, contra Abel Ortiz Arguenedo, Ignacio Magaloni, Leandro E. Meléndez, Dominador E. Via, José R. de Regil, Julian Aznar, Sixto García López, Antonio Palomeque, Nicanor Ancona, Manuel J. Sánchez, Alvaro Gamboa Ricalde, Manuel Irigoyen Lara, Ricardo Molina, Vicente Molina G, Temístocles Correa, Nicolás Martínez, Ernesto Patrón Villamil, Juan Cirerol, Francisco Rubio Ibarra, Alonso Aznar, Joaquín G. Lanz, Manuel Narvaez, Jacinto Brito y José María Murillo, por el delito de rebelión, dando cuenta a esta Comandancia inmediatamente del resultado, para que se resuelva lo procedente. Acompaño A Ud. con veinte y nueve fojas útiles, varias constancias acopiadas por el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Juzgado.--Constitución y Reformas. Mérida, junio 14 de 1915. El Comandante Militar del Estado.--S. Alvarado.---

Al Juez Instructor Militar Constitucionalista.-Pte.-----

En la plaza de Mérida, a los quince días del mes de junio de mil novecientos quince. El Teniente Coronel Licenciado Manuel Solís Aguilar, Juez Instructor Militar Constitucionalista por ante su Secretario que da fé, dijo: por recibida la requisitoria del Ciudadano Agente del Ministerio Público, los documentos que acompaña y la orden de proceder por el delito de rebelión dictada por el Ciudadano General Salvador Alvarado Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste, contra Abel Ortiz Argumedo, Ignacio Magaloni, Leandro E. Meléndez, Domingo Evia, José R. de Regil, Julian Aznar, Sixto García López, Antonio R. Palomeque, Nicanor Acona, Manuel J. Sánchez, Alvaro Zamora Ricalde, Manuel Irigoyen Lara, Ricardo Molina, Vicente Molina C. Temístocles Correa, Nicolas Martinez, Ernesto Patron Villamil, Juan Oirerol, Francisco Rubio Ibarra, Alonso Aznar, Joaquín G. Lanz, Manuel Narvaez, Jacinto Brito, y José María Murrillo. Cúmplase; instruya proceso por el delito de rebelión contra las personas mencionadas, a cuyo efecto, practíquese cuantas diligencias sean conducentes para la comprobación del cuerpo del delito y el perfecto esclarecimiento de los hechos; dése vista de este inicio al C Agente del Ministerio Público y tómese razón del mismo en el libro del Gobierno de éste Juzgado, bajo el número que le corresponda. Notifíquese y cúmplase. Decretado. Doy fé. Enseguida y estando presente el Agente del Ministerio Público se le dió a conocer el auto anterior y firma por ante el Secretario que da fé. Acto continuo se tomó razón de éste inicio bajo el número veinte en el libro del Gobierno de éste Juzgado. <sup>Consta</sup> El Juez Instructor Militar Constitucionalista.-Manuel Solís Aguilar.- Amilcar Magaña M. Secretario. Al margen F Arcovedo Guillermo. Magaña. Rúbricas. Enseguida y ante el C Juez de éste conocimiento y su Secretario que da Fé, se hizo comparecer debidamente escoltado al detenido Joaquín G Lanz para tomarle su interrogatoria y a quien se le dió a conocer el personal del Juzgado; se le instruyó de las penas en que incurrirán los que declaran con falsedad y previa promesa que hizo de decir la verdad acerca de hechos propios y la protesta legal que hizo de producirse lo mismo sobre hechos ajenos, dijo: llamarse como queda dicho, ser natural de Mérida, domiciliado en la calle noventa y tres número quinientos cuatro, casado, Agricultor y de sesenta y cuatro años de edad. Interrogado para que diga si sabe el motivo de su detención, dijo: que presume que se encuentra detenido por que se le cree cómplice en el movimiento reaccionario o de armas encabezado por Abel Ortiz Argumedo que siendo Comandante Militar del Partido de Motul, siendo Gobernador

y Comandante Militar del Estado el Señor General Toribio V de los Santos, y el propio Gobernador comunicó al declarante telegraficamente haber nombrado a Abel Ortiz Argumado Jefe de las Operaciones Militares contra los rebeldes en el Oriente del Estado, a quien hizo conocer como Superior: que en la misma fecha en que recibió el telegrama el declarante pasó por Motul Ortiz Argumado rumbo a Tenax en donde estableció su centro de operaciones habiéndose sido llamado tres veces el que declara por el referido Ortiz Argumado en diversas fechas para que fuera a Tenax a recibir órdenes, el que declaró creyéndose obligado a cumplir con una orden superior fué a Tenax en donde le ordenó Argumado, primero que le remitiera quince caballos recogidos de las haciendas del <sup>Estado</sup> Motul después para que informara cuantas embarcaciones capaces de conducir tropas había en los Puertos de Telchac, San Benito y Miramar, y por último, lo llamó para ordenarle reuniera gente para el servicio con el objeto de perseguir a los rebeldes que merodeaban por la costa: que en ese estado las cosas, llegaron al declarante, rumores de que Argumado quería levantarse en armas contra el Gobierno Legal, y que como estos rumores se acentuaran mas y con la version de que el que declara estaba en combinacion con Ortiz Argumado, sin duda por que se le había visto al que habla ir a Tenax tres veces a cumplir con los llamados que Argumado le hizo, no queriendo figurar de ninguna manera en ningun movimiento armado contra el Gobierno, ni querer aparecer desleal ante el mismo, resolvió el nueve de febrero del presente año hacer formal entrega de la Comandancia Militar de Motul como en efecto la entregó por via comunicacion que para el efecto le pasó al Comandante Militar Subplante Licenciado Elias Campos quien se hizo cargo el propio día nueve de febrero como queda dicho, habiéndose copiado la comunicacion de entrega en el libro respectivo de la Oficina: que con esto el declarante quedó desligado completamente de la referida Oficina; y que cuando el día once del propio mes de febrero llegó Ortiz Argumado a Motul ya levantado en armas el que declara estaba enfermo y recluido en su casa-habitacion ya como un simple particular; que con lo antes relacionado demuestra el declarante que no tomó participio ninguno en el movimiento de armas efectuado por Ortiz Argumado, pues ni siquiera era Comandante Militar cuando se efectuó dicho movimiento: Interrogado para que diga en que fecha supo que Abel Ortiz Argumado se había sublevado contra el Gobierno del Señor General de Los Santos, dijo: que el día once de febrero proximo pasado cuando llegó con sus fuerzas a Motul el referido Ortiz Argumado. Interrogado para que diga si antes de esa fecha a que se refiera en su respuesta anterior, tuvo conocimiento



to de dicha rebelión, contestó que no tuvo conocimiento de dicha rebelión antes de esa fecha si no solo oyó rumores de un movimiento armado encabezado por Argumedo, y que estos rumores llegaron a él <sup>como él</sup> el día siguiente a los dos días antes de haber entregado la Comandancia Militar. Interrogado para que diga si dio parte de alguna manera de dichos rumores al Jefe del Estado; y en caso de no haber dado dicho parte, exprese por qué no lo hizo así dijo: que no creyó conveniente comunicar al Jefe del Estado <sup>el caso</sup> como simple rumor por que le podía reputar alarmista y que juzga que a un superior solo se le debe comunicar lo que efectivamente sea cierto. Interrogado para que diga con qué personas se acompañó desde la fecha en que tuvo conocimiento de la rebelión de Ortiz Argumedo, dijo: que no habló con nadie, pero que recuerda que el día siguiente del propio febrero estuvo entre otras muchas personas en un baile de la fiesta del pueblo y <sup>que</sup> entre esas personas estuvo también el Señor Ignacio Magaloni, Tesorero General del Estado entonces con quien habló superficialmente sin haber tratado con él de política ni con ninguna otra persona. Interrogado para que diga si sabe quiénes fuerón los autores de la rebelión a que se refieren las preguntas anteriores y quiénes los cómplices o encubridores de la misma, dijo: que sabe que tomaron parte en la revolución Abel Ortiz Argumedo y algunos Comandantes Militares que oyó también el declarante que Ignacio Magaloni pronunciara discursos en favor de la causa de Ortiz Argumedo. Interrogado para que diga si desempeñó algún cargo durante la Administración del llamado Gobernador Ortiz Argumedo, y en caso afirmativo cuánto duró en dichos empleos, contestó que fue nombrado por Abel Ortiz Argumedo Inspector de Comandancias Militares sin haberlo solicitado el declarante, el día veinte y cuatro de febrero último, poco más o menos que desempeñó el empleo como quince días, haciendo constar que los renunció el día primero de marzo, pero como no le fue contestada la renuncia siguió en dicho empleo dejándolo el día quince de marzo próximo pasado habiéndole doblado por los tanto una quincena de sueldo. Interrogado para que diga si en su concepto era legal el Gobierno del C General de los Santos contra quien se sublevó Ortiz Argumedo, contestó que sí lo era porque había sido nombrado por el C Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, y que por esto lo sirvió con lealtad y en prueba de ello renunció o entregó la Comandancia Militar para no aparecer desleal al Gobierno. Interrogado para que diga si en su concepto era legal el Gobierno del traidor Abel Ortiz Argumedo, contestó: que no. Interrogado para que diga y explique como consi-

derando ilegal el Gobierno de Abel Ortiz Argumedo, y lejos de permanecer fiel como ha dicho a la administración del Señor General Toribio V de los Santos aceptó un empleo de Ortiz Argumedo, contesto: que lo aceptó por que estando pobre necesitaba el sueldo para vivir, y que no obstante eso, comprendiendo que no debiendo aceptar el empleo, hizo renuncia de el con fecha primero de marzo como antes dijo. El Agente del Ministerio Público le señala a Ud como uno de los primeros que iniciaron el movimiento reaccionario encabezado por Abel Ortiz Argumedo y socios y funda su acusación en una declaración que aparece publicada en la parte final de la página primera del "Diario Oficial" del Gobierno del Estado de Yucatan bajo el número 5228, y quervió la luz pública el quince de febrero del presente año que a la letra dice: "Una Omisión - En el Diario Oficial del sábado 13 del corriente, al hacerse la relación de los elementos que provocaron el movimiento que ha cambiado la faz administrativa de Yucatan, se omitió mencionar al C. Comandante Militar del Partido de Motul Coronel Joaquín G Lanza. El C. Coronel Lanza fue uno de los primeros que iniciaron ese movimiento y, como es de justicia, queda salvada en estas líneas aquella involuntaria omisión;" - qué contesta Ud a esto? Contestó: que no es cierto que haya tomado participación ni que haya sido iniciador del movimiento encabezado por Abel Ortiz Argumedo y que no sabe en que fundo el articulista para publicar dicho referido artículo. Interrogado para que diga por que motivo se publicó su fotografía en el número de fecha veinte y siete de febrero último en el periodico "La Revista de Yucatan" con las de los principales autores del movimiento reaccionario con ostentación de atributos relativos a su alta categoría de empleados y servidores de la administración Argumedista, dijo: que su retrato fue publicado en el mencionado periodico sin conocimiento ni consentimiento pues ni siquiera se le tomó la fotografía en estos casos y que además el periodico asienta una falsedad, haciéndolo aparecer como comandante militar en fecha veinte y siete de febrero cuando consta en documentos oficiales que hizo entrega de la Comandancia Militar de Motul en fecha nueve del propio mes de febrero al Lic Elias Campos, Comandante Suplente. Interrogado para que diga si ha estado preso o encarcelado por alguno otro delito dijo: que nunca. En seguida se le dio a conocer la orden de proceder en su contra dictada por el C General En Jefe del Cuerpo de Ejercito del Sureste por el delito de rebelión encabezado por Abel Ortiz Argumedo y otras personas que obran en dicha orden y que tiene derecho para nombrar defensor y dijo: que oye dicha orden y que nombra para que lo defienda al Licenciado Amado Cantón Meneses. Que lo declarado es la ver



dad en que se afirma y ratifica y leida que le fue esta su declaracion firmó al margen para constancia. Doy fé, así como que se cerró el acta del día. El Juez Instructor Militar, Manuel Solís Aguilar, Amilcar Magaña M.-Al margen. Joaquín G. Lanz. En la Plaza Militar de Mérida a los cinco días del mes de julio de mil novecientos quince ante el Juez de este conocimiento y su Secretario que dio fé, compareció previamente citado el Señor Javier Alayola a efecto de ser examinado en esta averiguación. Se le instruyó de las penas en que incurrirían los que declararan con falsedad leyéndosele el artículo con número 163 del Código Procesal Militar y previa la protesta legal que hizo de producirse con verdad dijo: llamábase como queda dicho, ser natural de Hopelchen (Campeche) vecino de esta Ciudad con domicilio en la casa número cuatrocientos sesenta y ocho de la calle cincuenta y cinco empleado particular, soltero de treinta y siete años de edad que no se haya enlazado con las partes en este asunto por vínculos de parentesco amistad íntima ni por cualesquiera otros ni tiene motivos de odio ni rencor contra los mismos. Interrogado para que diga si fue Director del Diario Oficial en el mes de febrero último y si como director que fue de dicho periódico, recuerda el contenido de lo que se publicaron los días trece quince y veinte y cuatro y cuyos números son cinco mil doscientos noventa y siete, cinco mil doscientos noventa y ocho y cinco mil trescientos seis respectivamente, y si se afirma y ratifica en dicho contenido por ser la verdad y que obran acumulados a este expediente dijo: (El Juzgado dio fé que se le pusieron a la vista dichos diarios oficiales) que sí fue director del diario oficial durante el mes de febrero próximo pasado como lo fue en los meses anteriores por nombramiento expedido a favor suyo por el Mayor Eleuterio Avila que sí recuerda el contenido de los diarios oficiales a que se refiere la pregunta en virtud de habérseles puesto a la vista pero que en cuanto a la verdad de su contenido no puede afirmarse ni ratificarse en virtud de que su misión consiste en dar a la imprenta para su publicación las noticias y documentos que por el caso se le proporcionarían por las personas que <sup>también</sup> ~~tenían~~ a su cargo el Gobierno de entonces, sin comprobar su veracidad. Interrogado para que diga si es cierta la noticia que se publicó en el "Diario Oficial" con número 5298 titulada "Una Omisión" y que se refiere a la participación que tomó el Ciudadano Joaquín G. Lanz en la rebelión encabezada por Abel Ortiz Argumedo dijo: que es cierto que se le ordenó publicar el párrafo referido, pero que nada puede decir respecto a que si está o no fundada en la verdad la noticia que ~~entraña~~ en vista de que como ha

9.

dicho se limitaba a dar las noticias tal como le eran proporcionadas por las personas autorizadas para ello sin ocuparse en averiguar si eran ciertas. Que como a los cinco días de haberse publicado dicha declaración se encontró con el señor Lanz, quien nada le dijo sobre el particular, quizás en virtud de haberselo olvidado con motivo de haber pasado ya varios días. Que lo declarado es la verdad en que se afirma y ratifica y leída que le fué esta su declaración que firma al margen para constancia. Doy fé. --Amilcar Magaña M. --Al margen-- tres veces --Javier Alayola. ----- En la plaza de Mérida, a los seis días del mes de octubre de mil novecientos quince, ante el Ciudadano Juez del conocimiento y Secretario que dá fé compareció al efecto de ampliarle su declaración, el señor Javier Alayola, y estando presente se le impuso de las penas en que incurren los que declaran con falsedad y previa protesta legal que hizo de producirse con verdad, interrogado por sus Generales: dijo: que reproduce las mismas que ya constan de autos. Interrogado para que diga si fué Director del "Diario Oficial" durante el llamado Gobierno de Ortiz Arguñedo, contestó: que sí y que ya ha declarado anteriormente en condiciones fué Director de dicho Diario. Impuesto de que el Ciudadano Agente del Ministerio Público acusa a varias personas cuyos nombres constan de la orden de proceder que encabeza este proceso y que entre otros datos que ha presentado como cargos contra ellas existen los números cinco mil doscientos noventa y siete, cinco mil doscientos noventa y ocho, cinco mil trescientos seis y cinco mil trescientos ocho correspondientes al "Diario Oficial" de fechas trece, quince, veinte y cuatro y veinte y seis del mes de febrero y cinco mil trescientos doce del mismo Diario Oficial de fecha tres de marzo, del presente, (Certifica este Juzgado que le fueron puestos a la vista al declarante la orden de proceder que encabeza este expediente y los citados ejemplares del "Diario Oficial") y preguntado si es cierto y verdadero el contenido de todo lo relativo que en ellos aparece y que se relaciona con las personas contra quienes se ha mandado proceder, contestó: que no sabe hasta que punto son ciertas las noticias publicadas en dicho periódico referentes a las personas citadas, que constan de la orden de proceder, porque no se trata de hechos propios del declarante: que lo único que puede declarar es que tales noticias tuvieron el carácter oficial que tuvieron las personas encargadas entonces del Gobierno y que todo lo publicado era proporcionado por esos mismos, entre ellos por el señor Magaloni y Leonardo E. Meléndez, publicándolas el que habla sin comprobar la veracidad de su contenido. Que lo declarado es la verdad en que se afirma y ratifi-



calleida que le fué esta su declaración firmó al margen para constancia. Doy fé. -Amilcar Magaña M.- Al margen dos veces -Javier Alayola. - Mérida, 18 diez y ocho de diciembre de milnovecientos quince vistas estas diligencias, lo actuado en ellas, documentos acumulados en el mismo como comprobantes de los hechos denunciados en este expediente por C. Agente del Ministerio Público todo lo cual está en diligencia, pues no consta por hoy nada en contrario al Juzgado con excepción de Joaquín G Lanza, existiendo senda prueba plena y presunciones graves contra Abel Ortiz Argumedo, Ignacio Magaloni, Leandro E Meléndez, Domingo Evia, José R de Regil, Julián Aznar, Sixto García López, Antonio R Palomeque, Nicanor Ancona, Manuel J Sanchez, Alvaro Gamboa Ricalde, Manuel Yrigoyen Lara, Ricardo Molina, Vicente Molina, Temístocles Correa, Nicolás Martínez, Ernesto Patrón Villamil, Juan Cirerol, Francisco Rubio Ybarra, Alonso Aznar Mendoza, Manuel Marvaez, Jacinto Brito y José María Murillo, toda vez que existe orden de proceder del C Comandante Militar del Estado acumulada a este expediente cuya orden de proceder es de fecha catorce de junio del presente año, desde luego con fundamento en los artículos 46, 47, 48, 53 del código procesal Militar, se decreta la aprehensión y detención de los antes relacionados, para cuyo efecto, librense las órdenes conducentes al caso, a fin de que hallados que sean, sean puestos a disposición de este Juzgado. Cúmplase. Lo provee y firma el Lic Juan J Barrera Juez Instructor Militar. Lo certifico. - Juan J Barrera P-José Y Rasales. Srío. Seguidamente se libro oficio al Inspector General de la Policía con inserción del auto que antecede. Conste. - Rosa les. - Señor Juez Instructor Constitucionalista. Juan Cirerol, Mayor de edad con domicilio en la casa número 500 de la calle 62 a Ud con todo respeto espongo lo que sigue. Tengo noticia vaga de que con motivo de la llegada a Mérida del Señor Nicanor Ancona Cámara ha mandado Ud la detención de este Señor y otras personas entre las que me cuenta yo. Como la orden en lo que a mi respecta no tiene razón de ser por virtud de tener facultad de transitar por el Estado por disposición expresa del Señor Gobernador del Estado, como acredito a Ud con el salvoconducto que acompaño para el efecto de ver, vengo a suplicarle se sirva como es de derecho revocar la orden con respecto de mí y mandar, con el fundamento de la referida facultad del señor Gobernador, dictar sobreseimiento en los autos; pues no otra cosa se desprende del referida salvoconducto. Por lo expuesto a Ud señor Juez ocurro suplicando me tenga por presentado con este memorial pidiendo se sirva revocar la orden de detención

que dictó en mi contra y mandar el sobreseimiento en el proceso que me instruyó por rebelión. Mérida, día 18 de 1915. --J. Cirerol. --Mérida. Diciembre (18) diez y ocho de (1915) mil novecientos quince. Por presentado este memorial con los documentos que acompaña, el primero relativo a un pasaporte expedido por el Consul General del Gobierno Constitucionalista en la Habana con instrucciones del Gobierno de Yucatán a favor del C. Juan Cirerol; y el segundo, autorización del Gobernador y Comandante Militar de Yucatán al mismo Cirerol para permanecer libremente en el Estado que se hace saber a las autoridades civiles y Militares del Estado y prestarle toda clase de garantías, toda vez que el Ministerio Público atribuye responsabilidades en su pedimento fiscal a Juan Cirerol no en este proceso y sí en otro que se instruye en este mismo Juzgado, se suspenden por hoy para con dicho Juan Cirerol los efectos del auto de fecha de hoy relativo a la aprehensión y detención del mismo. Cúmplase. Así lo provee y firma el Lic. Juan J. Barrera, Juez Instructor Militar. Lo certifico. --Juan J. Barrera P. --José I. Rosales. --Rúbricas. ----- Señor <sup>Juan</sup> Instructor Militar Constitucionalista: Ernesto Patron Villamil, mayor de edad legal, Licenciado en Farmacia y con domicilio en la casa número 462 de la calle 52 de esta ciudad, en la causa seguida ante el Juzgado del merecido cargo de Ud. contra Abel Ortiz Arguedo y socios por el delito de rebelión, respetuosamente manifiesto: que tengo noticias de que existe una orden de aprehensión contra mí, a virtud de que figuro en la nómina de los consignados por el Superior Gobierno del Estado como responsables de los hechos que se investigan; pero como posteriormente a esa consignación, el señor Gobernador y Comandante Militar del Estado libró un salvoconducto que previene a las autoridades civiles militares que me presten las garantías necesarias para permanecer y transitar libremente en el territorio del Estado, quedó sin efecto la orden de proceder que expidió contra mí y, en consecuencia, al conocer Ud. ese documento que para el efecto le exhibo, deberá quedar sin efecto la orden expedida para mi aprehensión y detención. Por lo expuesto, respetuosamente pido a Ud. señor Juez Instructor Militar Constitucionalista se sirva: en mérito del documento que exhibo, levantar las órdenes expedidas para mi aprehensión y detención, comunicando esta determinación al Inspector General de Policía para su cumplimiento; disponer que previa certificación en autos se me devuelva el salvoconducto que exhibo y dictar el sobreseimiento que corresponde en razón de que el propio Gobierno que expidió la orden de proceder ha estimado que ya no hay méritos para exigirme responsabilidades. Protesto lo necesario. Mérida, veinte de diciembre

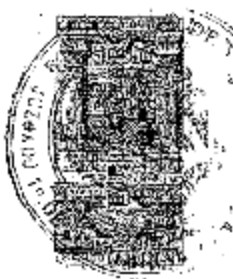


bre de mil novecientos quince.--Ernesto Patrón Villamil. Rúbrica.-----  
 Mérida, diciembre veinte de mil novecientos quince. Por presentado es-  
 te memorial con el documento que acompaña relativo a un salvoconducto  
 expedido por el Gobierno de Yucatán, y Comandante Militar del mismo,  
 a favor del Ciudadano Ernesto Patrón Villamil, para permanecer y tran-  
 sitar libremente en el Estado, lo que se hace saber a las autori-  
 dades Civiles y Militares y prestarle toda clase de garantías, toda vez  
 que el Ministerio Público atribuye responsabilidad en su pedimento fi-  
 nal a Ernesto Patrón Villamil en el proceso que se instruye en este  
 mismo Juzgado, por el delito de rebelión. En cumplimiento de lo ordena-  
 do en dicho salvoconducto el cual se acumula a este expediente y que  
 ordena prestarle al referido Patrón Villamil garantías necesarias Con-  
 titucionales entre las que se encuentran la libertad del hombre, des-  
 de luego, revóquese la orden de aprehensión dictada contra el C. Ernes-  
 to Patrón Villamil, comunicándose al Inspector General de Policía  
 para que suspenda dichas órdenes y librese al interesado copia cer-  
 tificada del documento exhibido para dejar en autos entregándole el  
 original para su resguardo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Lic.  
 Juan J. Barrera Puerto, Juez instructor Militar Constitucionalista.--  
 Juan J. Barrera P.--José I. Rosales.--Rúbricas.--Srio.-----José I. Rosa-  
 les Secretario del Juzgado Militar Constitucionalista. Certifico: que  
 en esta causa existen las constancias siguientes: Un sello que dice-Re-  
 pública Mexicana Gobierno del Estado de Yucatán.--Nomenclatura.--Sección  
 2a.--Mesa o RAMO.--Guerra.--Denominación--Número del expediente--Número de  
 orden del oficio 2762-- Con esta fecha el Gobierno de mi cargo ha dis-  
 puesto que el C. Ernesto Patrón Villamil pueda permanecer y transitar  
 libremente por el Estado de Yucatán. Lo que se hace saber a las autori-  
 dades Civiles y Militares a efecto de que sirvan prestarle las garan-  
 tías necesarias. Constitución y Reformas. Mérida, octubre 30 de 1915.--El  
 Gobernador y Comandante Militar del Estado.--S. Alvarado.--El Secretario  
 General interino--Rafael Aguirre Q.--Así consta de la causa a que me re-  
 mito y por mandato judicial libro el presente en Mérida a veinte y  
 un días del mes de diciembre de mil novecientos quince años-----José  
 I. Rosales.--Srio.--Rúbrica.-----Señor Juez Instructor Militar .  
 Juan Girerol, en el expediente formado con motivo de la rebelión que  
 se atribuye a Ortiz Argumedo a Ud. con todo respeto expongo lo que  
 sigue. Necesitando para otros usos del salvoconducto que acompañé a mi  
 instancia relativa a la suspensión de las ordenes dictadas en contra  
 mia, vengo a suplicar a Ud. se sirva mandar se deje en autos copia  
 certificada a mi costa, mandando se me entregue el original. Por lo

expuesto. A Ud señor Juez ocurre-se sirva mandar se me entregue el pasaporte o salvo-conducto original dejándose copia en autos a mi costa. Protesto lo necesario. Mérida dic 21 de 1915. Juan Girerol. Rúbrica. Mérida diciembre 21 veinte y uno de 1915 mil novecientos quince.-Como se pide dejese en autos copia certificada de los documentos presentados entregandose los originales al interesado para su resguardo. Cumplase. Asi lo proveyo y firma el Lic Juan G Barrera Juez Instructor Militar, con migo el Secretario que autoriza. Lo certifico. Juan G Barrera P. José Y Rosales. Srio. Rúbricas. --- José Y Rosales Secretario del Juzgado Militar Constitucionalista. Certifico: que existen en esta causa las constancias siguientes. Un sello que dice -Consulado General de los Estados Unidos Mexicanos- Cuba- El suscrito Consul General del Gobierno Constitucionalista de Mexico en la Habana, de acuerdo con las instancias del Gobierno de Yucatan expido el presente pasaporte a favor del Señor Juan Girerol que se dirige a dicho Estado.-Habana Septiembre 15 de 1915 El Consul General "Antonio Hernández P." República Mexicana-Gobierno del Estado de Yucatan- Nomenclatura- Sección la Mesa o Ramo VI. Denominacion bai- Numero del expediente 3528- El C-Juan Girerol queda autorizado por este Gobierno para volver al Estado y permanecer en el libremente lo que se hace saber a las autoridades Civiles y Militares a efecto de que le presten toda clase de garantías-Constitución y Reformas, Mérida septiembre 3 de 1915. El Gobernador y Comandante Militar del Estado- S Alvarado-El Oficial Mayor interino en funciones de Secretario General. Calixto Maldonado R.--- Asi parece del expediente a que me refiero y por mandato Judicial libro al expediente por mandato Judicial en Mérida a veinte y un dias del mes de diciembre de mil novecientos quince años. Jose Y Rosales. Srio. En veinte y uno del mismo mes de diciembre despacho para entregar a los interesados los salvo-conductos a que se ha hecho referencia. Conste. Rosales. Srio.-- En veinte y dos del propio mes y año y bajo el Número 602 se libro nuevamente oficio al Inspector General de Policia reiterándole las ordenes relativas, a fin de que, cumplimente lo mandado en auto de diez y ocho de este mismo mes. Conste. Rosales. Srio. Rúbrica.-- Un sello que dice Inspeccion General de Policia. Estado de Yucatan. N° 1702.-- Enterado de su atento oficio numero 599 de fecha diez y ocho del presente manifiéstole que ya se han dictado las ordenes conducentes para la aprehension de los CC A- del Ortiz Argumedo, Ignacio Magaloni, Leandro E Meléndez, Domingo Evin, José R de Regil, Julian Aznar, Sixto Garcia López, Antonio R Palomeque, Nicanor Ancona, Manuel J Sánchez, Alvaro Gamboa Ricalde, Manuel Yrigoyen Lara, Ricardo Molina, Vicente Molina, Tenistocles Correa, Nicolás Martínez

Un sello que dice : Inspeccion General de Policia , Mérida Yucatan  
Nº 1756- En contestacion a su atento oficio girado bajo el número  
607 de fecha de ayer, manifiesta a Ud que el Señor Micanor Ancona no  
ha sido Aprehendido porque tiene salvo conducto librado por el C  
Gobernador y Comandante Militar del Estado, y respecto de Alvaro Gam  
boa Ricalde, he reiterado la orden de su aprehencion y lograda que  
sea ~~sera~~ puesto inmediatamente a disposicion de ese Juzgado de su  
merecido cargo. Protestora Ud al atenta consideracion. Constitucion  
Reformas. Mérida Diciembre 23 de 1915. El Inspector General de Poli  
cia. Capitan 1º. A Marillo. Al C- Juez Instructor Militar Constitu  
cionalista. Presente. ----- Señor Juez Instructor Militar. Alvaro  
Gamboa Ricalde con domicilio en la casa numero. 460 de la calle 60  
a, Ud pido: tengo noticias de que ha dictado Ud orden de detencion  
contra mi, y como el señor Gobernador y Comandante Militar del Estado  
ha expedido mi salvo-conducto segun compruebo con el documento que  
presento, me veo en el caso de pedir a Ud, revoque dicha orden y sobre  
sen la causa respectiva. Por lo expuesto, A Ud pida se sirva suspen  
der los efectos de dicha orden de detencion, comunicandolo asi a las  
Autoridades y con fundamento en el salvo-conducto presentado sobre  
sen el proceso que hubiese abierta y toda vez que debe obrar en  
mi poder dicho salvo-conducto suplico que se deje en autos copia  
*certificada*  
anticipada a mi costa y se me devuelva el original. Es justo los pro  
testo. Mérida veinte y cuatro de Diciembre de mil novecientos quin  
ce. Alvaro Gamboa Ricalde. Rúbrica. --- Mérida diciembre (24) vein  
te y cuatro de (1915) mil novecientos quince. Por presentado este  
memorial con el documento que acompaña relativo a un salvo-conducto  
expedido por el Gobernador de Yucatan y Comandante Militar del mis  
mo otorgada a favor de Alvaro Gamboa Ricalde, para transitar en este  
Estado siempre que observe buena conducta en cumplimiento de lo or  
denado en dicho salvo-conducto, el cual se acumula a este expediente  
y que ordena que Gamboa Ricalde pueda transitar en el Estado con am  
plias garantías las que se le deben prestar y siendo estas constitu  
tiones entre las que se encuentra la libertad del hombre, desde  
luego revócase la orden de aprehension dictada contra el C. Alvaro  
Gamboa Ricalde, comunicandose al Inspector General de Policia para

que suspenda dichas órdenes y librese al interesado copia certificada del documento exhibido para dejar en autos entregándose el original para su resguardo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma el Lic. Juan J. Barrera Puerto, Juez Instructor Militar. Lo certifico. -- Juan J. Barrera P. -- José I. Rosales. ----- José I. Rosales, Secretario del Juzgado de Instrucción Militar Constitucionalista. Certifico: que en esta causa ha sido presentado un documento del tenor siguiente: "Un sello que dice: Ejército Constitucionalista-Cuerpo de Ejército del Sureste.-General en Jefe.-Este cuartel general ha concedido amplias garantías al C. Alvaro Gamboa Ricalde para transitar en este Estado siempre que observe buena conducta. Constitución y Reformas. Mérida a ocho de septiembre de 1915.-El General en Jefe.-S. Alvarado.- Así consta y parece de dicho documento a que me remito, el cual desglaso para devolver al interesado como está mandado en el auto que antecede en Mérida a los trece días del mes de enero del año de mil novecientos diez y seis.-José I Rosales.-Recibí el original.-Medesto I. Gamboa.-Rubricas.-----Señor Juez Instructor Militar. Manuel Narváez Pérez, Mayor de edad, de esta vecindad y domicilio, en la <sup>causa</sup> ~~causa~~ que se instruye a Abel Ortiz Argumedo por rebelión a Ud: Respetuosamente expongo: acompaño un salvo-conducto otorgado por el Gobernador y Comandante Militar del Estado, con fecha diez y siete del presente mes por virtud del cual puedo transitar y permanecer en el Estado y en General en toda la República. Como tengo noticias de que con motivo de haber regresado al Estado el Sr Nicanor Ancona Gamara ha reiterado Ud. las ordenes de aprehension y detencion contra los inmeados en el asunto de referendia, vengo con el documento publico acompañado que le exhibo para el efecto de ver, a pedir a Ud se sirva suspender las ordenes con respecto a mi, mandando como es de derecho y como consecuencia del salvo conducto, en sobreseimiento de las diligencias con respecto a mi persona. En virtud de lo expuesto,----- a Ud señor Juez ocurro suplicando se sirva tenerme por presentado con el salvo conducto adjunto pidiendo la suspension de la orden de detencion dictada en mé contra con ocasion de este proceso y como consecuencia el sobreseimiento de las diligencias referentes <sup>mi</sup> a ~~mi~~, pidiendo ademas se sirva dejar en autos copia certificada a mi costa del salvo-conducto disponiendo que la secretaria me entregue el original. Protesto lo necesario. Mérida, diciembre veinte y nueve de mil novecientos quince. M Narváez Perez. Rúbrica.-----Mérida, (31) treinta y uno de diciembre de (1915) mil novecientos quince. Por presentado el memorial que antecede con el documento que acompaña relativo a un salvo-con-



-ducto expedida por el C. Gobernador y Comandante Militar del Estado a favor del señor Manuel Narvaez Pérez, en cumplimiento de lo ordenado en dicho salvo-conducto, el cual se acumula a este es expediente y que ordena que Narvaez Pérez con amplias garantías, transitar en toda la República, las que se le debe prestar y siendo estas Constitucionales entre las que se encuentran la libertad del Hombre, desde luego revocase la orden de aprehension dictada contra Manuel Narvaez Pérez, comunicandose al Inspector General de Policia para que suspenda dichas ordenes y libren al interesado copia certificada, del documento exhibido para dejar en autos, entregandose el original para su resguardo. Notifíquese y Cúmplase. Lo proveyó y firma el Lic Juan J Barrera. Juez Instructor Militar. Lo certifica. Juan Y Rosales. Srío. Rúbricas. --Seguidamente se libró al C Inspector General de Policia el oficio, a que alude el auto que antecede. Conste Rosales. Srío. Rúbrica. ----- José Y Rosales, Secretario del Juzgado Militar Constitucionalista. Certifico: que en esta causa ha sido presentado un documento, del tenor siguiente: "El C Manuel Narvaez Pérez puede entrar y salir de la República, y transitar libremente en ella para lo cual, se le extiende el presente salvo-conducto y en su virtud las autoridades civiles y militares deberan guardarle todo genero de garantías y seguridades=Constitucion y Reformas-Mérida diciembre 17 de mil novecientos quince. El Gobernador y Comandante Militar del Estado S Alvarado= El Secretario General Int= Rafael Aguirre C= Rúbricas Asi consta y parece de dicho documento a que me refito, el cual desglozo para entregar al interesado el original como esta mandado en el auto que antecede, en Mérida a las tres dias de enero, del año de mil novecientos diez y seis. José Y Rosales. Rúbrica. --Recibí el original Manuel Narvaez Pérez. p.e. -Marcos Zapata B. Rúbrica. --Señor Juez Instructor Militar Constitucionalista. Domingo Evia Barbachano, en los autos del proceso seguido contra Abel Ortiz Argumedo y socios por rebelion, ante Ud comparezco y respetuosamente expongo: Que como se servira ver por el salvo-conducto que acompaño, el señor General Salvador Alvarado, Gobernador y Comandante Militar del Estado, me ha autorizado para permanecer y transitar libremente por todo el Estado; teniendo noticias de que se ordenó mi detencion en el aludido proceso, vengo a pedir se sirva revocar la orden de aprehension decretada en mi contra. Por tanto, a Ud C. Juez respetuosamente pido, que teniendo por presentado, se sirva: 1º. Levantar la orden de aprehension dictada contra mi; y 2º. Devolverme el salvo-conducto que acompaño. Dejandose en autos la correspondiente copia. Es justo y lo protesto. Mérida 21 de

1170

enero de 1916. Domingo Evia Presentado en su fecha por el que lo suscribe, siendo las nueve y treinta minutos de la mañana y doy cuenta al C. Juez Conste. Rosales. Srío. Rúbrica.-- Mérida enero (21) de (1916) mil novecientos diez y seis. Por presentado el memorial que antecede con el documento que acompaña relativo a un salvo-conducto, expedido por el C. Gobernador y Comandante Militar del Estado a favor del señor Domingo Evia Barbachano, en cumplimiento de lo ordenado en dicho salvo-conducto, el cual se acumula a este expediente y que ordena que Domingo Evia Barbachano pueda con amplias garantías transitar en todo el Estado las que se debe prestar y siendo estas Constitucionales entre las cuales se encuentra la libertad del hombre desde luego se revoca la orden de aprehension dictada contra Domingo Evia Barbachano comunicandose al Inspector General de Policia para que suspenda dichas ordenes y libren al interesado copia certificada del documento expedido para dejar entantos entregandose el original para resguardo. Notifíquese y Cúmplase. Lo proveyó y firma el Lic Juan J. Barrera P. Juez Instructor Militar, ante mi el Secretario que autoriza. Lo certifico. Juan J. Barrera P. José Y. Rosales. Srío. Rúbrica. José Y. Rosales, Secretario del Juzgado de Instruccion Militar Constitucionalista. Certifico: que en esta causa, ha sido presentado un documento del tenor siguiente "Un sello que dice=Republica Mexicana Gobierno del Estado de Yucatan=Nomenclatura=Seccion 2a. Mesa o Ramo=Guerra Denominacion=Num del expediente=Num de orden del oficio 317=En acuerdo de ayer el Gobierno a mi cargo ha tenido a bien autorizar al C. Domingo Evia Barbachano, para permanecer y transitar libremente por el Estado de Yucatan. Lo que se hace saber a las autoridades Civiles y Militares a efecto de que se sirva prestale toda clase de garantías. Constitucion y Reformas=Mérida enero 19 de 1916=El Gobernador y Comandante Militar del Estado= S Alvarado= El Secretario General interino. Rafael Aguirre C. Rúbrica. Al C Domingo Evia Barbachano. Asi consta y parece de dicho documento a que me remite, el cual desgloro para devolver el original como esta mandado en auto que antecede en Mérida a los veinte y un dias del mes de enero del año de mil novecientos diez y seis. José Y. Rosales. Srío. Rúbrica. Recibí el original. Domingo Evia. Seguidamente se libre orden al Inspector General de Policia, como está ordenado en el auto que antecede. Conste. Rosales. Srío. Rúbrica. Un sello que dice Inspeccion General de Policia. Mérida Yucatán. Número 247. De conformidad con su atento oficio Número 804 de la fecha, queda sin efecto la orden de aprehencion y detencion dictada por ese Juzgado de su merecido cargo contra el C Domingo Evia Barbachano por haber exhibido un salvo-conducto labrado por el C Gobernador





y Comandante Militar del Estado. Protesto a Ud las seguridades de mi atenta y distinguida consideracion. Constitucion y Reformas. Mérida, enero 22 de 1916. El Inspector General de Policia, Capitán A. Marillo. Rúbricas. Al C Juez Instructor Militar Constitucionalista. Presente. --- C Juez Instructor Militar Constitucionalista. Francisco Rubio Ibarra, vecino de esta Ciudad, en los autos del proceso que se instruye a Abel Ortiz Argumedo y socios, ante Ud respetuosamente comparezco y expongo: que tengo noticia de que en este proceso existe una orden de detencion contra mí y como el C Gobernador y Comandante Militar del Estado, me ha expedido un salvo-conduto en el que dispone a todas las autoridades tanto civiles como militares que con vista de el me presten toda clase de garantías, vengon exhibirle a fin de que fundado en él se revoque la orden de mi detencion. Ental virtud, a Ud C Juez pido y suplico me tenga por presentada en el proceso a que aludo exhibiendo el salvo-conduto expedido a mi favor por el C Gobernador y Comandante Militar del Estado. Y en vista de el se sirva revocar la orden de mi detencion decretada en este proceso comunicarlo al Jefe de la Policia dejando sin efecto dicha orden y disponer por ultimo que previa su compulsu en autos, me sea devuelta original dicho salvo conducto. Protesto lo necesario. Mérida, a veinte y cinco de enero de mil novecientos diez y seis. F. Rubio Ibarra. Rúbricas. Presentado en su fecha siendo las nueve y treinta minutos de la mañana juntamente con el salvo conducto a que se refiere y doy cuenta al C Juez. Lo certifico. Rosales. Rúbrica. Srto. Mérida (25) de veinte y cinco de enero de (1916) mil novecientos diez y seis. Por recibido el presentememorial y salvo-conduto que incluye librado por el C Gobernador y Comandante Militar del Estado General Salvador Alvarez en favor del señor Francisco Rubio Ibarra en el que esta superior autoridad ordena que dicho Rubio puede entrar salir y transitar libremente por la República para lo cual las autoridades civiles y Militares deberan prestarle todo genero de garantías y seguridades y como entre estas se encuentra la libertad del Hombre desde luego y en cumplimiento de dicha orden, acumúlese al expediente relativo este memorial, cesando desde luego cualquier procedimiento que en este sentido haya contra dicho señor Rubio Ibarra librándose al efecto ordenes respectivas al C. Inspector General de la Policia para que desde luego sean suspendidas las ordenes de aprehencion dictadas en su contra y como solicito el mismo compareciente devuélvase el salvo conducto de referencia previa copia

certificada que asentara en autos la Secretaria y recibo del interesado que obrara en los mismos. Notifíquese. Cumplase. Juan J. Barrera P. José Y. Rosales. Srío. Rúbricas. Enseguida notifique el auto que antecede al C. Agente del Ministerio Público y entienda firma para constancia. Lo Certifico. F. Arcovado Guillermo Rosales. Srío. Rúbricas. Inmediatamente libere el oficio a que se contrae el auto anterior al C. Inspector General de Policía para el efecto de que sean suspendidas las órdenes de aprehensión en contra de Francisco Rubio Ibarra. Lo Certifico. Rosales. Srío. Rúbrica. --- José Y Rosales, Teniente Secretario del Juzgado Militar en el Estado de Yucatán. Certifico que el Señor Francisco Rubio Ibarra ha presentado a este Juzgado un salvo-conduto que a la letra dice: "República Mexicana- Gobierno del Estado de Yucatán Nomenclatura- Sección- Mesa- Rama - Denominación Num del Expediente- Num de orden del oficio- Este Gobierno ha tenido a bien conceder el presente salvo-conduto al Ingeniero Francisco Rubio Ibarra para que pueda entrar y salir y transitar libremente por la República para lo cual las autoridades civiles y militares deberán prestarle todo género de garantías y seguridades. Constitución y Reformas - Mérida dieciocho de 17 de 1915. El Gobernador y Comandante Militar del Estado- S. Alvarado. El Secretario General Interino. Rafael Aguirre O. --- Y para constancia y en cumplimiento del auto que antecede asiento la presente copia certificada en Mérida a los veinte y cinco días del mes de enero de mil novecientos diez y seis. José Y Rosales. Srío. C. Recibí hoy 25 de Enero de 1916, R Rubio Ibarra. -- En la Ciudad de Mérida, a los veinte y seis días del mes de enero de mil novecientos diez y seis ante el C. Juez del conocimiento y Secretario que autoriza comparecer al C. Nicanor Ancona Cámara a efecto de exhibir un salvo-conduto expedido por el Jefe Militar, a su favor en que ordena y autoriza al mismo para transitar y permanecer libremente en el Estado de Yucatán y se hace saber a las autoridades civiles y militares a efecto de que se sirvan prestarle toda clase de garantías y al mismo tiempo pide que sea devuelto el original de dicho salvo-conduto previa copia que de el certifiquen antes la Secretaria y recibo del mismo que otorgará en el expediente respectivo. El Juez de este conocimiento dispuso en el auto de esta diligencia se cumpla con lo ordenado por el Jefe militar y a que se contrae la petición del exponente. En este acto el propio juez tomando en consideración la acumulación de documentos en esta causa por las que el representante del Ministerio público Francisco Arcovado Guillermo formuló su acusación contra el declarante, así como contra los C. C. Abel Ortiz Arguendo, y demás relativos a



que se contrae el expediente fiscal se procedió a interrogarlo en la siguiente forma. Protesta Ud decir verdad en lo que fuese interrogado con relación a este asunto, contestó: que si protesta. Preguntado si no sabe que persona o personas recibieron del señor Aveila Montes un giro a la casa M J Smith de New York; para que mande inmediatamente se los entregara cuatrocientos ochenta mil dólares; respondió que si que dicho giro fue entregado a los Sres: Domingo Evia, Manuel J Sanchez José Rafael de Regil, Leandro E Meléndez y al que habla. Interrogado que persona o personas recibieron ciento ochenta mil dólares por cuenta de esa Carta-Credito, respondió: que el Sr Domingo Evia y el Declarante. Preguntado, si alguna persona cedió después sus derechos para recoger el saldo de esta carta-credito y a quien? Respondió: que en la Habana los señores Leandro E. Meléndez, José Rafael de Regil y Manuel J Sánchez cedieron sus derechos a favor de los señores Domingo Evia E y al declarante; que ya en el mes de marzo el que habla cedió todo el derecho que tenía sobre la carta-credito en favor del Señor Domingo Evia E y que sabe que el mes de Diciembre del año pasado el señor <sup>Evia</sup> cedió todos sus derechos al señor Doctor Don Victor Rendón representante legal de este Gobierno en los Estados Unidos. Interrogado que persona o personas recibieron un millón cien mil pesos oro nacional de la Tesorería General del Estado <sup>para que</sup> utilizaran dicha suma en compra de armas y pertrechos de guerra y para la compra de víveres que se relacionaba con la época de estos sucesos y si en efecto se les dió tal cantidad y se hizo tal inversión, respondió: que ignora completamente todo lo que se relacione con estos fondos, pues desde los últimos días de febrero salió del Estado. Preguntado si no tiene conocimiento de que para la facilitación de las sumas que ha hecho mención se hubiera hecho alguna operación entre el Gobierno del Ortiz Argueta para facilitar este dinero y la Comisión Reguladora del Mercado de Henequen?, respondió: que lo ignora. El C. Juez en este acto dispuso suspender esta diligencia para continuarla cuando la estime oportuno. Con lo que terminó la presente disponiendo el C. Juez se comuniquen a la Inspección General de Policía la suspensión de las ordenes dictadas contra el declarante con motivo de este asunto en vista del salvo-conducto exhibido, así como que la Secretaría entregue el original del mismo, previa copia certificada en autos, afirmando-se y ratificándose en el tenor de esta declaración leída que le fué manifestando en este acto el propio declarante: que de la carta credito sabe que se dispusieron de doscientos cuatro mil, doscientos cin

32

cuenta dollars que fueron invertidos y que los comprobantes de esta inversión obran en poder del mismo señor Victor A. Rendón, así como que sus generales son: natural y vecino de Mérida, casado, comerciante y de treinta y cuatro años de edad y firma con el G. Juez para constancia. Lo certifico. --Juan J. Barrera P. --Nicanor Ancona C. --José I. Rosales. --Rubricas. ---- Inmediatamente y ante el propio G. Juez del conocimiento y Secretario que autoriza, compareció el C. Domingo E. Evia Barbachano a efecto de emitir su declaración en este asunto y previa promesa que hizo de producirse con verdad, interrogado de modo conveniente respondió: llamarse como queda dicho, natural y vecino de Mérida, casado, propietario agricultor y de treinta y cuatro años de edad. Examinado fué preguntado. Protesta Ud. decir verdad en todo lo que fuere preguntado en este asunto. ? Respondió: Que sí protesta. Preguntado si sabe que persona o personas recibieron de la casa de Avelino Montes de esta ciudad un giro por la cantidad de cuatrocientos ochenta mil dollars contra la casa M. J. Smith de New York, respondió: que lo recibieron el que declara y los Sres. Nicanor Ancona Cámara, José Rafael de Regil, Manuel J. Sanchez y Leandro E. Meléndez. Preguntado si sabe que persona o personas recibieron de cuenta de esa carta crédito la cantidad de ciento ochenta mil dollars. Respondió: que el declarante y al señor Nicanor Ancona Cámara. Preguntado si sabe que persona o personas cedieron sus derechos para recibir el saldo de dicha carta crédito y a quien? Respondió: que al declarante le cedió sus derechos Nicanor Ancona Cámara; y que después el declarante le cedió sus derechos al señor Doctor Don. Victor Rendón como representante del Gobierno de Yucatán en New York, cuyos endoses constan al reverso de la carta de crédito de referencia. Preguntado si sabe que persona o personas recibieron de la Tesorería General del Estado la cantidad de un millón cien mil pesos oro nacional para la compra de armas, pertrechos de guerra y víveres, si la entrega se efectuó y si también la inversión en dicho objeto? Respondió: que lo ignora. Preguntado si sabe que para la facilitación de las sumas a que se ha hecho mención, el gobierno de Ortiz Arguando haya efectuado operación alguna con la Comisión Reguladora del Mercado de Henequen, respondió: que lo ignora porque ya estaba fuera del Estado. En este acto el G. Juez ordenó suspender la diligencia para continuarla después si fuere necesario. Con lo que terminó la presente en la que se afirmó y ratificó el declarante leído que le fué firmando para constancia con el G. Juez y conmigo el Secretario que lo certifica. --Juan J. Barrera Dom F. Evia. --José I. Rosales. --Rubricas. ---- José I. Rosales, Secre-



rio del Juzgado de Instrucción Militar en el Estado de Yucatán. Certificado: que el señor Nicanor Ancona Cámara presentó a este Juzgado un salvo-conducto que a la letra dice: "Un sello Republica Mexicana Gobierno del Estado de Yucatán. Nomenclatura Sección 2a. Mesa o Ramo Guerra. Numero de orden del oficio 2744.-El C. Nicanor Ancona queda autorizado por este Gobierno para transitar y permanecer libremente en el Estado de Yucatán, lo que se hace saber a las autoridades Civiles y Militares a efecto de que se sirvan prestarle toda clase de garantías. Comuníquese. Constitución y Reformas. Mérida, diciembre 21 de 1915. El Gobernador y Comandante Militar del Estado.-S. Alvarado El Secretario General Interino.-Rafael Aguirre G.-Al C. Nicanor Ancona. Asi consta y aparece del original a que me remito y en cumplimiento de lo mandado en el auto de veinte y seis del actual, libro la presente certificación en autos y hago entrega del original al interesado previo recibo en Mérida a veinte y siete de enero de mil novecientos diez y seis. Doy fe.-Recibí, Nicanor Ancona.-Rúbrica.--- O. Juez Instructor Militar.-Francisco Rubio Ibarra, vecino de esta ciudad, en los autos del proceso que se instruye a Abel Ortiz Arguemedo y socios, por el delito de rebelión, ante Usted respetuosamente comparezco y expongo:-que teniendo necesidad de una copia certificada de la certificación extendida a fojas treinta y tres vuelta de dicho expediente que se refiere al salvo-conducto librado a mi favor por el C. Gobernador y Comandante Militar del Estado, con fecha diez y siete de diciembre de mil novecientos quince, a Ud ocurro se sirva ordenar que la Secretaria de ese Juzgado de su cargo se sirva librármela a mi costa la certificación a que me he referido Por lo expuesto, a Usted, C. Juez pido : que me tenga por presentado solicitando se me libre a mi costa la certificación a que me refiero en el cuerpo de este memorial, y en virtud de haberseme extrañado el original. Protesto lo necesario en la ciudad de Mérida, a los veinte y un días del mes de noviembre del año de mil novecientos diez y seis.-F. Rubio Ibarra.-Mérida, noviembre (22) veinte y dos de (1916) mil novecientos diez y seis. Vistos: como se solicita en el escrito que antecede; proceda la Secretaría a librar al promovente, la certificación a que se refiera en su anterior memorial. Cúmplase. Lo provee y firma el C. Lic. Alonso A. Pantoja, Juez Instructor Militar Constitucionalista en el Estado. Lo certifico.-Alonso A. Pantoja.-S. Peniche y Osorio.-----

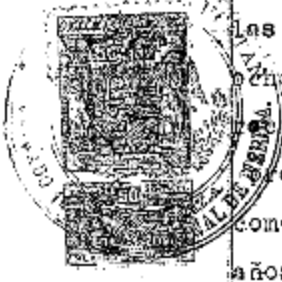
Asi consta y aparece del expediente a que me refiero y a pedimento de parte interesado y como está mandado en auto de esta misma fecha, libro la presente certificación

en la Ciudad de Mérida a los diez y seis días del mes de junio de mil novecien-  
tos diez y siete años. Entre líneas-que-y cinco-n- Conste-Partido de-como el-el-  
caso-que-tenian-n-Juez-certificada-causa-mi-el salvo-conducto-en-para que-que-  
Vale. Sobre líneas-proceso el-Vale. Testado-la-t-toman-don-con-tes-anticipada-cu-  
sa-No vale.

*Lorenzo Guillermo G.*

2549

LICENCIADO LORENZO GUILLERMO G. Secretario del Juzgado Primero de lo Criminal de  
éste Departamento Judicial,-----



CERTIFICO: Que en el segundo volúmen de la averiguación pre--  
via, por el delito de Rebelión contra Avelino Montes, existen --  
las constancias siguientes:- En la ciudad de Mérida, a los diez y  
ocho días del mes de abril de mil novecientos diez y siete, compa--  
reció ante el C. Juez, previamente citado el C. Juan Cirerol quien  
previa la protesta de producirse con verdad, declaró interrogado  
como corresponde, que se llama Juan Cirerol, de sesenta y nueve -  
años de edad, casado, comerciante, con domicilio en ésta ciudad, -  
en la casa número quinientos de la calle sesenta y dos. Que siendo  
Vocal de la Comisión Reguladora del Mercado de Henequén, y habién--  
dose separado o más bien oculto, sus compañeros fue llamado por  
Abel Ortiz Argumedo y que éste le preguntó que como se había para  
sacar el dinero que la Tesorería General del Estado, tenía enco--  
mendado en las Cajas de la Comisión Reguladora, a lo cual contest--  
tó el declarante, que Don Ildefonso Gutiérrez<sup>q.é.é.</sup> era el Gerente, te--  
nia las llaves y como se ignora su paradero hubo necesidad de for--  
zar la Caja y cuya orden fue comunicada por Ortiz Argumedo al que  
en esos momentos era Gerente interino Sr. Tomás O. Watrland y que  
como en esos momentos el que declara entraba de Vocal en turno, --  
tuvo necesidad de presenciar la apertura de dicha Caja, habiendo -  
exigido la presencia de un escribano para poder verificarse la -  
apertura de dicha Caja, para cuyo efecto se nombró al Lic. Notario  
Domingo Berni Diego, y se levantó el acta correspondiente que --  
firmó el declarante, entregándose poco más o menos la cantidad de  
TRESCIENTOS MIL PESOS poco más o menos al Sr. Ignacio Magaloni -  
que era entonces el Tesorero General. Que exhibe y pide que se le  
devuelvan un pasaporte y un salvo conducto que le fueron otorga--  
dos por el Gobierno del Estado y al Cónsul General de Gobierno -  
Constitucionalista en la Habana, ratificó lo expuesto previa lec--  
tura y firmó al margen. --Lo certificó.-----Licenciado S. San--  
chéz, --S. Beniche y Osorio, --al margen. --J. Cirerol. --Rábricas. ---Mérida  
a los diez y ocho. -- Cítase a los C.C. Ildefonso Gutiérrez y To--  
más O. Watrland, para que comparezcan ante éste Juzgado en la au--  
diencia del viernes próximo a las nueve de la mañana, a efecto. --  
de ser examinados en éste asunto; Desglósen y entréguense al C. --  
Juan Cirerol los documentos que exhibe previa copia en autos. Lo --  
proveyó el C. Juez. --Lo certifico, y que éstas diligencias son con--  
tinuación del expediente número ciento diez del proceso instruido

contra Avelino Montes.- Licenciado S. Sánchez V.-J. Peniche y Osorio.- Rúbricas.-En la misma fecha quedó enterado del auto anterior el Ministerio Público. Day fé.- Martínez López.-Peniche y Osorio.-En igual fecha se libraron las citas a que se refiere el auto anterior. Conste. Peniche y Osorio.- Rúbrica.---Sebastián Peniche y Osorio, Secretario del Juzgado de Instrucción Militar --Constitucionalista en el Estado, CERTIFICO: que los documentos que se mandan devolver en el auto que antecede, son del tenor literal que sigue:--"Un sello que dice: República Mexicana.-Gobierno del Estado de Yucatán.-Nomenclatura: Sección primera.-Mesa o ramo VI.-Denominación: bai.-Número: del expediente; -número: de orden del oficio; -3528.-Al referirse a éste oficio, sírvase citar la nomenclatura y el número de orden.-El C. Juan Cirerol, queda autorizado por éste Gobierno para volver al Estado y permanecer en él libremente, lo que hace saber a las autoridades civiles y militares, a efecto de que la presten toda clase de garantías.-Constitución y Reformas.-Mérida, Septiembre tres de mil novecientos quince.-Gobernador y Comandante Militar del Estado, S. Alvarado.-El Oficial Mayor interino en funciones de Secretario General, C. Maldonado R.---Un sello que dice: Consulado General de los Estados Unidos Mexicanos, Cuba.-El suscrito Cónsul General del Gobierno Constitucionalista de México en la Habana, de acuerdo con las instrucciones del Gobierno de Yucatán, espide el presente pasaporte a favor del Sr. Juan Cirerol, que se dirige a dicho Estado.- Habana Septiembre quince de mil novecientos quince.- El Cónsul General, Antonio Hernández Ferrer....".-Así consta y parece los documentos a que me refiero. I para dejar en autos y devolver los originales al señor Juan Cirerol como está mandado, expido la presente copia --certificada en la ciudad de Mérida, a los diez y ocho días del mes de abril del año de mil novecientos diez y siete.-S. Peniche y Osorio.-Rúbrica.- Recibí los originales, Vicente Méndez Alonso.---En veinte del mismo, compareció ante el C. Juez el C. Ildefonso Gutiérrez, quien previa la protesta que hizo de conducirse con verdad declaró: que se llama como queda escrito, natural de Tizimin de cuarenta y ocho años, casado, hacendado y como habitación en la calle cincuenta y seis número cuatrocientos sesenta y seis de esta ciudad. Que con referencia al asunto sobre el cual se le interroga lo único que sabe es lo siguiente: que siendo Garante de la Reguladora fue llamado por el Sr. General de los Santos y que siguiendo las indicaciones que el le hiciera mandó a disposición -





del mismo Sr. de los Santos UN MILLON DE PESOS retirándose el  
que habla como el mismo Sr. de los Santos. Ratificó lo expues-  
to y firmó en unión del C. Juez, agregando que se separó de ese -  
General por indicación de él mismo. -Lic. S. Sánchez. -Ildefonso -  
Cutiérrez. -Rábricas. --- En la ciudad de Mérida, a los veinte y  
cinco días del mes de abril de mil novecientos diez y siete, an-  
te el C. Juez Instructor Militar y Secretario que autoriza, com-  
pareció previamente citado el Sr. Tomás O. Waterland, quien pre-  
via la protesta de producirse con verdad, declaró interrogado  
como corresponde, llamarse como queda dicho, de sesenta y sie-  
te años de edad, casado, comerciante, con domicilio en ésta ciu-  
dad en la casa número cuatrocientos setenta y tres de la calle  
cincuenta, y dijo que efectivamente es cierto lo acentado por  
el Sr. Juan Cirerol, que en efecto cuando la entrada de las fuer-  
zas de Abel Ortiz Argumedo a ésta ciudad, el Sr. Ildefonso Cutié-  
rrez quien era en aquella época el Corrente de la Comisión Regu-  
ladora del Mercado de Mérida, se había marchado llevándose -  
las llaves de una Caja importante, que tuvo conocimiento de que  
el Sr. Juan Cirerol como Vocal en turno de dicha Institución -  
había recibido una orden de Abel Ortiz Argumedo que fungía en -  
aquel entonces como Presidente de dicha Institución, para lle-  
var a cabo la raptura de una de las Cajas, por contener fondos  
de la Tesorería General del Estado y documentos importantes, ---  
que para poder verificarse la retura de dicha caja fue comisio-  
nada el Notario Público el Licenciado Domingo Berni Diego, quien  
en su presencia, en la del declarante y del Sr. Cirerol, el Sr. -  
José Calvaria procedió a romper la Caja, ya rota dicha Caja -  
el citado Notario levantó una acta normenrizada de todo el ---  
efectivo y documentos que contenía dicha Caja, entregándose al -  
efecto al Sr. Ignacio Magaloni, las sumas que le correspondían y  
que consta en los libros de la Reguladora y los documentos fue-  
ron guardados en otra Caja. Leída que le fue ésta su declara-  
ción se afirmó y ratificó firmando para constancia. -Lo certifi-  
co. -T.O. Waterland. -Lic. S. Sánchez. -B. Peniche y Osorio. -Rábricas.  
C. Juez Instructor Militar. -El suscrito Agente del Ministerio Pú-  
blico, en el proceso que se instruye en contra de Avelino Mon-  
tes y socios como responsables del delito de Rebelión, dice que  
existe una fotografía del acta levantada en New York, en primero  
de abril de mil novecientos quince, por los comisionados del ---  
usurpador Abel Ortiz Argumedo, Leonardo F. Meléndez, J. Rafael de -

Regil, Nicenor Ancona C., Domingo L. Evis y Manuel J. Sánchez, porque tie-  
ne relación con el proceso y a fin de que se sirva Ud. ordenar que  
Ancona y Sánchez comparezcan desde luego a reconocer sus firmas al  
calse de dicha acta. Como aparece en autos que en pago de la carta  
de crédito de CUATROCIENTOS--OCHENTA MIL DOLLARS, la casa de Avelino  
Montes, obtuvo dinero de la Tesorería General del Estado, depositados  
en las Cajas de la Comisión Reguladora del Mercado de Henequén que  
fueron desahojadas por orden de Abel Ortiz Argumedo según las docu-  
mentaciones de Girarol y Waterland, hay pruebas de que se cometió el de-  
lito de Robo con raptura, cuya averiguación debe ser, así mismo, una  
finalidad de éste proceso; y en tal virtud la acusación queda <sup>formulada</sup> ~~acumulada~~  
por los delitos de Rebelión y Robo con raptura. Más ya que Aveli-  
no Montes se haya sustraído de la acción de la Justicia, proceda pe-  
dirse al Gobierno de la República de Cuba la extradición del respon-  
sable, que se dice encontrarse en la Habana, remitiéndose al efecto la  
certificación con las inserciones necesarias, a saber: I.-Constancias  
que comprueban la existencia del delito de Rebelión y responsabilidad  
de Avelino Montes, II.-Copia certificada de los preceptos legales  
que castigan los delitos de que se trata así como de su actual vigen-  
cia y Tercero, la media filiación del inculpaado, ésta es, su naciona-  
lidad Española, edad como de cuarenta y cuatro años, casado, como de  
un metro cincuenta centímetros aproximadamente de estatura, color blan-  
co, pelo y cejas color castaño, ojos acuitanados, nariz y boca pequeña,  
bigote raro. Aun cuando no hay tratado entre nuestra Nación y la Re-  
pública de Cuba, existe el antecedente de que por reciprocidad fue  
concedida la extradición de un Estafador que solicitó el Gobierno  
Cubano. Por todo lo expuesto y con fundamento en el párrafo final  
del artículo ciento trece de la Ley de Procedimientos en el Fuero de  
Guerra, debe mandarse acumular la fotografía exhibida, tener por refer-  
mada la acusación en los términos de ésta escrito y pedirse por los  
conductos debidos, la extradición del inculpaado Avelino Montes, man-  
dándose al efecto a la Secretaría de Relaciones copia certificada de  
las constancias indicadas conuplicatoria a efecto de que formule  
la petición de extradición. Mérida, abril veinte y siete de mil nove-  
cientos diez y siete. S. Martínez López. Rúbrica. Presentado en su fe-  
cha por el promoviente siendo las tres de la tarde doy cuenta al C.--  
Jaz. Peniche y Osorio. Rúbrica. Mérida, abril veinte y siete de mil  
novecientos diez y siete. Acumúlase al expediente de la fotografía  
exhibida y téngase por refermada en el sentido del memorial que antecede  
de la acusación del Ministerio Público, cítese a quienes suscriben



el acta fotografiada para que comparezcan a reconocer <sup>las</sup> sus firmas - que con sus nombres aparecen en el acta y de conformidad con la Ley de 17 de Mayo de 1897, atendiendo a que no hay con la República de Cuba tratado alguno referente a extradición de criminales, remítase con atento oficio por conducto del Gobierno del Estado a la Secretaría de Relaciones exteriores certificándose las constancias justificativas del cuerpo del delito a las que produzcan responsabilidad penal en contra de Avelino Montes, su filiación y señas -- particulares así como la orden de proceder y auto de fecha 9 del actual y de las Leyes Mexicanas que castigan los delitos de Rebelión y Robo con fractura así como de la constancia que la Secretaría hará respecto de la vigencia de dichas Leyes a efecto de que -- la referida Secretaría de Estado, formule la requiritoria de extradición. Lo proveyó y firmó el C. Juez. Doy fé. -- Lic. S. Sánchez Vera. -- S. Penicho y Osorio. -- Rábricas. -- En la misma fecha quedó enterado de la resolución que antecede el Ministerio Público. Doy fé. -- Martínez López. -- Penicho y Osorio. -- Rábricas. -- Acto continuo y cumpliendo con lo mandado en el auto anterior, se acumula la fotografía -- presentada y fueron citados los C. C. cuyos nombres aparecen en dicha carta. -- Conste. -- Penicho y Osorio. -- Rábrica. -- La Secretaría en cumplimiento de lo mandado en el auto que antecede, hace constar -- que las Leyes que definen y castigan el delito de Rebelión, son las siguientes: Código Penal del Distrito Federal, Artículo 1095 que dice: Son reos de Rebelión los que se alzan publicamente y en -- abierta hostilidad. -- I. -- Para variar la forma del Gobierno de la Nación. II. -- Para abolir o reformar su Constitución Política. III. -- Para impedir la elección de alguno de los Supremos Poderes, la renuncia de la Suprema Corte de Justicia, o de alguna de las Cámaras del Congreso General, o coartar la libertad de alguno de éstos Cuerpos en sus deliberaciones. -- IV. -- Para separar de su cargo al Presidente de la República o a sus ministros. -- V. -- Para sustraer de la obediencia del Gobierno, el todo o parte de la República o algún cuerpo de -- tropas. VI. -- Para despojar de sus atribuciones a alguno de los Supremos Poderes, impedirles el libre ejercicio de ellas o usurpárselas y el Art. 1101 que dice: se impondrán tres años de reclusión -- y multa de doscientos a dos mil pesos. I. -- Al que voluntariamente -- proporcione a los rebeldes, hombres para el servicio Militar, armas, municiones, dinero, o impida que las tropas del Gobierno reciban esos auxilios. II. -- Al funcionario Público que, teniendo por razón de su empleo o cargo el plano de una fortificación, puerto o rada, o se --

biendo con el mismo carácter el secreto de una expedición Militar-  
revele éste o entregue aquel a los rebeldes; que las leyes que definen  
y castigan el delito de Robo con fractura, son las siguientes; Código  
Penal del Distrito Federal, artículo 368 que dice: Comete el delito  
de robo; el que <sup>5º</sup>apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin  
consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a  
la ley; y el artículo 395 que dice: en todos los casos comprendidos  
en los artículos 381 a 394, en <sup>6º</sup>que imponga la pena de muerte, se au-  
mentará un año de prisión a la pena que ellos señalan, si solo medie  
se alguna de las circunstancias siguientes: I.-Ser los ladrones dos o  
más; II.-Ejecutar el robo de noche; III.-Llevando armas; IV.-Con fractu-  
ra horadación o excavación interiores o exteriores, o con llaves falsas  
;V.-Con escalamiento; y VI.-Dirigiéndose el ladrón funcionario público  
a suponiendo una orden de alguna autoridad. Pero si mediase más de una  
de estas circunstancias, por cada una de las otras, se aumentarán cua-  
tro meses <sup>de prisión</sup> al año mencionado. Y se hace asimismo constar que las leyes  
transcritas están en rigor actualmente. Mérida, <sup>abril</sup> veinte y siete  
de mil novecientos diez y siete.----- S. Peniche  
y Osorio.-Rábrica.-----En veinte y ocho del mismo mes y año se libró la  
copia certificada a que se refiere el auto anterior. Conste. Peniche y  
Osorio.-Rábrica.-----Mérida, Mayo once de mil novecientos diez y siete.  
te.-Con fundamento en lo dispuesto en el artículo trece de la Cons-  
titución Política de la República se declara aún <sup>1º</sup>competente este Juz-  
gado para continuar conociendo de este proceso y sus cuestiones inci-  
dentales, así como del juicio sobre responsabilidad civil y en conse-  
cuencia remítanse los autos al C. Juez del Ramo Penal en turno. Notifi-  
quese y cúmplase. Lo proveyó y firmó el C. Juez Instructor Militar. Doy  
fe. <sup>El J</sup>E. Sánchez Vera. S. Peniche y Osorio.-Rábricas.-----En la misma fecha  
quedó enterado de la resolución que antecede, el Ministerio Público.--  
Doy fe. Martínez López.-Rábrica.-----Juzgado Segundo del Crimen, Mérida  
Mayo veinte y nueve de mil novecientos diez y siete.- Por recibido es-  
te expediente de la causa seguida a Avilino Montes y socios por el  
delito de Rebelión y los dos incidentes que se refieren a la demanda  
de responsabilidad civil y de embargo precautorio promovido en la mis-  
ma causa. Y apareciendo en el auto anterior que el C. Juez Instructor  
Militar que conocía de dicho proceso se inhibe del asunto acatando la  
disposición contenida en el artículo 13 de la Constitución General  
de la República, por no ser ya competente sino un Juez del orden común  
del Ramo Penal, con fundamento en la fracción I del artículo 31 de la  
Ley Orgánica de los Tribunales del Estado, devuélvase este expedien-



te y los anexos referidos al mencionado Juez Instructor, para que a su vez los remita al Juez de lo Penal, Primero del Ramo, que es el competente, siguiendo el orden numérico. Blun J. Manuel Vega P. Srio. Rúbricas. --- Constante de noventa y tres fojas útiles la primera pieza y de ocho fojas la segunda así como los dos incidentes de responsabilidad civil y de embargo precautorio, devuelvo éste asunto al C. Juez Instructor Militar como se ordena. Conste. Vega P. Srio. Mérida, mayo treinta (30) de mil novecientos diez y siete. (1917.) Como lo desea el C. Juez Segundo de lo Penal, remítanse éste expediente y los demás a que el auto anterior se refiere al ciudadano Juez Primero de lo Penal. Lo Proveyó el ciudadano, Juez Instructor Militar. Lo certifico - Lic. E. Sánchez Vera. - S. Beniche y Osorio. Rúbricas. --- Hago constar que con noventa y tres fojas útiles la primera pieza y con ocho la segunda, así como los dos incidentes de responsabilidad civil y de embargo precautorio, remito como está mandado en el auto anterior, los presentes autos al C. Juez Primero de lo Penal. Mérida, mayo 20 de 1917. Beniche y Osorio. ---

Así consta y aparece del expediente a que me refiero, y a pedimento de parte interesada y como está mandado en auto de ésta misma fecha, expida la presente certificación en la ciudad de Mérida, a los diez y seis días del mes de junio de mil novecientos diez y siete años. Entre líneas h, r, y don, formulada, L. se de prisión- abril- in- Lic. L. L. VALE--TESTADO--acumulado- baili.-. NO VALE. Sobre líneas- las- Vale. Testado- sus- No vale.

*Lorenzo Guillermo G.*

Licenciado Lorenzo Guillermo G. Secretario interino del Juzgado primero de lo Criminal de este Departamento Judicial de Mérida de Yucatán. ---



CERTIFICO: que en el expediente relativo a la demanda de embargo precautorio promovido por el C. Agente del Ministerio Público contra el señor Avelino Montes, existen unas constancias cuyo tenor es el siguiente: "C. Juez Instructor Militar. --- Con la representación que llevo y para asegurar los intereses del Fisco a las resultas del juicio de responsabilidad civil intentado contra Avelino Montes, creo pertinente solicitar de Ud una providencia precautoria relativa al secuestro provisional de todos los bienes muebles y raíces, derechos y

acciones del demandado, así como de los intereses, rentas, frutos, productos y demás, según relación pormenorizada que obra en los autos del juicio de Hacienda que ante el Juzgado primero de lo Civil se sigue al mismo Avelino Montes, por el Agente del Ministerio Público del Ramo Civil. La medida precautoria que solicito se halla establecida en la fracción II del art. 166 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y en este precepto la fundo. Como se trata de responsabilidad civil en materia penal, no puede fijarse todavía el importe, sino hasta después de la dilación probatoria en que se presentaran las cuantías relativas a la demanda. La necesidad de la medida apuntada es manifiesta, por cuanto el interés del Fisco debe quedar a cubierto de cualesquiera maquinaciones del reo, hoy substraído a la acción de la justicia, que desde el extranjero ha procurado obstaculizar la labor del Gobierno Revolucionario. Con arreglo a la parte final del art. 176 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no estoy obligado a otorgar fianza, así, pues, con apoyo en los arts. 166 inciso II, 176, 177, 178 del indicado cuerpo de leyes, a Ud. pido desde luego y por estar llenados todos los requisitos legales, decrete como medida precautoria el secuestro provisional de todos los bienes muebles y raíces, derechos y acciones de Avelino Montes así como de los intereses, rentas, frutos, y productos y demás, para estar a las resultas del juicio de responsabilidad civil en materia penal, contra Montes ya iniciado por mi representación: que los deposite en la persona del C. Manuel Fortunat, a quien designo para serle entregados bajo formal inventario. Mérida, abril 26 de 1917. - S. Martínez López. --- Presentado en su fecha por el promovente, siendo las dos de la tarde y doy cuenta el C. Juez. Conste. - Peniche y Osorio. - Rúbrica. --- Mérida, abril veinte y siete de mil novecientos diez y siete. Por presentado el C. Agente del Ministerio Público solicitando la providencia precautoria a que se refiere el anterior memorial y en vista de la demanda sobre responsabilidad civil que ya cursa este Juzgado y con fundamento en los preceptos legales que se invocan es de decretarse y se decreta aquella con el carácter de secuestro provisional. En consecuencia proceda la Secretaría a practicar el aseguramiento de los bienes muebles y raíces, derechos y acciones del demandado Avelino Montes, así como de los intereses, rentas, frutos y productos de los mismos que bajo formal inventario se entregaran al C. Manuel Fortunat, depositario designado previa aceptación y protesta que este haga del cargo. Notifíquese al promovente y cúmplase. Lo proveyó y firmó el C. Juez. Doy fé. - Lic. E. L. Sanchez Vera. - S. Peniche y Osorio. - Rúbricas. --- En la misma fe



cha quedó enterado de la resolución que antecede el Ministerio Público. Doy fé. — Martínez López. — Peniche y Osorio. — En la ciudad de Mérida, a los diez días del mes de mayo de mil novecientos diez y siete, siendo las doce del día, me trasladé a la casa de Avelino Montes, número 489 de la calle 65 y no habiéndolo encontrado le dejé citatorio para que espere a las tres de la tarde, apercibiéndolo con entender la diligencia con cualquiera de las personas que la ley designe en caso de no encontrarse presente y hago constar que el citatorio de que se trata lo recibió el señor Jorge Pasos Bolio, quien no firma por no creerlo necesario. Doy fé. — Peniche y Osorio. —

En la ciudad de Mérida, a los diez días del mes de mayo de mil novecientos diez y siete, a la hora designada en el citatorio que se refiere la razón que antecede, yo Sebastian Peniche y Osorio, Secretario del Juzgado Instructor Militar, cumpliendo con lo dispuesto en el auto de fecha veinte y siete del mes próximo pasado, me constituí en la casa del señor Avelino Montes situada en la calle sesenta y cinco y marcada con el número cuatrocientos ochenta y nueve, y no estando presente Avelino Montes, apesar del citatorio que le dejé procedí a entender la diligencia con el C. Lic. Gustavo Molina Font, quien dijo ser apoderado general de Avelino Montes. Impuesto que fué del acuerdo recaído al escrito en que el Agente del Ministerio Público solicita como providencia precautoria el secuestro provisional de todos los bienes de Avelino Montes; dijo: que no está en manera alguna conforme con la resolución de que se trata que considera arbitraria e ilegal y por consiguiente protesta enérgicamente contra la nueva ilegalidad que se comete contra su poderdante y que viene a sumarse a las tantas ilegalidades y arbitrariedades cometidas contra su poderdante desde que se hizo cargo del Gobierno del Estado el General don Salvador Alvarado; que deja expresamente a salvo los derechos de su representación para exigir de quien y ante quien corresponda la reparación de los daños y perjuicios que a su poderdante se causan y para reclamar en la vía y forma procedentes la providencia de que se trata. Pido igualmente se libre copia certificada de esta acta. Acto seguido el Secretario que suscribe, cumpliendo con lo dispuesto por el C. Juez y a reserva de dar cuenta con lo manifestado por el señor Licenciado don Gustavo Molina Font, da por trabda ejecución y embargo en todas las fincas relacionadas en las copias exhibidas por el Ministerio público y que en veinte y siete fojas útiles se acumulan en este acto al expediente y en los demás bienes descritos en las referidas copias y de conformidad con lo pedido por el Ministerio Públi-

bo en los frutos, intereses, rentas y productos de dichos bienes, y constituir el depósito de los bienes embargados, en la persona del C. Manuel Fortunat por designación que de él ha hecho la parte actora. Y estando presente el depositario aceptó el cargo, ofreciendo desempeñarlo leal y fielmente. Y el suscrito <sup>Secretario</sup> se reserva dar cuenta al C. Juez. Doy fé. --- M. S. Fortunat. --- Evo Molina Font. --- S. Peniche y Osorio. --- Rúbricas. --- Mérida, mayo once de mil novecientos diez y siete. Lo acordado en esta fecha en el juicio principal. Lo proveyó y firmó el C. Juez. Doy fé. --- Lic. E. L. Sánchez. --- S. Peniche y Osorio. ---

C. Secretario del Juzgado Instructor Militar. --- El Agente del Ministerio Público que suscribe, en la providencia precautoria que ante ese Juzgado ha promovido en contra de Avelino Montes, dice: El C. Juez acordando, de conformidad mi promoción respectiva, mandó el aseguramiento provisional de todos los bienes del referido Avelino Montes y al efecto de que se lleve adelante lo mandado designo para el embargo las fincas y bienes descritos en la relación que en veinte y siete fojas útiles acompaño, así como las rentas, intereses, frutos y productos de las mismas fincas y bienes y por consiguiente, pido a usted que se sirva tener presente esta designación y trabar embargo en los bienes designados entregándolos al depositario señor Manuel Fortunat, previas aceptación y protesta del cargo. Mérida, abril 30 de 1917. --- El Agente del Ministerio Público, Teniente Coronel S. Martínez López. ---

Demanda de responsabilidad Civil promovida por el Agente del Ministerio Público contra Avelino Montes. --- C. Juez Instructor Militar. --- El suscrito Agente del Ministerio Público, ante Ud comparece a exponer lo que sigue: Existe en el Juzgado del merecido cargo de Ud. que se instruye al extranjero Avelino Montes y socios como responsables del delito de rebelión, y en él se ha dictado auto de proceder contra el aludido Montes y contra los demás responsables, sin que se hubiera conseguido la detención de aquel por encontrarse evadido de la acción de la justicia. Ahora bien, la circunstancia de hallarse Montes prófugo, sin duda contribuirá a retardar indefinidamente la terminación del proceso, dado que será necesario tramitar la extradición, que de suyo demanda tiempo; mas ello nos servirá <sup>consecuente</sup> óbice para reclamar desde luego la responsabilidad civil, a fin de indemnizar al Fisco de los cuantiosos gastos en el ramo de guerra erogados por razón y con motivo de aquel delito de rebelión. A obtener el pago de esa responsabilidad tiende la presente demanda, que se funda en los hechos y preceptos de derecho siguientes: Hechos: I. En ese Juzgado del merecido cargo de Ud se instruye proceso al extranjero Avelino Montes y socios, como responsables del delito de rebe-





lón. II. Las diligencias sumariales practicadas hasta hoy demostraron plenamente la responsabilidad criminal de Avelino Montes. III. Dicta- la la detención de los procesados no ha podido conseguirse, porque Montes logró evadirse de la acción de la justicia, y no ha querido comparecer a responder de los cargos que le resultan. IV. Con motivo del delito de rebelión el Fisco tuvo que erogar cuantiosos gastos en el ramo respectivo, cuyas cuentas no terminan de glosarse. V. Al iniciarse el período constitucional se procederá a examinar y discutir las reclamaciones de los extranjeros sobre daños y perjuicios causados por razón de las revueltas intestinas. VI. Natural y equitativo parece, pues, que si la Nación ha de pagar esos daños y perjuicios, tenga legítimo derecho a reclamar de los extranjeros responsables la indemnización de los que hayan causado con su ingerencia punible en las rebeliones suscitadas en el país. Preceptos de derecho aplicables: I. El art. 32 del Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales, que preceptúa que todo delito produce responsabilidad criminal. II. El art. 301 del mismo Código Penal, que determina en que consiste la responsabilidad civil proveniente de un hecho u omisión contrarios a una ley penal. III. El art. 356 del Código Penal indicado, conforme al cual, siempre que el responsable tenga bienes, se hará efectiva en ellos la responsabilidad hasta donde alcancen. IV. El art. 372 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dispone que la acción civil puede ejecutarse al mismo tiempo y ante el mismo Tribunal que conoce de la penal. V. El art. 373 ibidem, que indica la forma en que ha de seguirse el juicio sobre responsabilidad civil. VI. El art. 375 del mismo cuerpo de leyes, que determina el modo en que ha de verificarse el emplazamiento. Por los hechos expuestos y fundamentos legales que les son aplicables, a Ud. atentamente pide el suscrito Agente del Ministerio con la representación que lleva, que admita en juicio sumario la demanda de responsabilidad civil que instaura contra Avelino Montes, a quien se procesa como responsable del delito de rebelión: que corra traslado de ello para que la conteste dentro del término improrrogable de tres días: que en su oportunidad abra a prueba dicho juicio por todo el término legal, y que previos los demás trámites ya en estado, dicte sentencia definitiva declarando procedente y bien probada la acción deducida contra el demandado, y lo condene al pago de lo que importa la responsabilidad civil, en vista de las cuentas que glosadas se presentaran durante la dilación probatoria respectiva. Mérida, abril veinte de mil novecientos diez y siete. -S. Martínez López. -Mérida, veintiuno de a-

brilde mil novecientos diez y siete. Por presentado el C. Agente del Ministerio Público con la demanda que antecede; se admite la demanda en los preceptos que antecede en la vía y forma propuestas y con fundamento legales legales que se invocan, córrase traslado en la forma legal al demandado Avelino Montes por el término de tres días, como lo preceptúa el artículo 591 del Código Federal de Procedimientos civiles. Lo proveyó y firmó el C. Licenciado Ernesto L. Sánchez Vera, Coronel Juez instructor Militar. Doy fé. - Lic. E. L. Sánchez Vera. - S. Peniche y Osorio. - Rúbricas. ---- En la misma fecha quedó enterado de la resolución que antecede, el Ministerio Público. Doy fé. - Martínez López. - Peniche y Osorio. Mérida, mayo once de mil novecientos diez y siete. Lo acordado en esta fecha en el proceso seguido en contra de Avelino Montes por el delito de rebelión. Lo proveyó el C. Juez. Doy fé. - Lic. E. L. Sánchez Vera. - S. Peniche y Osorio. - Rúbricas. ----

Así consta y aparece de los expedientes a que me refiero, y a pedimento de parte interesada y como está mandado, expido la presente certificación en cumplimiento del auto de esta misma fecha, en Mérida, a los diez y seis días del mes de junio de mil novecientos diez y siete años. Entre líneas-Secretario-consiguiente-en los preceptos-Vale. Testado.-que antecede-No vale.

*Lorenzo Guillelms G.*

Doctor Arago, Porre, Juan, Secretario General, Encargado del Gobierno del Estado de Yucatán.

Certifico: que las firmas que aparecen a fojas veinte y cuatro y veinte y cinco, así como las que anteceden, las cuales obran en este expediente de certificación, son las del C. Licenciado Lorenzo Guillelms G., actualmente Secretario del Juzgado Primero de lo Criminal de este Departamento Judicial. Expedida, fue rubricada, junio diez y nueve de mil novecientos diez y siete años.

Por el Excmo. Gral.  
El C. Mayor  
Juan P. Capel



SECRETARIA GENERAL  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE YUCATAN  
Domicilio de Jefe  
del Poder Judicial  
Mérida.

# Notaria Pública Número, 24.

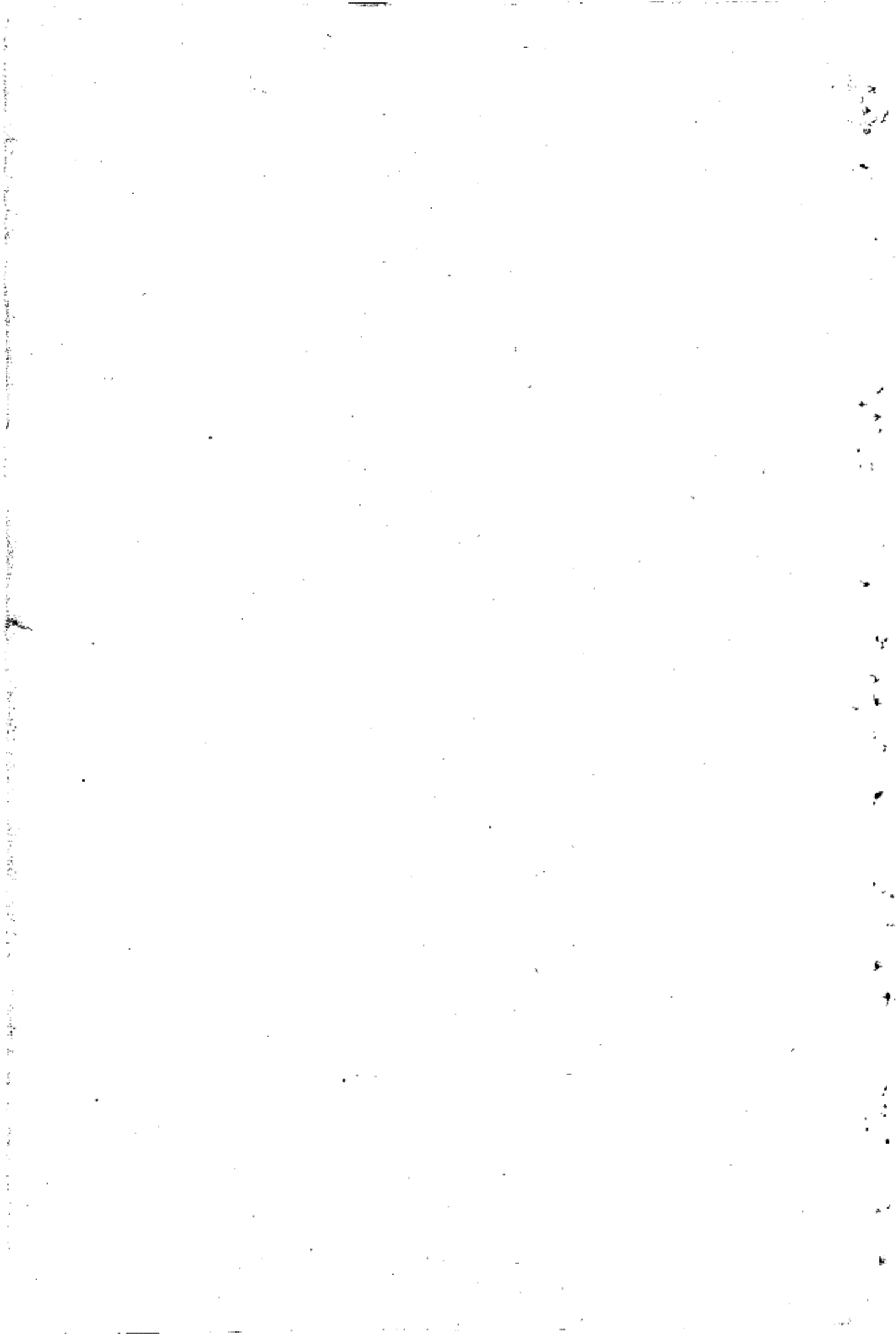
a cargo de

**Federico Ignacio Velázquez**



TESTIMONIO DE LA PROTOCOLIZACION DEL PODER ESPECIAL CONFIER  
DO POR EL SEÑOR DON AVELINO MONTES Y LINAGE EN FAVOR DEL SEÑOR  
DON JOSE VELA RUIZ.

México, julio siete de mil novecientos diez y siete.





NOTARIA PUBLICA NUM. 24  
A CARGO DE  
FEDERICO IGNACIO VELAZQUEZ.



- 1 -

NUMERO 2452.-DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS.-PROTOCOLIZA  
CION DE PODER.-OTORGA EL SEÑOR AVELINO MONTES Y LINAGE EN FAVOR  
DEL SEÑOR DON JOSE VELA RUIZ.-DERECHOS DEVENGADOS EN LA ESCRITU  
RA VEINTIOCHO PESOS.-UNA RUBRICA . -----

EN LA CIUDAD DE MEXICO, a siete de julio de mil novecientos die  
cisiete, yo FEDERICO IGNACIO VELAZQUEZ, Notario Público número  
veinticuatro, en cumplimiento de lo mandado por el señor Juez -  
primero de lo Civil Licenciado Enrique de la Garza, en auto de  
treinta de junio próximo pasado, procedo a protocolizar un expe  
diente en cinco fojas útiles que queda agregado al Apéndice de  
esta escritura, bajo el número dos mil cuatrocientos cincuenta  
y dos correspondiente a la misma y con la letra "A", el cual --  
contiene el testimonio escrito en español del poder que el se  
ñor Avelino Montes y Linage, confirió a favor del señor José Ve  
la Ruiz natural de Santander, España, vecino de esta Ciudad de  
México, en la ciudad de la Habana, Cuba el día diecisiete de Ma  
yo de mil novecientos diecisiete, ante el Notario y Licenciado  
Carlos M. de Alzugaray y Lavaggi; las diligencias y legalizacio  
nes de estilo promovidas las primeras por el mismo señor José -  
Vela Ruiz para obtener su protocolización. Son testigos Guiller  
mo D. Velázquez y Rosendo Becerril, ambos casados, empleados, -  
el primero de treinta y cuatro años de edad y con domicilio en  
esta ciudad primera calle de Guillermo Prieto número nueve; y -  
el segundo de cuarenta y cinco años de edad, con domicilio en -  
esta ciudad, segunda calle del Chopo número cuarenta y dos. Doy  
fé. -----

G. D. VELAZQUEZ.-ROSENDO BECERRIL.-RUBRICA. -----

México, siete de julio de mil novecientos diecisiete. Con esta  
fecha autorizo la presente y dejo agregada al Apéndice de esta  
escritura bajo el número dos mil cuatrocientos cincuenta y dos  
letra "B" la nota que acredita el pago del Impuesto del Timbre.

Doy fé.-FEDERICO IGNACIO VELAZQUEZ.-RUBRICA.-Un sello que dice:  
Federico Ignacio Velázquez Notario No. 24 Ciudad de México. ---  
DOCUMENTO "A".-Número ciento treinta y seis.=Poder Especial.=En  
la ciudad de la Habana, a diez y siete de mayo de mil novecien-  
tos diez y siete.=Ante mí, Licenciado Carlos M. de Alzugaray y  
Lavaggi, Abogado y Notario Público del Colegio de esta Capital  
con residencia en la misma, Comparece el señor Avelino Montes y  
Linares, natural de España, mayor de edad, casado, banquero y ve-  
cino de esta ciudad en el barrio del Vedado.=Y asegurando hallar-  
se en el pleno goce de sus derechos civiles y en la libre dispo-  
sición de sus bienes y teniendo a mi juicio la capacidad legal  
necesaria para éste otorgamiento, sin que nada me conste en con-  
trario, dice:=Que sin perjuicio del poder que tiene conferido -  
al Licenciado don Gustavo Molina Font, vecino de la ciudad de -  
Mérida, Yucatán, México, por el presente instrumento dá y confie-  
re poder especial al señor JOSE VELA RUIZ, natural de Santander,  
España, mayor de edad, casado, del comercio y vecino de la ciu-  
dad de México, República Mexicana.=Para que en representación -  
del otorgante pida y gestione ante el señor Presidente de la Re-  
pública de México o ante cualesquiera otras Autoridades adminis-  
trativas, civiles, militares o judiciales, en la forma que pro-  
ceda, la suspensión y sobrestamiento definitivo del procedimien-  
to económico-coactivo que ilegalmente el Tesorero General del -  
Estado de Yucatán, por instrucciones del Gobernador y Comandan-  
te Militar del mismo Estado, ha incoado y sigue contra el expo-  
nente en cobro del saldo del importe de una carta de crédito -  
por cuatrocientos ochenta mil dólares, expedida en Mérida, cuan-  
do no estaba allí el que habla, por un apoderado suyo, con fe-  
cha dos de marzo de mil novecientos quince, a favor de los seño-  
res Leandro E. Meléndez, Nicanor Ancona, Domingo Evia, J. Rafael  
de Regil y Manuel J. Sánchez, y a cargo de M. J. Smith de New-  
York, Estados Unidos de América.=Para que pida y gestione que -  
se anule y levante el secuestro trabado en bienes del exponente



NOTARIA PUBLICA NUM. 24.  
A CARGO DE  
FEDERICO IGNACIO VELAZQUEZ.



- 2 -

con motivo del procedimiento económico-coactivo, antes indicado y para que se devuelva al dicente el libre uso, goce y administración de tales bienes, con sus frutos y acciones todos, =Para que pida y gestione el amparo y protección del señor Presidente de la República Mexicana o de cualesquiera otras Autoridades competentes de la misma República, contra el ilegal procedimiento económico coactivo entablado, según se ha dicho, por la Tesorería General del Estado de Yucatán contra el otorgante señor Avelino Montes.=Para que pida y gestione el amparo y protección del señor Presidente de la República o de cualesquiera otras autoridades competentes de la misma contra el embargo declarado en las propiedades rústicas y urbanas y bienes muebles que el señor otorgante posee en los Estados de Yucatán y Campeche, con motivo del procedimiento económico-coactivo de que acaba de hacerse mención. Para que pida y gestione al amparo y protección del Presidente de la República Mexicana y de cualesquiera otras Autoridades competentes de la misma contra todas y cada una de las ilegalidades cometidas en perjuicio del dicente en el procedimiento económico-coactivo, antes mencionado y en el juicio verbal de Hacienda que como consecuencia de dicho procedimiento ha instaurado el representante del Ministerio Público contra el otorgante señor Avelino Montes ante uno de los Juzgados civiles y de Hacienda de Mérida.=Para que pida y gestione la reparación e indemnización de los daños y perjuicios que se han ocasionado y se siguen ocasionando al señor Montes con motivo del ilegal procedimiento referido.=Para que en el ejercicio de este poder, haga, suscriba y presente memoriales ante el Presidente de la República Mexicana y ante cualesquiera otras autoridades de la misma.=Para que en representación del otorgante promueva y gestione ante las Autoridades competentes, la suspensión y sobreseimiento definitivo del procedimientos ilegal -

que se ha incoado contra él, por el supuesto crimen de rebelión contra las autoridades legítimas de la República, sin fundamento alguno legal, pretendiéndose recientemente que el otorgante señor Montes tomó participación en la rebelión del señor Ortiz Argumedo, siendo así que el señor Montes se encontraba fuera de Yucatán cuando tuvieron lugar los acontecimientos cuya participación se le atribuye. =Para que en representación del otorgante, comparezca personalmente ante el Presidente de la República y Autoridades competentes; a pedir y alegar lo que sea procedente haciendo y practicando cuantas gestiones, promociones, agencies y diligencias sean necesarias, útiles y convenientes para el desempeño del poder que se le confiere. =Para que prosiga, si fuere necesario, el juicio de Amparo ante la Suprema Corte de Justicia, contra cualquier acto, disposición, acuerdo o mandato de las autoridades de Yucatán que perjudiquen ilegalmente los derechos y garantías que las Leyes y la Constitución conceden al otorgante. =Así mismo concede y otorga poder especial señor José Vela Ruiz, para que en su representación designe uno o más Abogados, para que lo acompañen y obren conjuntamente con él en todas las gestiones, promociones, agencies y diligencias que crea necesarias y útiles en favor del otorgante, con facultad para traspasar este poder a la persona que juzgue mas conveniente. =Igualmente declara el compareciente señor Montes, que como antes ha dicho, este poder especial que otorga al señor José Vela Ruiz, es sin perjuicio del que tiene conferido al Licenciado Gustavo Molina Font, quien podrá continuar representando al exponente en todos sus asuntos, inclusive el negocio para el cual confiere el señor Montes este poder especial al señor Vela. =Así lo otorga siendo testigos los señores don Manuel Rodríguez y Estevez y don Felipe Gallo y Alonso, mayores de edad, de este vecindario y sin excepción legal para serlo, según expresan. =Leyeron el presente en uso de su derecho; se ratificó en su contenido el otorgante y firma con los testigos. De todo lo cual





NOTARIA PUBLICA NUM. 24.  
A CARGO DE  
FEDERICO IGNACIO VELAZQUEZ.

- 3 -



y de conocer al compareciente, yo el Notario doy fé.-Avelino --  
Montes.-Manuel Rodríguez.-Felipe Gallo.- Signado: L. Carlos M.  
de Alzugaray.-Concuerda con su original, que bajo el número cien  
to treinta y seis de orden con que encabeza, queda en el proto-  
colo corriente de instrumentos Públicos de mi Notaría a que me  
remito. Y para el señor Avelino Montes y Linage, expido la pre-  
sente copia en dos pliegos, dejando nota en su matriz, en la -  
Habana a diez y siete de mayo de mil novecientos diez y siete,-  
fecha de su otorgamiento.-L. Carlos M. de Alzugaray.-Rúbrica.---  
Los infrascritos, Notarios Públicos del Colegio de esta Capital  
con residencia en la misma.-Damos fé: Que nuestro Compañero Ldo.  
Carlos M. de Alzugaray y Lavaggi, por quien aparece autorizada  
la anterior copia, usa signo, firma y rubrica iguales a las que  
preceden, que son al parecer de su puño y letra, hallándose en  
la fecha en que lo suscribió, en el desempeño de su cargo, sin  
que nos conste nada en contrario.-Y para constancia, extendemos  
la presente que firmamos y sellamos con el del Colegio y el de  
nuestreuso, en la Habana a diez y siete de mayo de mil novecien-  
tos diez y siete.-L. Ramón M. Ruiz.-Rúbrica.-Francisco Beci.-Rú-  
brica.-Un sello sobre puesto que dice: Día 17 de mayo de 1917.-  
Colegio Notarial del Territorio de la Aud<sup>a</sup> de la Habana. Nihil  
Prius Fide.-\$5620.-Un peso cincuenta centavos moneda americana.  
Decano.-A. N. Cañas.-Rúbrica.-Tesorero.-Firma ilegible.-Rúbrica.  
Servicio Consular Mexicano. Consulado General en Cuba.-Núm. 142  
CERTIFICO: que la firma que antecede es del Ramon M. Ruiz y Fran-  
cisco Beci y la misma que acostimbran usar en todos los documen-  
tos que autoriza, por lo que se le debe dar fé y crédito.-Haba-  
na 18 Mayo de 1917.-E. A. González. Consul General de México.--  
Derechos Dls. 8.00.-Nota: Este Consulado no asume responsabili-  
dad alguna por el contenido del documento anexo.-Un sello sobre  
puesto que dice: Consulado General de México en Cuba.-Habana.--  
Otro sello sobre puesto que dice: Secretaría de Relaciones Ex--

teriores. México.-Un timbre de cincuenta centavos debidamente -  
cancelado.-Número 3512.-El infrascrito Subsecretario de Estado  
del Exterior Encargado del Despacho, Certifica: que el señor En-  
rique A. González es Cónsul General de México en la Habana, Cu-  
ba, y suya la firma que antecede.-México, 2 de junio de 1917.-E  
Garza Pérez.-Rúbrica. -----  
C. Juez Primero de lo Civil.-José Vela, con domicilio en la se-  
gunda de Filomeno Mata número diecisiete, a usted, conforme a -  
derecho, manifiesto:=-Que acompaño al presente escrito, testimo-  
nio de la escritura de poder que en la ciudad de la Habana, y -  
ante el Notario Público D. Carlos M. de Alzugaray otorgó a mi -  
favor el señor don Avelino Montes, el diecisiete de mayo de mil  
novecientos diecisiete.-En esta virtud, y con fundamento en los  
artículos 1358, 1359 y 1364 del Código de Procedimientos Civi-  
les y 53 de la Ley del Notariado, a usted pido se sirva ordenar  
que se protocolice en los registros del Notario Federico Igna-  
cio Velázquez.-México, junio veintiocho de mil novecientos die-  
cisiete.-José Vela.-Rúbrica.-Presentado el treinta de junio a -  
las diez y tres cuartos de la mañana con un poder.-Conste.-Rú-  
brica.-México, junio treinta de mil novecientos diecisiete.-En  
vista de que el documento que se acompaña, tiene los requisitos  
a que se refieren los artículos 455 y 456 del Código de Proce-  
dimientos Civiles, para hacer fé de su procedencia con fundamen-  
to en el artículo 1358 del mismo Código y 58 de la Ley del Nota-  
riado protocolícense estas diligencias en los registros del No-  
tario señor Federico Ignacio Velázquez, quien expedirá al inte-  
resado los testimonios que fueren de darse conforme a derecho.-  
Lo proveyó y firmó el señor Juez l/o. de lo Civil Licenciado --  
Enrique de la Garza.-Doy fé.-Enrique de la Garza.-Rúbrica.-Sal-  
vador Hinojosa.-Rúbrica.-En el Boletín Judicial núm. 1, corres-  
pondiente al 2 de julio se hizo la publicación de Ley. Conste.-  
Rúbrica.-A las doce del día 3 de julio surtió sus efectos la -  
notificación anterior por estrados del Juzgado conforme a la -  
Ley.-Doy fé.-Firma ilegible.-Rúbrica.-----



- 4 -

DOCUMENTO "B".-Al margen timbres por valor de ocho pesos debidamente cancelados.-México, 7 de julio de 1917.-El día de su otorgamiento quedó firmada la escritura núm. 2452 redactada en el protocolo con fecha 7 de julio de 1917. En ella se contienen las siguientes operaciones: "Protocolización de Poder". Otorga: el señor don Avelino Montes a favor del señor José Vela.-Con fundamento de las fracciones 89 y 78 inciso I. del artículo catorce de la Ley vigente, opino que causa las cuotas siguientes:--  
Dos pesos por foja en cuatro fojas . -----\$ 8.00.

----- S u m a . -----\$ 8.00.

Federico Ignacio Velázquez.-Rúbrica.-Un sello que dice: Federico Ignacio Velázquez Notario No. 24 Ciudad de México.-Núm. 172.

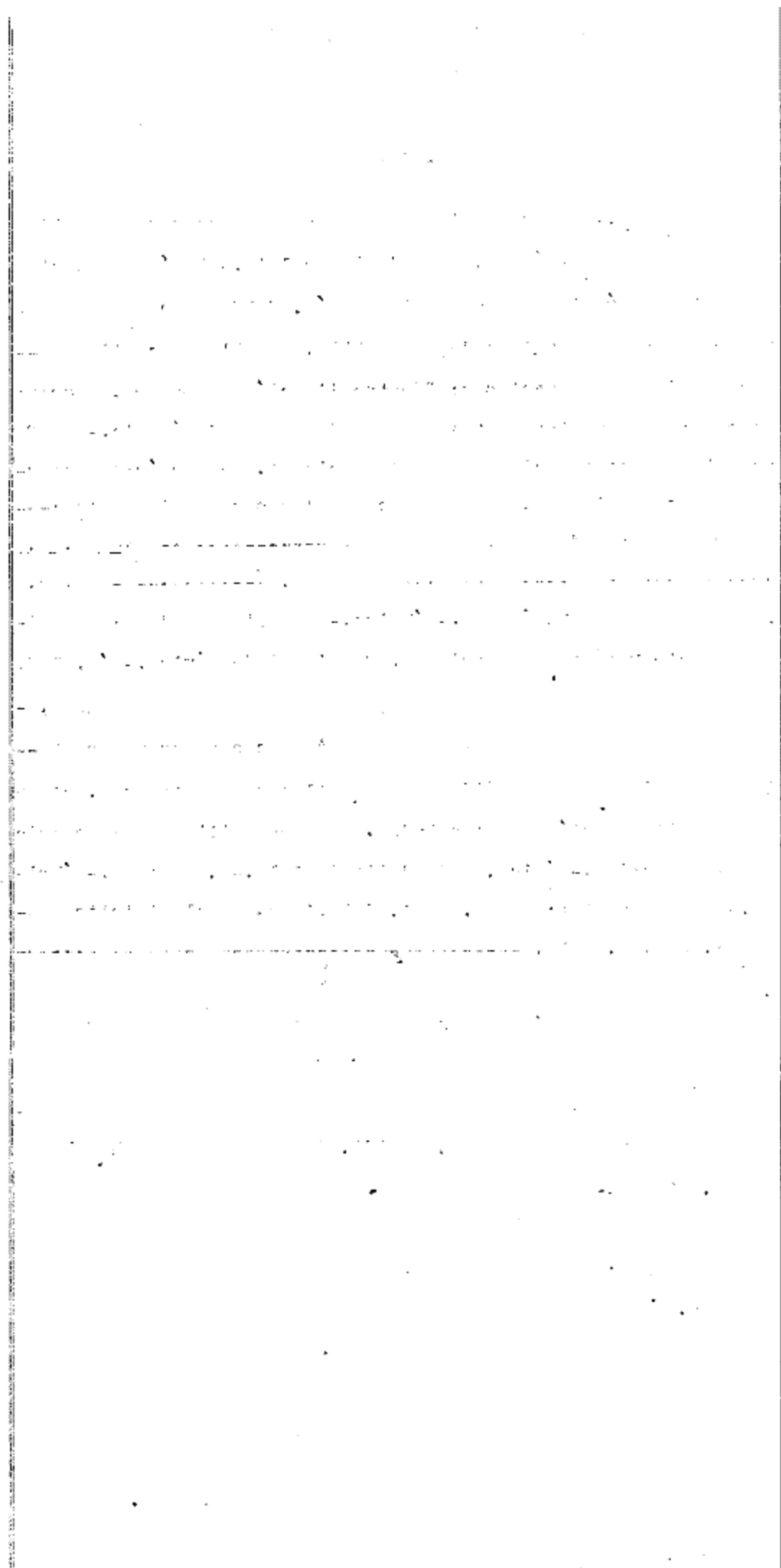
EL ADMINISTRADOR PRINCIPAL DEL TIMBRE EN EL DISTRITO FEDERAL, -  
CERTIFICA: que con esta fecha se pagaron ocho pesos valor de las estampillas que se fijaron y cancelaron en esta nota, conforme a la liquidación formada bajo la responsabilidad del notario que la suscribe.-México, 7 de julio de 1917.-M. Breceda.-Rúbrica.-Sello que dice: Admon. Pral. del Timbre en el Distrito Federal. Jul. 7. 1917. -----

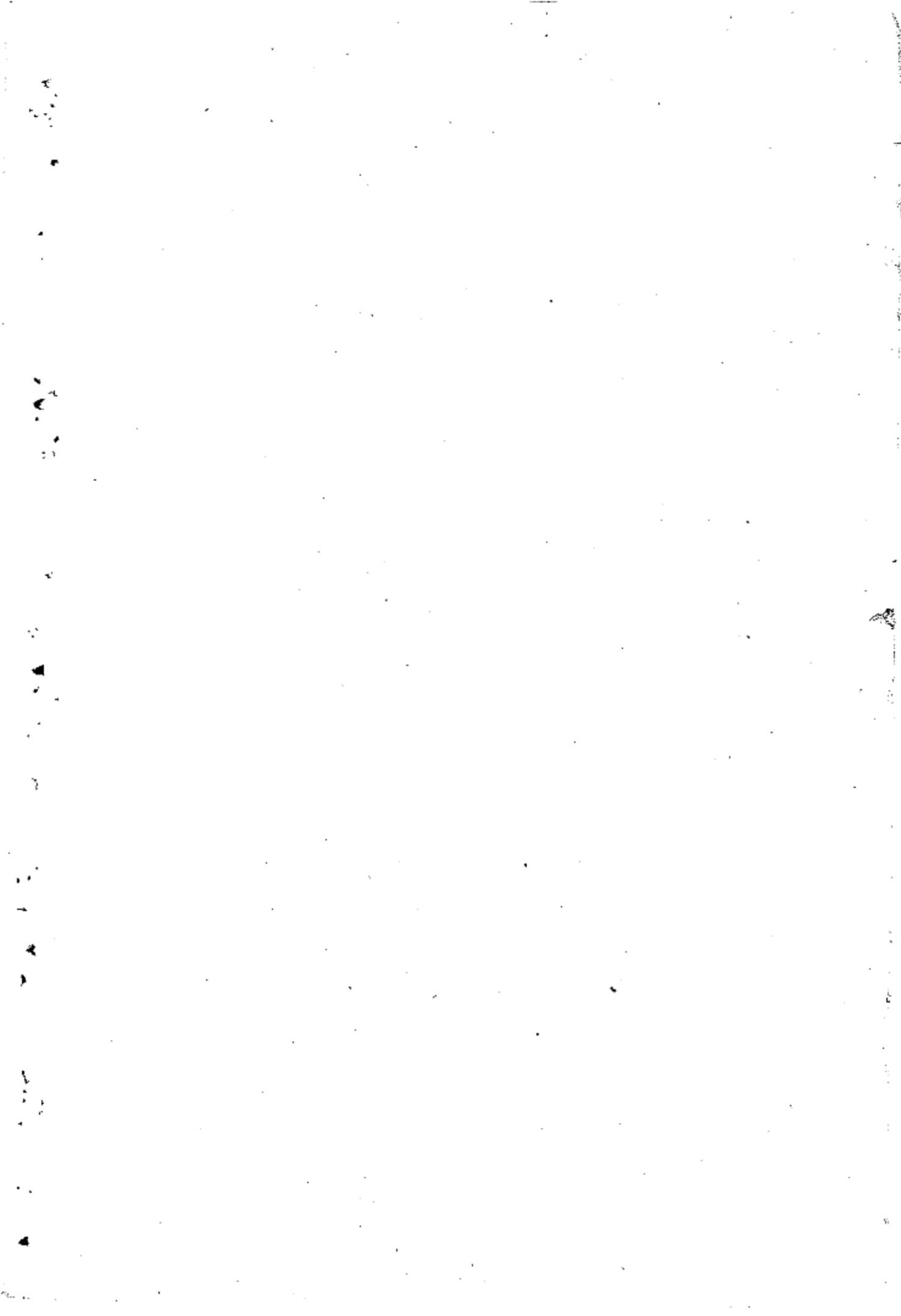
ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE SACA DE SU MATRIZ QUE OBRA EN EL PROTOCOLO DE MI CARGO PARA EL APODERADO SEÑOR DON JOSE VELA RUIZ A FIN DE QUE LE SIRVA DE TITULO CON QUE JUSTIFICAR SU PERSONALIDAD; VA CORREGIDO EN CUATRO FOJAS UTILES CON LOS TIMBRES DE LEY DEBIDAMENTE CANCELADOS Y CERTIFICO QUE DEL PRESENTE TESTIMONIO SE SACO COPIA EN PRENSA. MEXICO, JULIO SIETE DE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE. DOY FE.-

DERECHOS DEVENGADOS:

TRES PESOS.







18.

58 59

ANEXO .....  
 No 62/4 Lucasas, 2/4775-8

FECHA EN LA QUE DIJO EL EXPONENTE A REPRESENTACION DE LOS SE.  
HON. MAG. TURANO..... 27 de julio de 1917.....

[illegible]

FICHA DE LA ENTREVISTA. FICHA DE LA DEVOLUCION

agosto 7.      agosto 9.

Julio. 28      Julio 30

~~Cyprus~~ Sep. 13. (473)

Sept. 10 (452) Sep. 12.

Julio 30. Julio 21

Aug. 31                      Sep. 4.

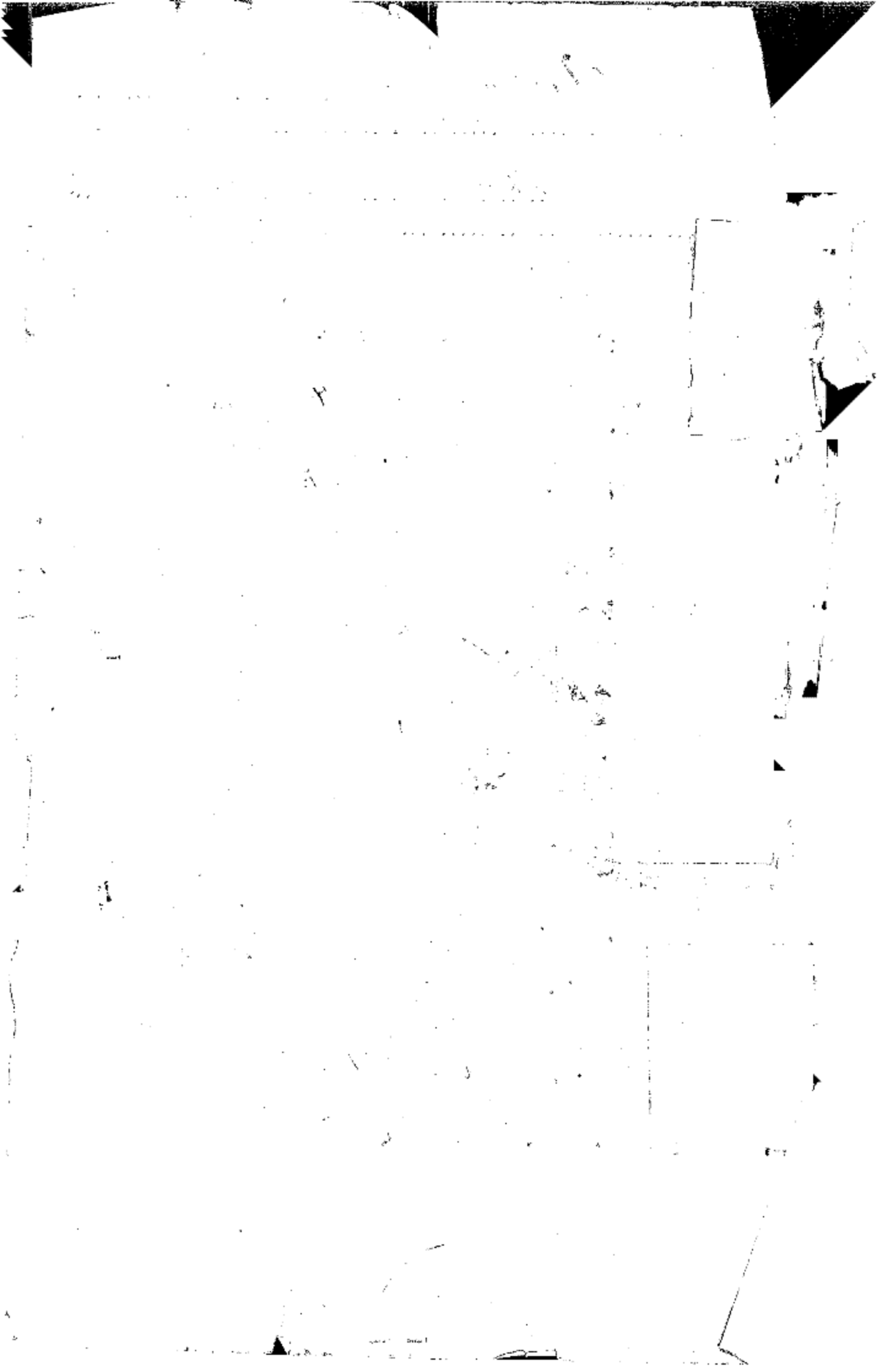
Aug 25. Ag. 30

agosto 9. agosto 10

Sep 5                      Sep 8

agosto ~~70~~<sup>24</sup> - 69. 25

Mos Enrique M. de los,





AMPARO: Avelino Montes.-Penal.-Yucatán.

El Juez de Distrito negó el amparo.

CONFIRMA.

REVOCA.

-----	DE VALLE.	-----
-----	GONZALEZ.	-----
-----	TRUCHUELO.	-----
-----	COLUNGA.	-----
-----	MARTINEZ ALOMIA.	-----
-----	URDAPILLETA.	-----
-----	GARCIA PARRA.	-----
-----	MORENO.	-----
-----	CRUZ.	-----
-----	PIMENTEL.	-----
-----	PDTE.DE LOS RIOS.	-----

México, 26 de septiembre de 1917.

Por mayoría de siete votos, de los Magistrados González, Truchuelo, Colunga, Martínez Alomía, Urdapilleta, Moreno y Pdte. de los Ríos, contra cuatro, de los Magistrados de Valle, García Parra, Cruz y Pimentel, se negó el amparo al quejoso, confirmándose el fallo del Juez de Distrito.

El Secretario Auxiliar:

*M. Briceño* *Canliar*





TRIBUNAL PLENO

12  
12

veintisiete de julio notificado el Señor Agente Lic. Salcedo del auto de revocación del actual, dijo: que lo oye y firma. Hoy fe.

*[Signature]* *[Signature]*

Acuerdo Pleno del día primero de agosto de mil novecientos diez y siete.

agreguense a este tomo el escrito de José Vela, téngasele como apoderado del señor civilino Montes agregándosele igualmente los documentos que acompañan.

Así lo acordó la Suprema Corte de Justicia de la Nación rubricando el Sr. Presidente

*[Signature]*

En tres de agosto notificado el Señor Agente Lic. Salcedo, dijo: que lo oye y firma. Hoy fe.

*[Signature]* *[Signature]*

En seis de agosto notificado el Señor Vela, dijo: que lo oye y firma. Hoy fe.

*[Signature]* *[Signature]*

México, Distrito Federal. Acuerdo Pleno del día veintiséis de septiembre de mil novecientos diez y siete.

VISTOS en revisión los autos del juicio de amparo promovido

por Avelino Montes, representado por el licenciado Gustavo Molina Font, contra actos del Gobernador y Comandante Militar de Yucatán, en su carácter de General en Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste, y contra los del Juez Instructor Militar de la Plaza de Mérida; vista la demanda de amparo, los informes de las autoridades responsables, la sentencia del Juez de Distrito de Mérida que negó el amparo y contra la cual se interpuso la revisión, lo alegado por el quejoso ante la Corte y lo pedido por el Ministerio Público.

RESULTANDO I: Por escrito de catorce de mayo de mil novecientos diez y siete, presentado en esa misma fecha ante el Juzgado de Distrito de Yucatán, el quejoso expresa que pide amparo de la Justicia Federal contra los actos siguientes: a. orden de incoar proceso dictada por el General en Jefe expresado, para abrirlo contra el quejoso como presunto responsable del delito de rebelión; b. auto del Juez Instructor Militar por el cual abre el expresado proceso contra el quejoso, en cumplimiento de la orden de proceder expresada; c. auto en que el Juez Instructor referido ordena la aprehensión del quejoso; y d. embargo precautorio de los bienes del quejoso y de sus productos, para responder de las responsabilidades civil que se dice resultar al quejoso por el delito que se le imputa. El quejoso considera que estos actos violan en su persona las garantías que consignan los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución vigente: el 13 porque siendo el quejoso civil y no militar, no está sujeto a la jurisdicción de los Tribunales Militares y no debe ser juzgado por ninguno de ellos; el 14 porque se le manda privar de su libertad y de sus bienes aplicándosele leyes que no son aplicables al caso, o dejándose de aplicar las que deben serlo; y el 16 porque se le causan molestias en su persona y en sus bienes sin que se funde y motive la causa legal del procedimiento y por autoridad notoriamente incompetente.

*Para a la foja 58*

61 60  
*Viene de la faja 12, vta.*

RESULTANDO II: De los informes de las autoridades ejecutoras y de las constancias relativas de los autos se viene en conocimiento de que los hechos ocurridos son los siguientes:

1o. En 13 de marzo de 1917 el Jefe del Ejército del Sureste remitió al Juez Instructor Militar de Mérida una denuncia hecha por el Agente del Ministerio Público del ramo, por la cual se imputa a Avelino Montes complicidad en el delito de rebelión porque se sigue proceso a Abel Ortiz Argumedo y socios, presentándose como base de la imputación, un cuaderno relativo a las audiencias del Subcomité de Agricultura y Selvicultura del Senado de los Estados Unidos, en las que aparecen declaraciones de Domingo Evia de las que se desprende la culpabilidad de Montes. La remisión se hizo para que el Juzgado practicara una averiguación previa, a cuyo efecto se dictó la orden respectiva. Se practicó dicha averiguación previa y con su resultado se dió cuenta al General en Jefe. 2o. En 6 de abril de 1917 el General en Jefe, en vista de que la averiguación previa arrojaba datos para presumir la responsabilidad penal de Montes, dictó orden de proceder contra él por el delito de rebelión. 3o. En 9 de abril de 1917, el Juez Instructor Militar, estimando estar comprobado el delito de rebelión y haber motivos suficientes para considerar responsable de él a Avelino Montes, abrió el proceso en forma y dictó orden de aprehensión en contra suya; y 4o. En 27 de abril de 1917 el Juez Instructor Militar, a petición del Ministerio Público del ramo y en atención a estar ya presentada la demanda de responsabilidad civil, decretó el embargo precautorio de los bienes del encausado Montes.

RESULTANDO III: También aparece de los dichos informes y constancias que con fecha 11 de mayo de 1917 el Juez Ins-

structor Militar, invocando el fundamento del artículo 13 de la Constitución vigente, se declaró incompetente para seguir conociendo del proceso y de sus cuestiones incidentales, así como del juicio de responsabilidad civil, y mandó remitir los autos al Juez común del ramo penal, en turno, lo que fué cumplido en seguida.

RESULTANDO IV: Seguido el juicio por sus trámites, el Juez de Distrito por sentencia de 8 de junio de 1917 lo falló negando el amparo solicitado; y por haber interpuesto el quejoso el recurso de revisión, han venido los autos en grado a la Suprema Corte que, previa la tramitación respectiva, procede a dictar la sentencia que corresponde.

CONSIDERANDO I: En vista de que todos los actos contra los cuales se ha pedido el amparo se verificaron, según se ha dicho ya, antes de que entrara en observancia la Constitución de cinco de febrero de 1917 actualmente vigente, la que comenzó a regir el primero de mayo del mismo año, se hace preciso decidir si al verificarse dichos actos había garantías individuales reclamables por la vía de amparo. Las garantías individuales no pueden ser otorgadas por una constitución o Ley fundamental, y no se hacen eficaces y prácticas sino por el medio que establece la misma ley que las otorga. Es pues, preciso fijar si al verificarse los actos que estiman violatorios había Constitución en observancia que pudiera ser violada. Según el artículo 128 de la Constitución de 1957, la observancia de ésta queda suspendida por alguna rebelión que la haga imposible, y sólo se restablece cuando el pueblo recobre su libertad; y es de todo sabido que por el cuartelazo de febrero del trece se interrumpió la observancia de la Constitución y se organizó un Gobierno de violencia, contrario a sus principios, como lo fué el de

Haerta, y que no se restableció el orden constitucional, interrumpido sino hasta el primero de mayo de mil novecientos diez y siete en que comenzó a regir la nueva Constitución de mil novecientos diez y siete. Así pues, en los meses de Marzo y abril de mil novecientos diez y siete, al verificarse los actos que por el amparo presente se reclaman, no estaba en observancia la Constitución de 57, y por no estar en observancia no podían ser violadas las garantías que ella otorga y que estaban entonces en suspenso. En cuanto a la Constitución de cinco de febrero de mil novecientos diez y siete, basta decir que comenzó a regir el primero de mayo de ese año, es decir, con posterioridad a la verificación de los hechos reclamados, para que se comprenda que esos hechos no pudieron violarla, puesto que aún no tenía el carácter de ley y no era obligatoria en observancia. De todo lo cual se desprende que no habiendo ninguna Constitución en observancia cuando se verificaron los actos reclamados, no pudo violarse con ellos ninguna garantía individual, puesto que estas están condicionadas a la vigencia de la Constitución en que se consignan.

CONSIDERANDO II: Pero aun en el caso de que se creyera que puede darse efecto retroactivo a la Constitución actual para juzgar según sus disposiciones los actos anteriores a su vigencia, se verá que no han sido violados como se pretende, sus artículos 13, 14 y 16. En efecto, no ha sido violado el artículo 13, porque tan pronto como empezó a regir la Constitución vigente, el Juez Militar declinó el conocimiento del proceso en el Juez Común, y desde ese momento el quejoso dejó de estar sujeto a la jurisdicción militar, siendo de notar que antes de regir esta Constitución podían los civiles ser juzgados por tribunales

819

militares en los casos previstos por la ley. No ha sido violado el artículo 14, porque tanto al dictarse la orden de proceder como al dictarse la orden de aprehensión, que aun no está ejecutada, el General en Jefe que dictó la primera y el Juez que dictó la segunda se ajustaron a las prescripciones legales, sin violar ninguna de las que contienen las leyes secundarias relativas, puesto que el quejoso no ha señalado ninguna como violada. Y no se ha violado el artículo 16 porque los Jueces militares eran competentes en abril de mil novecientos diez y siete para dictar orden de aprehensión por delitos militares, y tan pronto como dejaron de serlo, el de los autos pasó el conocimiento de ellos al Juez común; y porque al dictar tal orden de aprehensión se habían llenado ya los requisitos que ahora menciona como indispensables el citado artículo para poderla expedir. A lo expuesto debe agregarse que, en lo que mira al embargo precautorio, es éste un acto verificado en el curso de un juicio y que tiene recursos ordinarios que pueden enderezarse contra él para obtener su revocación, por lo cual no es de imposible reparación, y por consiguiente, careciendo de ese requisito, no es declamable por la vía de amparo, conforme a lo prevenido en la fracción IX del artículo 107 constitucional.

Por todo lo expuesto y con fundamento además en los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución, se resuelve:

PRIMERO: Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Yucatán en este amparo, y en consecuencia se declara: que la Justicia de la Unión no amparo ni protege a Avelino Montes contra la orden de proceder en



contra suya por el delito de rebelión dictada por el General en Jefe del Ejército del Sureste el seis de abril de mil novecientos diez y siete; contra la incoación del proceso respectivo y la orden de aprehensión dictada por el Juez Instructor Militar de Mérida el nueve de abril del mismo año; ni contra el embargo precautorio de sus bienes dictado por el mismo Juez Instructor el veintisiete de abril del propio año.

SEGUNDO: Notifíquese, librese la ejecutoria respectiva y remítase con los autos principales al Juez de Distrito, dedúzcase las copias reglamentarias para el Semanario Judicial, y en su oportunidad archívese el tomo.

Adi, por mayoría de siete votos, de los Magistrados González, Truchuelo, Colunga, Martínez Alomía, Moreno, Urdapilleta y Presidente de los Ríos, contra cuatro de los Magistrados de Valle, García Parra, Cruz y Pimentel, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, firmando el Presidente y Magistrados. Doy fe.

*Manuel Ríos*

*S. M. Mallory Alonzo*  
*José M. Truchuelo*

*H. M. Vidales* *Adm. Valle*

*Manuel*  
*E. Sánchez*  
*Enrique*

*Categoría con el original  
 de remitido por el Jefe  
 del Ejército del Sureste  
 a quien se encargó la redacción  
 del fallo. M. Ríos*

*Nº Bº*

*Castro y Alonzo*

En trece de febrero de mil novecientos diez  
y ocho, que se me pasó este expediente  
quedo notificado al C. Jefe Lic. Talca-  
do, dijo: lo ay, puede copiar simple  
y firmo.

M. Beltrán J.

En catorce del mismo febrero, le notifican  
la resolución anterior, al Sr. José Vile, apor-  
derado del C. Archivos eclesiales, por medio  
de instructivo que en el despacho sito en  
la segunda de felomeno <sup>decaute</sup> ~~clata~~ numero, por  
que penado para las notificaciones, recibí  
a las diez y cuatro de la mañana en aboga-  
do que firmo. R= decaute vale.

Lic. Benigno Molina Cerezo

M. Beltrán J.

En catorce del mismo febrero, que se libro  
oficio al C. Jefe de Distrito de Tucumán  
incertándole la parte dispositiva de  
la resolución anterior, para que la no-  
tifique a los interesados, según la  
minuta que bajo el numero 253, se  
agrega a folios sesenta y tres Cuote.

M. Beltrán J.

ay

Primera.

253

En el toca el juicio de amparo promovido por Aveldano Montes, contra actos del Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste y el Juez Instructor de la Plaza de Mérida, la Suprema Corte de Justicia, con fecha 26 de septiembre del año próximo pasado pronunció una resolución que con elaye con la proposición siguiente:

" PRIMERO: Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Yucatan, en este amparo, y en consecuencia se declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Aveldano Montes, contra la orden de proceder en contra suya por el delito de rebelión, dictada por el General en Jefe del Ejército del Sureste el seis de abril de mil novecientos diez y siete; contra la incoación del proceso respectivo y la orden de aprehensión dictada por el Juez Instructor Militar de Mérida el nueve de abril del mismo año; y contra el embargo precautorio de sus bienes dictado por el mismo Juez Instructor el veintisiete de abril del propio año."

Lo comunico a usted a reserva de remitirle el testimonio respectivo para que se sirva notificar la proposición inserta a los interesados y devolverme el presente diligenciado.

Protesto a usted mi consideración.

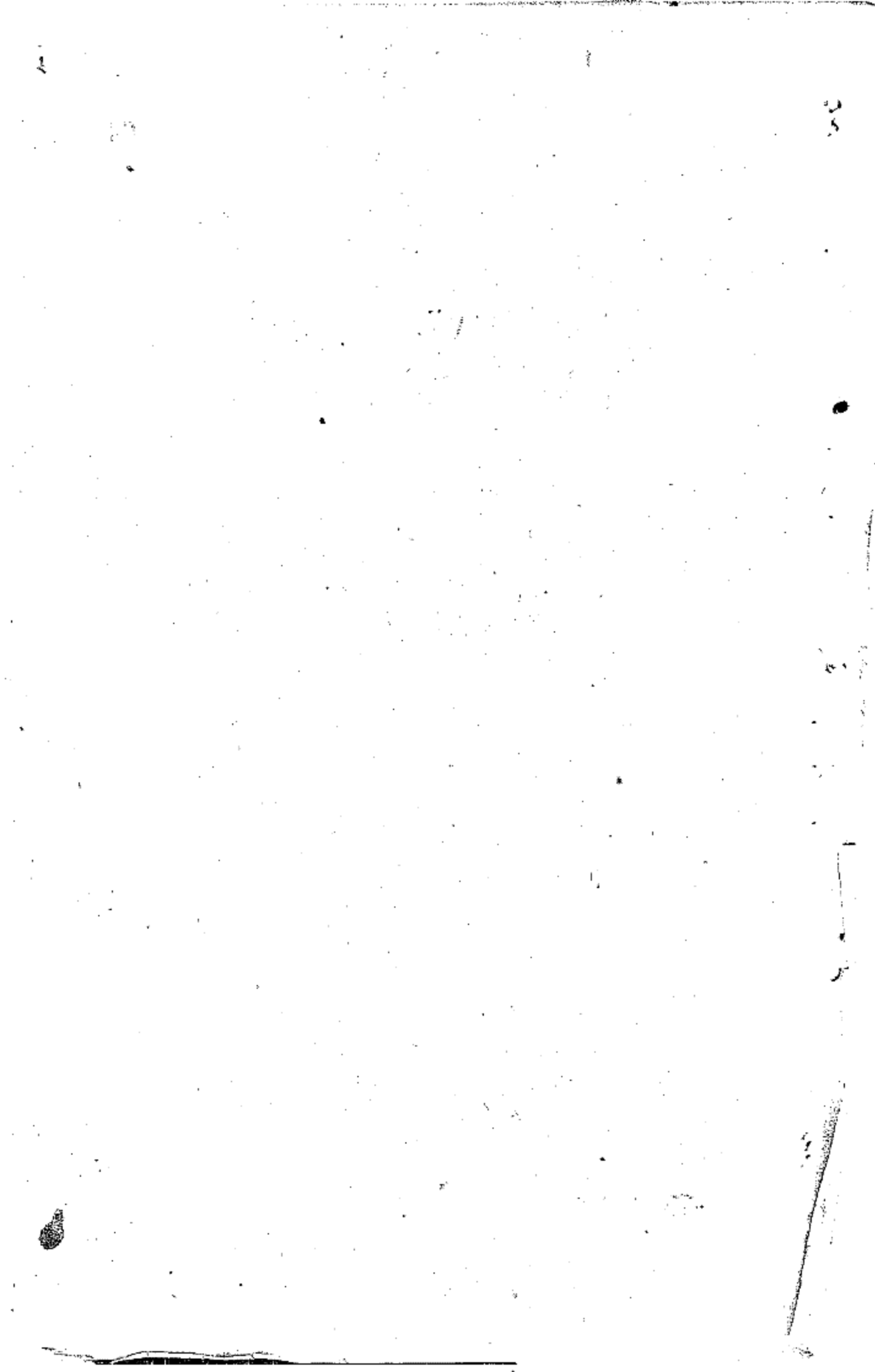
CONSTITUCION Y REFORMAS.- México, 14 de febrero de 1918.

El Secretario de Acuerdos.



Al C. Juez de Distrito de Yucatan.  
LAL.

M. R. I. S. A.





PRIMERA.

Nº 357.

En 47 fojas remito a Ud. los autos del juicio de amparo -  
promovido ante ese Juzgado por Avellina Montes, contra actos del -  
Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste y el Jefe Instructor de -  
la Plaza de Mérida, así como en tres fojas copia de la ejecuto-  
ria pronunciada por esta Corte en dicho asunto.

Protesto a Ud. mi consideración.

Constitución y Reformas. México, febrero 25 de 1915.

El Secretario de Acuerdos.

Al C. Juez de Distrito de Yucatán.

Mérida.

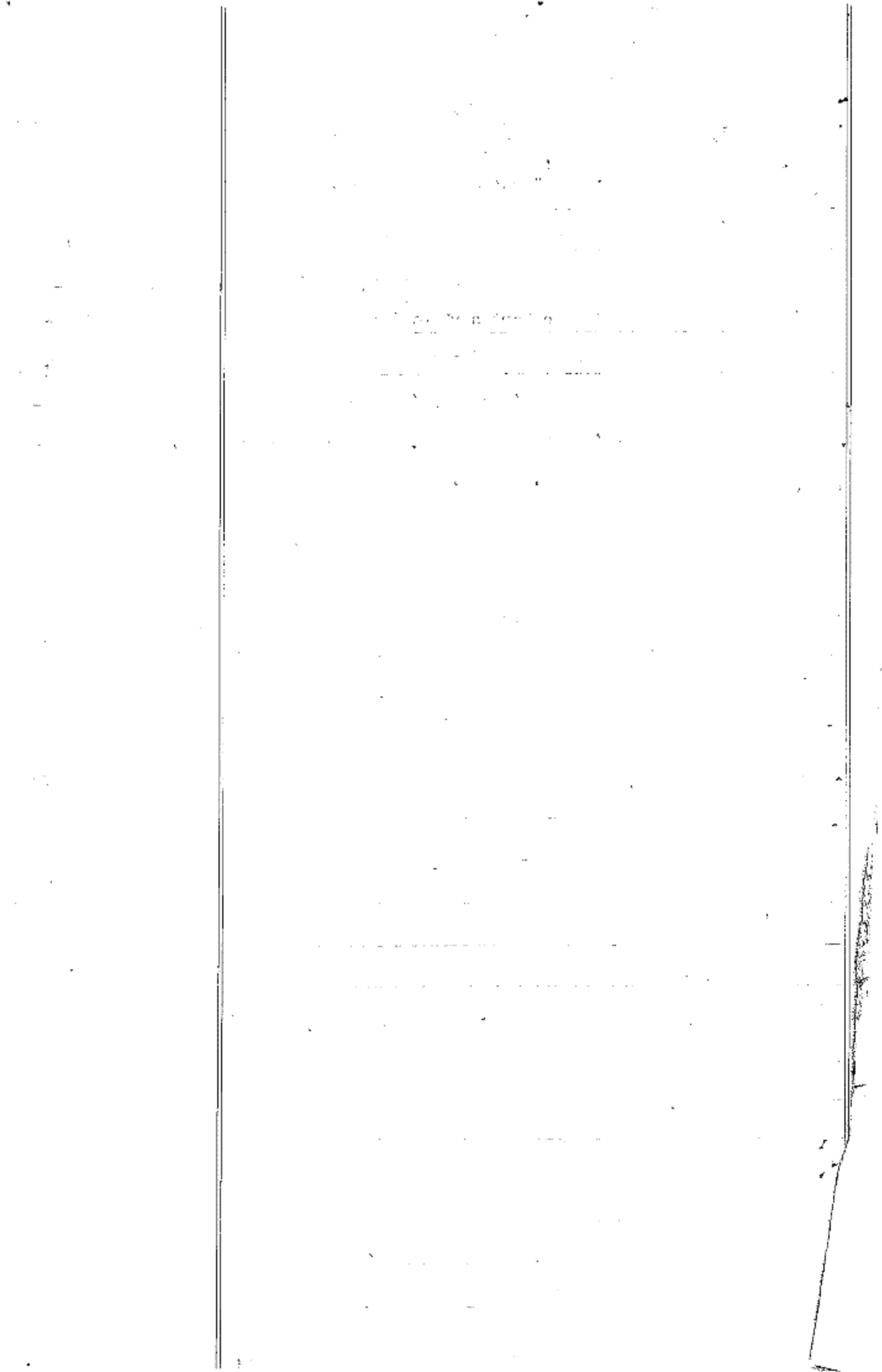




cuerto Pleno del día dieciocho de marzo de mil novecientos -  
dieciocho.

"Agréguese a este toca el ocurso de José Vela de -  
fecha diecisiete de agosto de mil novecientos diecisiete, re-  
cibido el quince del actual, como consta de la razón del -  
Oficial de Partes, y devuélvase el testimonio que solicita -  
dejando en autos copia certificada a costa del interesado".

Así lo acordó la Suprema Corte de Justicia de la -  
Nación rubricando el C. Magistrado Colunga en funciones de -  
Presidente.-Doy fe.





CC. PRESIDENTE Y MAGISTRADOS DE LA SUPREMA  
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION:

JOSE VELA, en el juicio de amparo promovido por  
el Lic. Gustavo Molina Font, en representación del se-  
ñor don Avelino Montes, contra actos del Gral. en Jefe  
del Cuerpo de Ejército del Sureste y del Juez Instruc-  
tor Militar de la Plaza de Mérida, Yucatán,

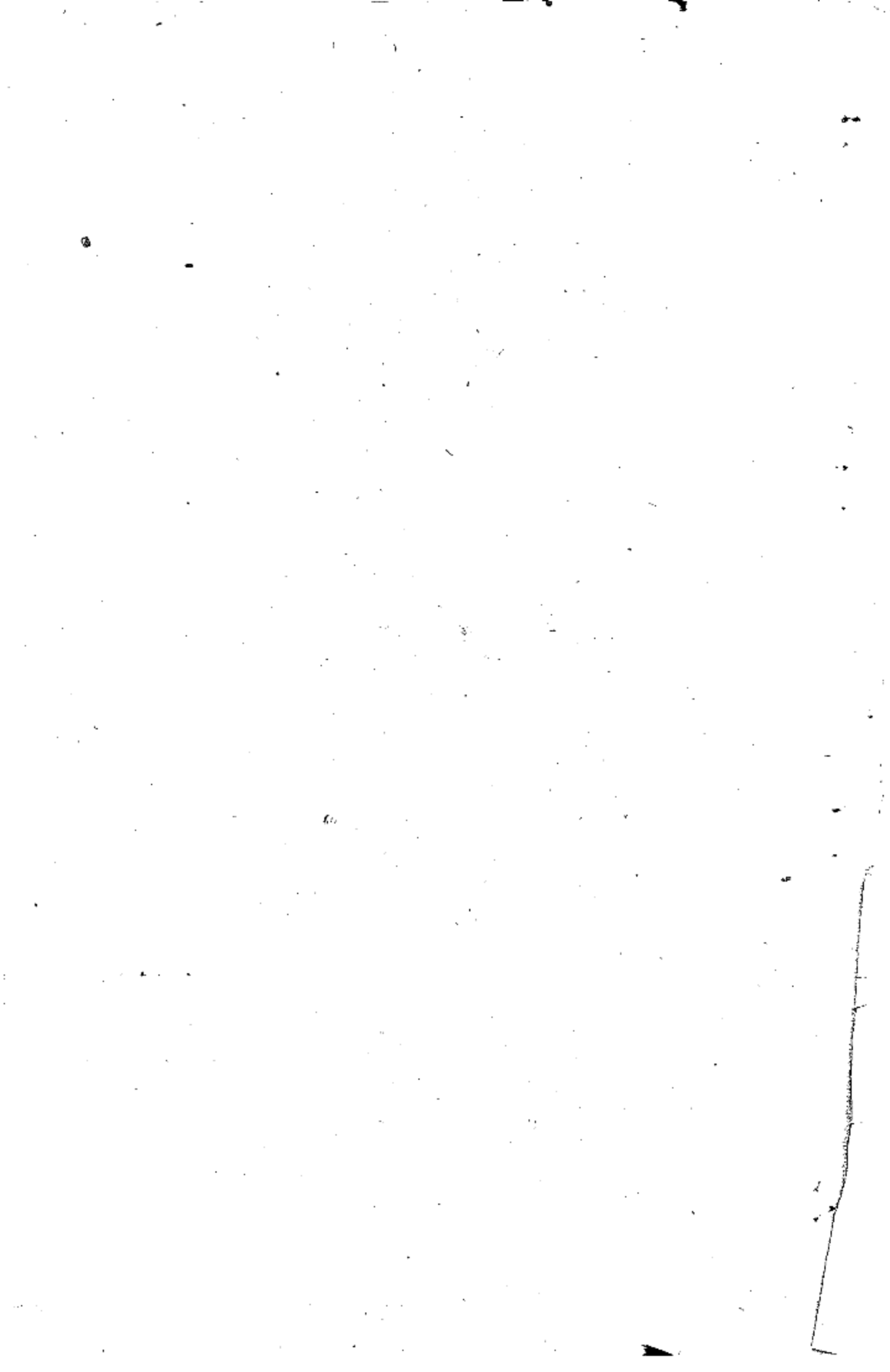
a ustedes respetuosamente vengo a pedir se sirvan acordar se  
desglose y se me devuelva, previa toma de razón, el  
testimonio de la escritura de mandato que me accredi-  
ta como apoderado del referido señor Montes.

México, agosto diecisiete de mil novecientos  
diecisiete.

*Jose Vela*

9421  
Recibido a las nueve de la mañana del quince  
de marzo - de mil novecientos diez y ocho de  
interesado

Conste Martínez  
G. de P.





*fallar*

67  
68

Constitución y Reformas.

Mérida, 15 de marzo de 1918.

Al C.

Secretario de Acuerdos de la H. Suprema  
Corte de Justicia de la Nación.

No. 988.

México, D.F.

Con el oficio de Ud. número 357 de veintitres de febrero último, de la sección primera, se ha recibido en este Juzgado con cuarenta y siete fojas útiles el juicio de amparo promovido por Avelino Montes contra actos del Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste y el Juez Instructor de esta Plaza, y con tres fojas útiles se recibió la ejecutoria respectiva.

Protesto a Ud. mi atenta consideración.

El Juez de Distrito.

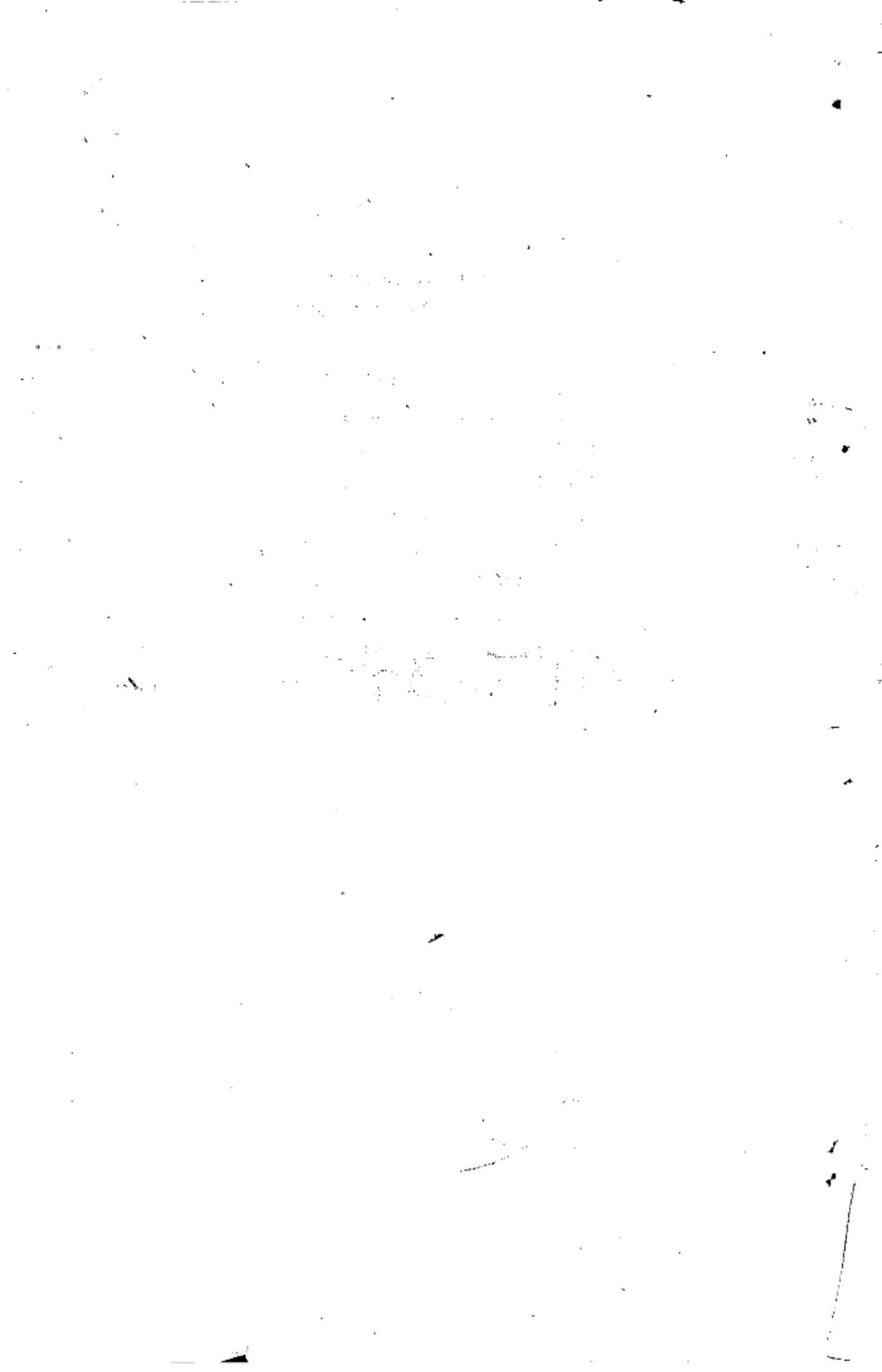
*Vicente Terrie López.*

9748  
Recibido a las *once* de la *mañana* del *veintiocho*  
de *marzo* de mil novecientos *dieciocho* y *seis* por  
correo.

*Const. Martínez*  
Of. de P.

Acuerdo Pleno del día *veintiocho* de *marzo*  
de mil novecientos *dieciocho*  
"Agréguese este oficio a sus antecedentes para los efectos a que haya lugar."  
El Magistrado Colunga en funciones de  
Presidente

*[Signature]*





SECCION Primera.

Núm. 253

*México, abril treinta  
de mil novecientos  
dieciséis.*

*"Aguirre este  
oficio a sus comi-  
sionados para lo efecto  
que haya lugar."*

*El Jefe de la Sup.  
Corte de Justicia.*

*El Jefe de la Sup.  
Corte de Justicia.*

En el toca al juicio de amparo promovido por Avelino  
Montes, contra actos del Jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste  
y el Juez Instructor de la Plaza de Mérida, la Suprema Cor-  
te de Justicia, con fecha 26 de septiembre del año próximo pa-  
sado pronunció una resolución que con oluce con la proposición  
siguiente:

" PRIMERO: Se confirma la sentencia pronunciada por el  
Juez de Distrito de Yucatan, en este amparo, y en consecuencia  
se declara que la Justicia de la Unión no ampara ni protege  
a Avelino Montes, contra la orden de proceder en contra suya  
por el delito de rebelión, dictada por el General en Jefe del  
Ejército del Sureste el seis de abril de mil novecientos diez  
y siete; contra la incoación del proceso respectivo y la orden  
de aprehensión dictada por el Juez Instructor Militar de Mérida  
el nueve de abril del mismo año; y contra el embargo pre-  
cautorio de sus bienes dictado por el mismo Juez Instructor

el veintisiete de abril del propio año!

Lo comunico a usted a reserva de remitirle el testimo-  
nio respectivo para que se sirva notificar la proposición in-  
serta a los interesados y devolverme el presente diligencia-  
do.

Protesto a usted mi consideración.

CONSTITUCION Y REFORMAS.- México, 14 de febrero de 1916.

El Secretario de Acuerdos.

*[Firma manuscrita]*

*Recibido a las once de la mañana del veinti-*

*seis de abril de mil novecientos diez y seis, por  
correo.*

*Const. Martínez*  
*[Firma manuscrita]*

Al C. Juez de Distrito de Yucatan.

LML.

Mérida, 12 doce de marzo de 1919 mil novecientos diez y ocho.



Por recibido: obséquiese en sus términos, y cumplido que sea, devuélvase, previa toma de razón en el libro respectivo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firmó el Licenciado Vicente Peniche López, Juez de Distrito en el Estado. Lo certifico:

*Vicente Peniche López*  
*María Encarnación*

En la misma causa.

En trece del mismo mes y año, se emitió la resolución y se firmó que antecede a las autoridades correspondientes. Cúmplase. *Comisario*

En la misma fecha notifiqué el auto que antecede al Licenciado Justo Altolina Font y dijo: que queda enterado. *Lo puse*

En la misma fecha quedó enterado el Ministerio Público. *Lo puse*

*Por J. L. Font*

Con una foja útil cierra este despacho para remitir a la Superioridad. Cúmplase. *Comisario*